



REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

30ª REUNION – 27ª SESION ORDINARIA
6 DE DICIEMBRE DE 2006

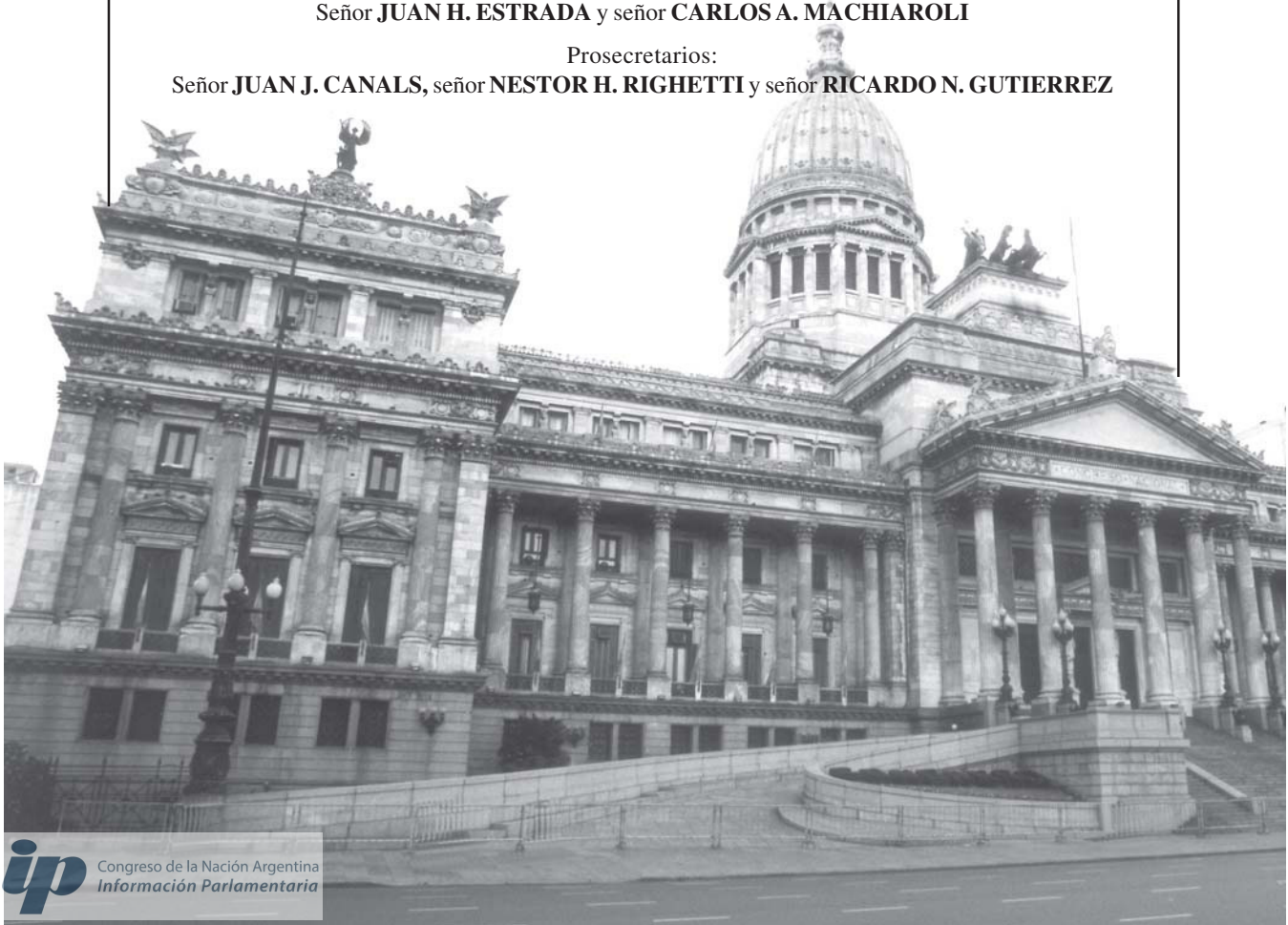
Presidencia del señor vicepresidente de la Nación, don DANIEL O. SCIOLI,
del señor presidente provisional del Honorable Senado,
doctor JOSE J. B. PAMPURO, del señor vicepresidente del Honorable Senado,
doctor MARCELO E. LOPEZ ARIAS y de la señora vicepresidenta 1ª
del Honorable Senado, licenciada MIRIAN B. CURLETTI

Secretarios:

Señor **JUAN H. ESTRADA** y señor **CARLOS A. MACHIAROLI**

Prosecretarios:

Señor **JUAN J. CANALS**, señor **NESTOR H. RIGHETTI** y señor **RICARDO N. GUTIERREZ**



PRESENTES:

BAR, Graciela Y.
 BASUALDO, Ricardo G.
 BORTOLOZZI DE BOGADO, Adriana R.
 BUSSI, Ricardo A.
 CAPARRÓS, Mabel L.
 CAPITANICH, Jorge M.
 CAPOS, Liliana
 CASTILLO, Oscar A.
 CLOSS, Maurice F.
 CURLETTI, Mirian B.
 DANIELE, Mario D.
 FALCÓ, Luis
 FELLNER, Liliana B.
 FERNÁNDEZ de KIRCHNER, Cristina E.
 FERNÁNDEZ, Nicolás A.
 GALLEGGO, Silvia E.
 GALLIA, Sergio A.
 GIOJA, César A.
 GIRI, Haide Delia
 GIUSTI, Silvia E.
 GIUSTINIANI, Rubén H.
 GÓMEZ DIEZ, Ricardo
 GONZÁLEZ de DUHALDE, Hilda
 GUINLE, Marcelo A. H.
 IBARRA, Vilma L.
 ISIDORI, Amanda M.
 JAQUE, Celso A.
 JENEFES, Guillermo R.
 LATORRE, Roxana I.
 LEGUIZAMÓN, María L.
 LÓPEZ ARIAS, Marcelo E.
 MARÍN, Rubén H.
 MARINO, Juan C.
 MARTÍNEZ, Alfredo A.
 MARTÍNEZ PASS de CRESTO, Laura
 MASSONI, Norberto
 MASTANDREA, Alicia E.
 MENEM, Carlos S.
 MERA, Mario R.
 MIRANDA, Julio A.

MORALES, Gerardo R.
 NEGRE de ALONSO, Liliana T.
 PÁMPURO, José J. B.
 PÉRSICO, Daniel R.
 PETCOFF NAIDENOFF, Luis C.
 PICHETTO, Miguel Á.
 PINCHETTI de SIERRA MORALES, Delia N.
 QUINTELA, Teresita N.
 REUTEMANN, Carlos A.
 RIOFRIO, Marina R.
 RÍOS, Roberto F.
 ROSSI, Carlos A.
 SAADI, Ramón E.
 SÁNCHEZ, María D.
 SANZ, Ernesto R.
 SAPAG, Luz M.
 TAFFAREL, Ricardo C.
 TERRAGNO, Rodolfo H.
 URQUÍA, Roberto D.
 VIANA, Luis A.
 VIGO, Élida M.
 VIUDES, Isabel J.
 ZAVALÍA, José L.

AUSENTES CON AVISO:

CASTRO, María E.
 COLOMBO, María T.
 ESCUDERO, Sonia M.
 MAYANS, Miguel Á.
 MAZA, Ada M.
 RODRÍGUEZ SAÁ, Adolfo
 SALVATORI, Pedro

EN COMISION:

PERCEVAL, María C.

CON LICENCIA:

KIRCHNER, Alicia M. A.

SUMARIO

1. Manifestaciones en minoría. (Pág.)
2. Izamiento de la bandera nacional. (Pág.)
3. Plan de labor. (Pág.)
4. Asuntos entrados. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo. (Pág.)
5. Consideración en conjunto de órdenes del día. (Pág.)
 - OD 1.186: I Encuentro de Niños de la Región en su Día. (Pág.)
 - OD 1.187: Implementación de medidas para dis-

minuir la presión fiscal en las provincias del Norte Argentino tendientes a facilitar la creación del empleo genuino. (Pág.)

OD 1.191: Homenaje en el aniversario de la creación de la Escuela "Simón de Iriondo", Santa Fe. (Pág.)

OD 1.202: Declaración de interés educativo de los libros *Volviendo del infierno* (Carta abierta de una enferma de anorexia) y *Bulimia, el secreto que mata*, de María Cristina Mariani. (Pág.)

OD 1.204: Acrecentamiento de las frecuencias de vuelo con destino a diferentes provincias con escala en San Luis. (Pág.)

- OD 1.205: Remisión de una copia del programa quinquenal de obras que la empresa AySA ha puesto a consideración del Poder Ejecutivo. (Pág.)
- OD 1.206: Control sobre condiciones de funcionamiento y seguridad de los pasos a nivel de las líneas ferroviarias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. (Página)
- OD 1.207: Incorporación de las empresas de transporte automotor de pasajeros del interior al acta firmada por la UTA. (Pág.)
- OD 1.208: Inclusión de la ruta nacional 16 en la planificación de obras a realizarse para todo el territorio nacional. (Página)
- OD 1.209: Régimen especial de tarifas aéreas para estudiantes terciarios y universitarios. (Pág.)
- OD 1.227: Reconocimiento al músico Juan Carlos Fredes. (Pág.)
- OD 1.228: Declaración de interés educativo y cultural del documental *El toro por las astas*. (Pág.)
- OD 1.230: Satisfacción por el reconocimiento recibido por el laboratorio de fibras textiles del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) con sede en Bariloche. (Pág.)
- OD 1.231: Satisfacción por una resolución del SENASA que reconoció a diversos cultivos como libres de plagas. (Página)
- OD 1.232: Declaración de interés de la campaña Compre Orgánico Argentino, impulsada por el Sector Orgánico Argentino (SOA). (Pág.)
- OD 1.236: Declaración de interés científico de la construcción de un nuevo satélite de aplicaciones científicas por parte del INVAP en conjunto con la CONAE. (Pág.)
- OD 1.238: Información sobre diversos aspectos relacionados con el Plan Nacional del Manejo del Fuego. (Pág.)
- OD 1.239: Beneplácito por el freno del deterioro de la capa de ozono y la estabilización del agujero de ozono. (Página)
- OD 1.240: Declaración de interés turístico de la apertura al público del criadero de especies marinas en San Antonio Oeste, Río Negro. (Pág.)
- OD 1.249: Declaración de interés deportivo y educativo de las actividades desarrolladas en nuestro país por Nuevas Olimpíadas Especiales Argentina (NOEA), respecto a la competición atlética para niños y adultos con discapacidad mental. (Pág.)
- OD 1.282: Solicitando la construcción de un nuevo edificio para la Escuela de Educación Técnica N° 5.132 de Rosario de la Frontera, provincia de Salta. (Pág.)
6. Modificación del plan de labor. (Pág.)
7. Protocolo de Adhesión de Venezuela al Mercosur. (Pág.)
8. Ley de Educación Nacional. (Pág.)
9. Modificación del plan de labor. (Pág.)
10. OD 1.319 (NI): prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas. (Página)
11. Consideración en conjunto de órdenes del día con proyectos de ley. (Pág.)
- OD 1.188: Acuerdo de Asistencia Mutua Judicial en Materia Penal con la República Portuguesa. (Pág.)
- OD 1.293: Acuerdo de Cooperación Agrícola con el Reino de Marruecos. (Página)
- OD 1.142: Creación del Consejo Nacional de la Juventud. (Pág.)
- OD 1.251: Transferencia de un inmueble propiedad del Estado nacional a la provincia de Entre Ríos. (Pág.)
- OD 1.096: Denominación "Camino al Fin del Mundo" de la ruta nacional 3. (Página)
- OD 1.097: Denominación como "Padre Jesús Zink, Cura Gaucho" y "Monseñor Peyrou" a tramos de la ruta nacional 3. (Pág.)
- OD 1.043: Traducción al español de los nombres en lenguas indígenas de los pueblos en todo el territorio nacional. (Pág.)

- OD 1.074: Declaración como monumento histórico nacional del edificio de la Escuela “Zorrilla” en Salta. (Pág.)
- OD 1.034: Transferencia de un inmueble a la provincia de Salta. (Pág.)
- OD 1.073: Día de las Heroínas y Mártires de la Independencia de América. (Pág.)
- OD 603: Programa Nacional de Promoción y Producción de la Quinua. (Pág.)
- OD 1.106: Transferencia de diversos inmuebles a la provincia del Chaco. (Pág.)
- OD 931: Impresión de una moneda conmemorativa del Día Americano del Indio. (Pág.)
12. OD 1.321/06 y CD 141/06: Prórroga de la vigencia del derecho a la exportación de hidrocarburos - Ampliación del importe de colocación de bonos de consolidación. (Pág.)
13. S.-1.998 y 3.660/05, y OD 1.332 NI: Protección de emblemas de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. (Pág.)
14. S.-1.840/05, conj. 91/06: Régimen nacional para el uso de fuentes renovables de energía. (Página)
15. C.D.-131/06: Derogación de la ley 25.611. (Página)
16. Retiro de un proyecto. (Pág.)
17. Consideración en conjunto de proyectos sobre tablas. (Pág.)
- S.-4.168/06: Acuerdo entre la empresa SanCor y la multinacional Adecoagro. (Página)
- S.-3.930/06: V Edición de la Fiesta del Río. Declaración de interés. (Pág.)
- S.-3.791/06: IV Edición de la Maratón Nacional de Lectura. Declaración de interés. (Pág.)
- S.-3.108/06: Producción de uranio enriquecido y de agua pesada. (Pág.)
- S.-3.782/06: *Work shop* de Fedecatur. Declaración de interés. (Pág.)
- S.-3.786/06: IX Jornadas por el Cuidado de la Mujer Embarazada y el Niño. Declaración de interés. (Pág.)
- S.-3.909/06: Tarea realizada por la Federación de Cooperadores Escolares en Santa Fe. (Pág.)
- S.-4.269/06: V Vuelta Atlética. Declaración de interés. (Pág.)
- S.-3.716/06: Fiesta Nacional del Sol. Declaración de interés. (Pág.)
- S.-4.342/06: Celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos. (Pág.)
- S.-4.237/06: I Feria de Emprendedores y Empresarios “EmprendeChaco”. Declaración de interés. (Pág.)
- S.-4.341/06: Repudio de la entonación de cánticos antisemitas. (Pág.)
- S.-4.340/06: Beneplácito por obtención de medallas en los VIII Juegos Sudamericanos Odesur. (Pág.)
- S.-3.901/06: Celebración del Día Nacional del Tango. (Pág.)
- S.-3.999/06: Homenaje a los caídos en los hechos de represión ocurridos en el mes de diciembre del 2001. (Pág.)
- S.-4.286/06: Homenaje al teniente general Juan E. Pedernera. (Pág.)
- S.-4.412/06: Aniversario de la Universidad Nacional del Nordeste. (Pág.)
- S.-4.416/06: I Fiesta Provincial del Montado y el Jinete. Declaración de interés. (Página)
- S.-4.418/06: Aniversario de la Unión Industrial de Córdoba. (Pág.)
- S.-3.976/06: Declaración de interés parlamentario del II Congreso Internacional Extraordinario de Filosofía, a realizarse en la ciudad capital de la provincia de San Juan. (Pág.)
18. Apéndice. (Pág. ...)

—En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 12 y 19 del miércoles 6 de diciembre de 2006:

1

MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Presidente. — Solicito que los ayudantes de los bloques llamen a los señores senadores para que bajen al recinto, de modo de poder así dar comienzo rápidamente a la sesión.

Hay cincuenta señores senadores en la casa y casi veinticinco en el recinto.

–Se continúa llamando.

–A las 12 y 30:

Sr. Presidente. – Por favor, solicito a los ayudantes de los bloques que llamen a los señores senadores que están en las comisiones o en sus despachos.

Con la presencia de cinco senadores más podríamos dar comienzo a la sesión.

–Se continúa llamando.

–A las 12 y 40:

Sr. Presidente. – Hay quórum. La sesión abierta.

2

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. – Invito al señor senador por el Neuquén, Sergio Adrián Gallia, a izar la bandera nacional en el mástil del recinto y a los presentes a ponerse de pie.

–Puestos de pie los presentes, el señor senador Gallia procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (*Aplausos.*)

3

PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas de los señores senadores el plan de labor aprobado en el plenario de labor parlamentaria celebrado ayer.

–El texto es el siguiente:

PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA PARA LA SESIÓN DEL DÍA 06-12-2006

Consideración en conjunto de los Ordenes del Día con proyectos de comunicación, resolución o declaración, que por Secretaría se enunciarán.

Tratamientos sobre tablas acordado:

–Dictamen en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional sobre Ley de Educación Nacional. (P.E.-424/06.)

–Consideración de los órdenes del día con proyectos de ley: 1.188, 1.293, 1.321, 1.142, 1.251, 1.096, 1.097, 1.043, 1.074, 1.034, 1.073, 603, 1.106, 931, 1.248 y 907.

Tratamiento sobre tablas a solicitar:

–Dictamen en los proyectos de ley de varios señores senadores, modificando diversos artículos del Código Penal (S.-1.712/05 y otros). (O.D.-1.319 NI.)

–Dictamen en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional, aprobando el protocolo de adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al Mercosur. (P.E.-423/06) (O.D.-1316 NI.)

–Proyecto de ley en revisión, disponiendo la ampliación del importe máximo de colocación de bonos de consolidación y de bonos consolidación de deudas previsionales. (C.D.-141/06.)

–Dictamen en los proyectos de ley de la senadora Escudero y de los senadores Perceval y Agúndez, sobre protección de los emblemas de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. (S.-1.998 y 3.660/05, Orden del Día 1.332 NI.)

–Modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley que le fuere pasado en revisión, creando el régimen nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinada a la producción de energía eléctrica. (S.-1.840/05.)

–Proyecto de declaración del senador Giustiniani, sobre acuerdo entre la empresa SanCor y la multinacional Adecoagro. (S.-4.168/06.)

–Proyecto de declaración de la senadora Martínez Pass de Cresto, declarando de interés la V Edición de la Fiesta del Río. (S.-3.930/06.)

–Proyecto de declaración de la senadora Martínez Pass de Cresto declarando de interés la IV Edición de la Maratón Nacional de la Lectura. (S.-3.791/06.)

–Proyecto de declaración de la Senadora Martínez Pass de Cresto, sobre producción de uranio enriquecido y de agua pesada. (S.-3.108/06.)

–Proyecto de declaración de la senadora Martínez Pass de Cresto, declarando de interés cultural y turístico el *Workshop* de Fedecatur. (S.-3.782/06.)

–Proyecto de declaración de la senadora Martínez Pass de Cresto, declarando de interés las IX Jornadas por el Cuidado de la Mujer Embarazada y el Niño. (S.-3.786/06.)

–Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, sobre la tarea realizada por la Federación de Cooperadores Escolares en Santa Fe. (S.-3.909/06.)

–Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, declarando de interés la V Vuelta Atlética. (S.-4.269/06.)

–Proyecto de declaración de la senadora Riofrio, declarando de interés la Fiesta Nacional del Sol. (S.-3.716/06.)

–Proyecto de declaración de la senadora Curletti, adhiriendo a la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos. (S.-4.342/06.)

–Proyecto de declaración de la senadora Mastrandrea, declarando de interés la I Feria de Emprendedores y Empresarios “Emprendehaco”. (S.-4.237/06.)

–Proyecto de declaración de la senadora Curletti repudiando la entonación de cánticos antisemitas durante un partido de fútbol. (S.-4.341/06.)

–Proyecto de declaración de la senadora Curletti, expresando beneplácito por la obtención de medalla de oro y de plata en los VIII Juegos Sudamericanos Odesur. (S.-4.340/06.)

–Proyecto de declaración de los senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso, adhiriendo a la celebración del Día Nacional del Tango. (S.-3.601/06.)

–Proyecto de declaración de los senadores Negre de Alonso y Rodríguez Saá, sobre homenaje a los caídos en los hechos de represión ocurrido en el mes de diciembre de 2001. (S.-3.999/06.)

–Proyecto de declaración de la senadora Negre de Alonso y otros, rindiendo homenaje al teniente general Juan E. Pedernera. (S.-4.286/06.)

–Proyecto de declaración de la senadora Viudes, adhiriendo a un nuevo aniversario de la Universidad Nacional del Nordeste. (S.-4.412/06.)

–Proyecto de declaración de la senadora Viudes, declarando de interés la I Fiesta Provincial del Montado y el Jinete. (S.-4.416/06.)

Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

Sr. Presidente. – Corresponde proceder a su votación.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Resulta aprobado.

4

ASUNTOS ENTRADOS

Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo

Sr. Presidente. – De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del reglamento, la Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio intranet de la lista de asuntos ingresados hasta la fecha.

Por Secretaría se procederá a dar lectura del mensaje remitido por el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar acuerdo a efectos de complementar lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento del Honorable Senado.

Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje 1.788/06, solicitando acuerdo para promover al grado inmediato superior *post mortem*, con fecha 24 de marzo de 1976, al extinto teniente coronel retirado Bernardo Albarte.

Sr. Presidente. – Se gira a la Comisión de Acuerdos.

5

CONSIDERACION EN CONJUNTO DE ORDENES DEL DÍA

Sr. Presidente. – Corresponde la consideración en conjunto de los órdenes del día con proyectos de comunicación, resolución o declaración sin observaciones que por Secretaría se enunciarán.

Sr. Secretario (Estrada). – Ordenes del Día 1.186 y 1.187, 1.191, 1.202, 1.204 a 1.209, 1.227 y 1.228, 1.230 a 1.232, 1.236, 1.238 a 1.240, 1.249 y 1.282.

–Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son los siguientes:

OD 1.186: I Encuentro de Niños de la Región en su Día.

OD 1.187: Implementación de medidas para disminuir la presión fiscal en las provincias del Norte Argentino tendientes a facilitar la creación del empleo genuino.

OD 1.191: Homenaje en el aniversario de la creación de la Escuela “Simón de Iriondo”, Santa Fe.

OD 1.202: Declaración de interés educativo de los libros *Volviendo del infierno* (Carta abierta de una enferma de anorexia) y *Bulimia, el secreto que mata*, de María Cristina Mariani.

OD 1.204: Acrecentamiento de las frecuencias de vuelo con destino a diferentes provincias con escala en San Luis.

OD 1.205: Remisión de una copia del programa quinquenal de obras que la empresa AySA ha puesto a consideración del Poder Ejecutivo.

OD 1.206: Control sobre condiciones de funcionamiento y seguridad de los pasos a nivel de las líneas ferroviarias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires.

OD 1.207: Incorporación de las empresas de transporte automotor de pasajeros del interior al acta firmada por la UTA.

OD 1.208: Inclusión de la ruta nacional 16 en

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.

Sr. Giustiniani. – Me parece que el tema tiene una importancia sustancial para el futuro de la integración regional del Mercosur, por ello pido que se autoricen las inserciones.

Sr. Presidente. – A propuesta del señor senador Giustiniani se ponen en consideración las inserciones.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Resultan aprobadas.¹

En consideración en general y en particular.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Presidente. – Señor senador López Arias: por favor, manifieste su voto a viva voz.

Sr. López Arias. – Afirmativo.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 40 votos por la afirmativa. Unanimidad.

–El resultado de la votación surge del acta N° 1.¹

¹ Ver el Apéndice.

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

8

LEY DE EDUCACION NACIONAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de Ley de Educación Nacional. (PE.-424/06).¹

¹ Ver el Apéndice.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.

Sr. Pichetto. – Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – En realidad, no corresponde tratar este proyecto sobre tablas, dado que tie-

ne dictamen de comisión con plazo cumplido. Tal vez no haya sido publicado con la debida antelación, no conozco esa formalidad, pero estamos tratando un tema que tiene dictamen de comisión y que ha cumplido con los plazos legales y reglamentarios que establece el Senado.

De todas maneras, si había alguna cuestión formal la superamos con esta aprobación de tratamiento sobre tablas.

Señor presidente: simplemente a los fines de poner orden para el debate, podríamos coincidir en armar una lista de oradores, establecer un límite para el miembro informante de media hora y para los demás senadores de diez minutos y fijar una hora para la votación.

Si estamos de acuerdo con todos los bloques podríamos hacer la lista de oradores.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Sanz.

Sr. Sanz. – Tratándose de la importancia que tiene esta ley, quisiera asimilar el mismo tiempo que tiene el miembro informante de la Comisión a los miembros informantes de los bloques. En este caso nosotros tenemos en nuestro bloque a la presidenta de la Comisión de Educación, pero también queremos tener un miembro informante del bloque que explique nuestra posición, porque hemos firmado el dictamen con disidencias parciales.

En cuanto a todos los demás, que tengan el mismo tiempo.

Sr. Presidente. – Está acordado.

Se encuentra abierta la lista de oradores.

De acuerdo con lo que propuso el señor senador Pichetto puede cerrarse la lista de oradores. Hasta ahora están anotados los señores senadores Isidori, Gallego, Bar, Morales, Fellner, Mastandrea, Pérsico, López Arias, Gioja, Capitanich, Vigo...

Sr. Pichetto. – Que el tiempo de exposición sea de diez minutos y que se autoricen las inserciones.

Sr. Presidente. – ...Giusti, Giustiniani, Gómez Díez, Rossi, Urquía.

Luego se verá el orden, pero se leerá nuevamente a todos los anotados: Isidori, Gallego, Bar, Morales, Fellner, Mastandrea, López Arias, Giusti, Negre de Alonso, Caparrós, Jaque, Vigo, Giustiniani, Gómez Díez, Rossi, Urquía, Ibarra, Pérsico y Duhalde.

Si se respetan los diez minutos de exposición, dado que son veinte oradores inscritos, la votación se haría en aproximadamente tres horas y media; es decir, a las 17.

Sr. Pichetto. – Pido la palabra para una cuestión de previo y especial pronunciamiento.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Atento al informe que acaba de hacer el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, la oposición mantendrá diferencias con respecto al dictamen emitido sobre el proyecto originario remitido por el Poder Ejecutivo.

De ser así, el debate comienza con el miembro informante de nuestro bloque, que sostendrá el dictamen en mayoría. Ese miembro informante es la senadora Gallego. A posteriori...

Sr. Morales. – No es así.

Sr. Pichetto. – Bueno, pónganse de acuerdo.

Si apoyan el proyecto en forma completa, hablarán en primer lugar. De lo contrario, si tienen diferencias en particular y en general, el miembro informante por la postura de apoyo a la iniciativa del Poder Ejecutivo es la vicepresidenta de la Comisión, senadora Gallego.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Sanz.

Sr. Sanz. – Señor presidente: no hemos presentado un dictamen en minoría. Simplemente, a los efectos de poder explicar mejor algunas disidencias que tenemos en particular, pedí que a un miembro de nuestro bloque –el senador Morales– se le permitiera un tiempo mayor que los diez minutos. Nada más que eso. No se trata de que nuestro bloque explique un dictamen en minoría, que no hemos firmado. Firmamos el único dictamen que está en consideración.

Sr. Presidente. – Queda aclarado que hay un solo dictamen.

Tiene la palabra la señora senadora Pinchetti de Sierra Morales.

Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – Señor presidente: pido disculpas por llegar luego del cierre de la lista de oradores. Solicito autorización a la Cámara para que se me permita dar mi opinión sobre el tema ya que, juntamente con el senador Bussi, presenté un proyecto diferente al de mayoría.

Sr. Presidente. – Queda incorporada.

Comienza el debate, cuya votación se estima a las 17 horas.

Tiene la palabra la señora senadora Isidori.

Sra. Isidori. – Señor presidente: a raíz del planteo recién realizado por el presidente de la bancada oficialista, quiero dejar aclarado que como presidenta de la comisión he firmado el dictamen en mayoría sin disidencias. Por lo tanto, entiendo que es válido que sea hoy la miembro informante de este proyecto, lo cual me causa satisfacción.

Se trata de un proyecto que ha supuesto un gran esfuerzo y un gran trabajo –y ustedes lo saben–, no sólo de los senadores y senadoras que integramos esta Cámara, sino también del cuerpo de asesores, del cual rescato la alta responsabilidad y dedicación que ha mostrado.

Este proyecto ha inaugurado una mecánica que tendríamos que adoptar a futuro cuando se traten temas trascendentes. Fíjense que en la labor previa, a efectos de compatibilizar y consensuar modificaciones al proyecto elevado por el Poder Ejecutivo nacional, no sólo han participado asesores de esta Cámara sino también de la Cámara de Diputados. No quiero extenderme más en la importancia y el momento histórico que estamos viviendo. Además, para tranquilidad de todos, creo que no voy a poder excluir de mi exposición mi carácter de docente, de una mujer que ha dedicado gran parte de su vida al sistema educativo, que se ha hecho en los lugares donde se hacen los docentes, que es el aula, y luego ejerciendo distintos cargos en el gobierno y en la conducción del sistema educativo de mi provincia.

Dicho esto, quiero adelantarles que pretendo, con total y absoluta objetividad, realizar un análisis general y transversal del proyecto en consideración, y con un gran esfuerzo de síntesis, porque creo que lo importante es que, por el número de oradores, puedan participar de un debate que ha tenido como protagonista a todos y cada uno de los sectores que conforman la sociedad argentina. En efecto, este proyecto ha sido producto de la participación de los docentes, padres y alumnos, de las organizaciones sociales, productivas e industriales, de los gremios. Entonces, reafirma aun más en mí la convicción de que estos proyectos merecen la atención, dedicación y el esfuerzo porque están

transfiriendo el pensamiento, la demanda y las necesidades de un sistema educativo que ha ido perdiendo en estos últimos años un esencial protagonismo para el desarrollo y crecimiento...

Sr. Presidente. – Perdón, señora senadora.

Damos la bienvenida al ministro de Educación, licenciado Daniel Filmus, a quien agradecemos su presencia.

—Ingresa en el recinto el señor ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, licenciado Daniel Fernando Filmus.

Sra. Isidori. – Digo que sin duda hoy estamos tratando una ley de educación nacional que es buena, porque contiene aspectos esenciales; y al contrario de la Ley Federal de Educación y de su marco ideológico, fija taxativamente la responsabilidad del Estado. Declara a la educación un bien público y además un derecho personal y social para todos los argentinos. El Estado se convierte en el responsable—en el primer responsable— de las acciones educativas.

Sería ingenuo pensar que ésta será una ley cerrada. Será una ley que, seguramente, y a través de la dinámica propia de las sociedades en crecimiento, requerirá adecuaciones en su momento.

Por otro lado, se enmarca —yo diría— innovadoramente en los derechos humanos; no sólo en el marco de los tratados y convenciones internacionales, sino en nuestra propia ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes. Esto es altamente positivo, porque fundamentalmente considera a estos niños y niñas sujetos activos y sujetos de derecho.

Además, el proyecto fija rumbos éticos: la libertad, la justicia, la igualdad, el bien común. Sobre todo hace hincapié en la equidad referida al acceso a la educación y a los aprendizajes, apuntando a consagrar la igualdad de oportunidades, pero también de resultados. Y eso no deja de ser innovador.

Por otro lado, la ley contiene, describe y especifica políticas y principios transversales en el marco de la inclusión, de la igualdad y de la equidad. Y un eje esencial del proyecto que hoy estamos debatiendo es el de la unificación de la estructura de la educación en todo el país. Ustedes saben cuáles han sido las consecuencias de la aplicación de la Ley Federal de Educación. Hoy ni siquiera podemos hablar de veinti-

cuatro sistemas distintos: tendríamos que hablar de muchos más; un sistema fragmentado, anarquizado, que ha fomentado la desorientación de las instituciones educativas y de sus principales protagonistas.

Por eso el proyecto en consideración establece dos opciones en el marco del nivel primario y secundario. La primera opción, de seis años de duración para el nivel primario y de seis años para el nivel secundario. Y la segunda opción, siete años de primaria y cinco de secundaria.

Es importante rescatar que cada jurisdicción provincial tendrá la facultad de optar por una de estas dos opciones. Y se fija un plazo de seis años para la readecuación del sistema educativo.

Ustedes también conocen por qué este plazo: sabemos que cuando se mueve en el tablero de la educación un elemento y una pieza, las consecuencias son en cadena, y va a significar mucho esfuerzo de compatibilización y de acuerdos entre el Ministerio de Educación y las jurisdicciones provinciales para que vayamos acercándonos a esa unificación atendiendo, por supuesto, al respeto irrestricto a los derechos y a las condiciones de los docentes.

No voy a recordar los múltiples conflictos que se produjeron en la historia educativa de nuestro país con la aplicación de la Ley Federal de Educación.

Por otro lado, la educación obligatoria es extendida a 13 años, desde los cinco años, el último del nivel inicial, hasta la finalización del nivel secundario. Así queda constituido el sistema, como lo determina el proyecto, por los siguientes niveles: inicial, primario, secundario y superior. Tal vez merezca —seguramente se va a dar en este recinto— un análisis profundo sobre un aspecto que considero esencial y profundamente innovador, que es el de la formación docente.

Este proyecto define políticas respecto de la formación docente y sus objetivos, y jerarquiza la formación docente llevándola al nivel superior. Asimismo, crea el Instituto Nacional de Formación Docente, organismo que tendrá bajo su responsabilidad impulsar y ejecutar lineamientos generales para una formación continua y la renovación de los contenidos curriculares. No es poca cosa este objetivo que el proyecto de ley se propone.

La estructura de la formación docente plantea un ciclo común, con una duración de dos años, y un ciclo de especialización, también de dos años. Además, extiende la residencia a la formación docente del nivel inicial. Por otro lado –tal vez esto debe ser tenido muy en cuenta– se crea un fondo de incentivos para apoyar y desarrollar el sistema formador.

Creo que con esto estamos mandando un mensaje muy claro a la sociedad, que muchas veces ha puesto en duda la idoneidad y la preparación específica de los docentes. Hoy, con esta norma legal, se abre todo un desafío.

En cuanto a la definición de nuevas modalidades, se produce una amplitud abarcativa de situaciones diversas de la población. Así, por ejemplo, quedan determinadas ocho modalidades: la rural, la intercultural bilingüe, la hospitalaria y domiciliaria, y la de privación de libertad, más las modalidades actuales de educación técnica, de jóvenes y adultos, especial y artística.

Tal vez un tema controvertido que se introduce en el proyecto es el que guarda relación con la educación privada y con los subsidios que el Estado asigna a las escuelas públicas de gestión privada. En efecto, quizás el proyecto debería haber avanzado en aquellas pautas a tener en cuenta para consagrar la justicia social a que hace referencia la iniciativa y, fundamentalmente, para definir el volumen de esos aportes.

Ustedes saben que he sido una defensora –y lo sigo siendo– de la escuela pública. Por eso, tal vez un deseo implícito es que el presupuesto para la educación fortalezca a la escuela pública, mejore su calidad y sus servicios y, sobre todo, que ese esfuerzo de inversión que hoy hacen el gobierno nacional y las provincias llegue definitivamente a las escuelas. Hay un convencimiento profundo que de ser así, de poder alcanzar esta situación, comenzaríamos el camino de la recuperación de la confianza, de la esperanza y de la expectativa de los docentes argentinos.

Por otra parte, existe una fuerte promoción de la igualdad, de la equidad y de la calidad que atraviesa todo el proyecto. Se proponen acciones concretas para enfrentar situaciones de injusticia, de marginación y de explotación en el trabajo infantil; todo esto enmarcado en el principio de inclusión.

Fíjense que, además, el proyecto avanza en que los docentes con mayor capacitación y experiencia aborden las situaciones más difíciles. Ustedes recordarán cuando en aquellas escuelas –por lo menos en mi época– las mejores maestras y los mejores maestros estaban en los primeros grados, en el A, en el B y en el C, donde los chicos estaban absolutamente estimulados cuando, en realidad, tendrían que haber ido a aquellos grados donde la igualdad de oportunidades no era precisamente la realidad.

Noten, además, que dentro de las propuestas surge la definición muy clara de impartir la educación desde los 45 días de vida. Asimismo, se propone universalizar el nivel inicial de 4 años y el incremento paulatino de instituciones educativas de jornada prolongada o doble jornada.

Por otra parte, fija taxativamente 20 horas reloj para nivel primario y 25 horas reloj para nivel secundario; pero, además, contempla trabajar en algunas problemáticas que son profundamente conocidas por nosotros, como la violencia, la carencia de contención socio afectiva de la familia y la escasa adquisición de habilidades con que nuestros niños ingresan en el sistema.

La transversalidad y articulación con otras áreas de gobierno son fundamentales, sobre todo cuando hablamos del sector productivo y de los sectores sociales, que apuntan a lograr la reinserción y la terminalidad educativa. Esto refuerza lo que vinimos reclamando durante mucho tiempo, que es considerar a la educación como una herramienta para superar la vulnerabilidad social y laboral de grandes sectores de nuestra sociedad.

Con respecto a la calidad de la educación, el proyecto propone la creación del Consejo de Actualización Curricular, con una política de evaluación que debe ser continua y periódica, y para eso pone en funcionamiento un proceso de información y evaluación que permitirá retroalimentar el sistema.

También el proyecto enfatiza la relación de la educación con las nuevas tecnologías y los medios de comunicación.

Con respecto a estos últimos, incorpora un representante en el Consejo Consultivo, dado que debe tomarse conciencia de la responsabilidad social que dichos medios poseen.

Y al mismo tiempo el proyecto efectúa un abordaje consciente de la brecha digital, cambiando el paradigma hacia una sociedad de conocimiento.

Un tema controversial es la educación a distancia. Todos sabemos que se han dado abusos de diverso tipo. Es más, hasta diría que se han producido estafas al respecto. Por eso, el proyecto contempla la creación de la Comisión Nacional de Registro y Evaluación Permanente de la Educación a Distancia, lo cual constituye un desafío inmenso que tenemos por delante.

Obsérvese que dentro de los aspectos esenciales o prioritarios, no incluí el financiamiento. Esto no se debe a que haya dejado de tener una trascendencia o incidencia fundamental. Lo que sucede es que el proyecto solamente remite a la Ley de Financiamiento Educativo, y todos recordarán cómo la discutimos, porque no solamente establece la proporcionalidad del esfuerzo del gobierno nacional y de las provincias, sino que también fija las metas que se propone alcanzar y los índices de distribución de esa inversión para el área educativa.

Aprovechando que se encuentra presente el señor ministro de Educación, creo que debemos rediscutir este tema si estamos firmemente convencidos de que hoy estamos tratando un proyecto que debe ser factible, realizable y viable. Y debemos animarnos a plantear, con la fuerza necesaria, una nueva ley de coparticipación porque ello garantizará el cumplimiento irrestricto de esta nueva normativa.

Con relación al gobierno y a la administración del sistema, es muy conocido que existe un organismo unipersonal, que es Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, un organismo federado –como es el Consejo Federal de Educación– y consejos consultivos, como los de política educativa, económica y social, y de actualización curricular, a los que debemos añadir los organismos que señalé anteriormente.

En cuanto a la unidad pedagógica del sistema integrada por directivos, docentes, alumnas, alumnos, padres, madres, auxiliares, cuerpo técnico, administrativos, cada comunidad educativa tendrá la posibilidad democrática y participativa de definir su propio proyecto y, además, se establecen los derechos y obligaciones de cada uno de los integrantes de esta comunidad educativa.

Por último –y no creo que haya usado los veinte minutos, señor presidente–, quiero referirme muy brevemente a los contenidos curriculares transversales que contiene el proyecto, porque entiendo que es de fundamental importancia –aun a riesgo de ser reiterativa– incorporar el reclamo por la soberanía de las islas Malvinas, el fortalecimiento de una perspectiva regional latinoamericana, el respeto por la diversidad cultural de los pueblos indígenas, la detección de los chicos con capacidades especiales o talentosos, la construcción de una memoria colectiva acerca de los procesos históricos que interrumpieron el orden institucional en nuestro país, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a todo lo cual debe sumarse la principal propuesta personal: la equidad de género y la eliminación de toda forma de discriminación hacia la mujer.

Por último, quiero decir que este proyecto también incorpora un criterio de restricción para el ejercicio de la docencia, que aplaudo pero que creo insuficiente. En ese sentido, determina que quedarán inhibidas del ejercicio de la docencia aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos de lesa humanidad, y se recomienda a las jurisdicciones provinciales que incorporen dentro de esta inhibición a aquellos condenados por delitos contra la integridad sexual.

Evidentemente, aun con disidencias, aun con dudas, aun con aprehensiones y con una dosis de escepticismo, hoy empezamos a transitar un nuevo camino. Nuestra propuesta en realidad se convierte en un acto reivindicatorio de la deuda social que el Estado tiene para con la sociedad argentina. Cuando hablamos de calidad, cuando hablamos de igualdad, sabemos que no es una construcción natural. Supone una fuerte decisión y voluntad de la sociedad en su conjunto; no hay acá hazañas personales; simplemente debemos comprometernos a trabajar por una educación que dé respuesta a las expectativas y oportunidades que vienen reclamando nuestras generaciones, teniendo en cuenta que estamos legislando para el futuro.

Debemos recuperar la profesionalidad del docente no sólo con una formación y una capacitación permanente sino también con un salario justo porque –como decía hace muchos años– el gremio docente es el que siempre pidió trabajar más para ganar lo mismo. Y no vamos a

tener destino como país y como sociedad si no apostamos fuertemente a una educación que sea el soporte indispensable del desarrollo y el crecimiento que todos queremos para nuestro país.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Gallego.

Sra. Gallego. – Señor presidente, señoras y senadores: en primer lugar, quiero informar que los minutos que corresponden a la fundamentación por parte de la mayoría los dividiremos entre la senadora Bar y quien les habla, a fin de hacer dos enfoques distintos sobre esta cuestión.

Intentaré hacer un enfoque político y un cuadro de situación para que luego la senadora Bar se refiera, fundamentalmente, a los contenidos del proyecto de ley.

En ese sentido, creo que es importante que señalemos que nuestro país está tratando de transitar un camino dificultoso y pretende emerger de serios problemas de carácter político, económico, institucional y social.

Y desde esa situación de conflictividad en la que se ha iniciado este nuevo milenio, la Argentina necesita resolver todos estos problemas para poder enfocarse en un modelo de país distinto. Por lo tanto, según nuestro criterio, se está en el camino y en la búsqueda y construcción de una sociedad integrada, con un país más justo desde lo económico y lo social y más equilibrado en función de la necesidad de un desarrollo social sostenido.

Debiera uno preguntarse, entonces, desde cuándo aparecen las dificultades. Y no sería honesta si no dijera que nuestras dificultades aparecen desde nuestro pasado inmediato.

Creo que nuestras dificultades devienen desde el propio inicio de nuestra vigencia como nación. Y tienen que ver con las distintas posibilidades que plantea una geografía tan extendida como la que tenemos y un proceso de población y desarrollo sumado a un proceso económico y social que se basó fundamentalmente en el aprovechamiento de los recursos naturales. En ese proceso, sin duda, la región pampeana fue la mejor preparada para adaptarse a un proyecto económico basado, sobre todo, en las agroexportaciones.

De ahí que tengamos dificultades que vienen desde el fondo de la historia como nación y de

allí también que se esté intentando dar una nueva oportunidad para solucionarlas.

En este sentido, nuestro bloque cree que la educación es un eje central para superar esas diferencias sustanciales que acentúan las desigualdades.

Por lo tanto, la incorporación del conocimiento, la ciencia y la técnica como herramientas de la educación es indispensable para lograr un desarrollo sustentable.

Este modelo de crecimiento es el que nos incita y nos lleva a plantear el acento en un nuevo modelo educativo, en una nueva ley nacional que perfile una educación capaz de plantear que nuestros niños puedan superar las dificultades que hoy los someten a situaciones desiguales.

Considero que también es importante y honesto que desde una parcialidad política, como puede ser un bloque parlamentario, hagamos un recuento sincero de los pasos que los gobiernos fueron dando a partir, por lo menos, de la recuperación de la democracia. Porque si no miramos nuestra historia desde la integralidad, si la miramos con un solo ojo, nos estaremos equivocando en el diagnóstico y, seguramente, nos vamos a equivocar en la herramienta.

Es importante recordar aquí, en ese sentido, el Congreso Pedagógico Nacional, que fue convocado por el gobierno del doctor Alfonsín y que se extendió entre 1984 y 1988; la ley de transferencia de las escuelas a las provincias; luego la Ley Federal de Educación; más tarde el Pacto Federal Educativo. En este último tramo de la historia, luego de la crisis de 2001, menciono a la Ley de Educación Técnica y Profesional, la Ley de Financiamiento Educativo, la ley que adecua la legislación de las niñas, niños y adolescentes a la convención internacional en la materia. Finalmente, la última ley que hemos tratado tiene que ver con el Programa Nacional de Educación Sexual.

Como vemos, los gobiernos y el Parlamento no hemos estado ajenos sino que hemos estado trabajando sobre esta materia. Creo que es importante que tengamos en cuenta que la educación no es un hecho espontáneo sino un proceso que se construye con errores y aciertos, con avances y retrocesos.

Para saber donde estamos parados, en estos últimos días estuve buscando algún material,

estadísticas, números, para hacernos una composición de lugar. Busqué el último informe de la Argentina sobre los objetivos de desarrollo para el milenio. Cuando empecé a mirar los números me sorprendí. Dice ese informe que la Argentina está cerca de alcanzar la educación básica universal. Entre los logros más significativos demuestra claramente que en la franja etaria entre 15 y 24 años prácticamente no existe analfabetismo. Por otro lado, plantea que ha habido un crecimiento sustantivo de la matrícula de los niños escolarizados.

Me he permitido traer algunos de estos números porque ponen las cosas en su justo lugar.

Por ejemplo, dice que en los grupos etarios de cinco años en 1980 teníamos el 57,5 por ciento de los niños escolarizados; en 1991, el 72,6 por ciento; en 2001, el 90,8 por ciento. En 1980, el 91,3 por ciento de los niños de seis a catorce años estaba en el sistema escolar. En 1991, el 94,2 por ciento y en 1997, el 97,2 por ciento.

En 1980, solamente el 51,8 por ciento de los niños de entre quince y diecisiete años se encontraba en el sistema educativo. En 1991, el 62,6 por ciento y en 2001, el 79,04 por ciento.

En la franja etaria de dieciocho a veinticuatro también sufrimos cambios en los guarismos, pasando del 18,9 por ciento al 29,2 por ciento y al 36,9 por ciento.

Pero estos números están atravesados por el problema de la desigualdad. Si miráramos la franja etaria de los cinco años —que es el único año del nivel inicial que en la Ley Federal de Educación es obligatorio—, nos encontraríamos con que hay algunas provincias que tienen el ciento por ciento de sus niños en el sistema escolar y otras que tienen solamente al 70 u 80 por ciento. Pero resulta que hay algunas que tienen sólo al 60 por ciento de sus niños en el sistema educativo. Esta es una brecha de difícil resolución, porque los niños que no ingresan a la edad adecuada en el sistema educativo, en la escolaridad, seguramente van a tener mayores dificultades en el proceso de aprendizaje y en la evolución de su desarrollo educativo a lo largo de su vida.

Paralelamente a este incremento de la escolarización también debemos reconocer que hubo dificultades importantísimas. En efecto, no hemos podido alcanzar las metas propuestas para el tema de la capacitación docente, así

como tampoco las previstas para garantizar el equipamiento y la infraestructura edilicia.

Sin duda que éstos son problemas que debemos resolver; deudas que hoy tenemos y que tendremos que intentar resolver a partir de nuevas herramientas. Obviamente que en el contexto de la Argentina, es muy difícil hacer una generalización de nuestro sistema educativo, que tiene diferencias tan marcadas.

En este sentido, creo que hay algunas dificultades que son históricas. El tema del analfabetismo es una de ellas. Hace precisamente ciento veinte años la ley 1.420 planteó la erradicación total del analfabetismo; y todavía tenemos que reconocer, con dolor, que en la Argentina hay un 2,7 por ciento de nuestra población que no ha logrado acceder a los códigos de la lecto-escritura. Y éste es un tema grave, porque no lo hemos podido superar aun después de más de cien años.

El segundo tema tiene que ver con la iniquidad. Este planteo que yo hacía respecto de la diferente posibilidad que tienen los niños de cinco años de acceder al nivel inicial, es un planteo de iniquidad. Sin duda, esto no solamente obedece a las dificultades del sistema educativo sino que también se vincula con las imposibilidades y vulnerabilidades de la familia. Y éstos son temas que debemos intentar resolver no solamente con una nueva ley sino con una serie de herramientas y medidas de gobierno que ayuden a superar las dificultades.

También existe un desacople o desarticulación del sistema; algo que ya ha señalado la señora senadora Isidori hace unos momentos. En realidad, vemos con mucha preocupación las dificultades que tienen los docentes y los niños para poder transitar entre una provincia y otra. Creo que una serie de transformaciones inconclusas fue lo que generó esta situación de dificultad, donde tanto los docentes como los alumnos a veces tienen dificultades para insertarse en el sistema educativo debido a que deben trasladarse de una provincia a otra; y lo que es peor, esto sucede incluso hacia el interior de los mismos estados provinciales.

El otro elemento que también creo que es histórico es el déficit del financiamiento. En realidad, recuerdo cuando la Nación se hacía cargo y era la responsable del total de la educación. A

mí me ha tocado vivir en una provincia que durante mucho tiempo fue territorio nacional —es uno de los estados provinciales más jóvenes—, y veíamos con frustración la imposibilidad de que la Nación respondiera a las necesidades.

Me crié en La Pampa cuando había solamente tres colegios secundarios y las escuelas primarias eran absolutamente insuficientes. Tuvieron que salir las provincias a generar sus propias estructuras de escuelas primarias y secundarias. En eso han tenido absoluta participación los sectores sociales de los estados provinciales. Ante esa dificultad de financiamiento apreciaron a lo largo y ancho del país muchas experiencias que resolvieron el problema puntual de la falta de instituciones en los pueblos, pero que a su vez han ido generando otras distorsiones en otros segmentos del sistema.

La verdad es que nosotros estamos esperanzados en que la Ley de Financiamiento Educativo y esta iniciativa garanticen y hagan efectivo un financiamiento adecuado hacia adelante. En este sentido, creo que este proyecto, juntamente con la Ley de Financiamiento Educativo, está planteando una política a mediano y largo plazo.

Asimismo, debemos reconocer que hay algunos problemas que son más recientes. Honestamente, creo que la fragmentación y la desarticulación, sumadas a la incidencia de la pobreza y a una nueva cultura de los adolescentes, han hecho muy dificultoso el funcionamiento del sistema educativo y lo han dejado, a veces, sin la posibilidad de respuestas adecuadas. La verdad es que comprendo absolutamente a los docentes cuando a veces nos dicen: “Ya no sabemos qué actitud tomar con los chicos”. Unos pocos años de diferencia con los chicos a veces se transforma en una barrera generacional difícilísima de superar.

Quiero ir terminando mi intervención diciendo que soy optimista, que éste es un buen paso —estoy convencida de ello— hacia la mejora integral del sistema educativo en la Argentina.

Por otra parte, me parece que esta iniciativa que hoy vamos a votar tiene legalidad y legitimidad. Legalidad, porque se trata de un proyecto del Poder Ejecutivo que será considerado en el Congreso y promulgado por el Poder Ejecutivo. Y legitimidad, que deviene no sólo de

esta necesidad que ha planteado la sociedad en su conjunto, de generar una nueva ley, sino también de una estrategia de participación que ha pergeñado el Poder Ejecutivo nacional.

Recuerdo cuando a mitad de año el señor presidente de la Nación nos convocó y puso en discusión un primer documento que había elaborado el Ministerio de Educación, el que luego fue impreso, distribuido en las provincias, discutido en todas las escuelas —y los gremios y gobiernos provinciales tuvieron la responsabilidad de que ese debate se generara— y cuyo resultado fue finalmente procesado por aquel ministerio.

A su vez, debo señalar que el Ministerio de Educación también organizó una encuesta nacional —que creo fue única en la Argentina— de la que participaron más de 3 millones de personas a través de distintas formas, ya sea como organizaciones, personal o institucional, o institucionalmente. Y esto está volcado en el texto de la iniciativa que nos aprestamos a votar.

Finalizado ese proceso, el Poder Ejecutivo elaboró un borrador, le puso letra a lo que la sociedad en su conjunto había planteado, y lo transformó en un preborrador que volvió a las provincias y fue nuevamente discutido en el ámbito de las escuelas. Ahora, hace quince días llegó al Senado para comenzar su tratamiento.

Cabe destacar que esta Cámara aportó desde su lugar al debate colectivo. Como bloque fuimos organizadores de dos foros: uno, con sectores involucrados en el sistema educativo y, otro, con los ministros responsables de las provincias. En ese sentido, también la Comisión ha generado un foro.

Sr. Presidente. — Señora senadora: le quedan seis minutos. Se lo comento por si va a compartir su tiempo.

Sra. Gallego. — Sí, señor presidente.

En consecuencia, esas resoluciones han sido volcadas en este documento. Creo que todo este proceso, más la discusión en el Senado y la incorporación de los aportes de una serie de senadores y de los distintos bloques, es lo que también le da al proyecto legalidad y legitimidad.

Ahora bien, el proceso que se avecina, una vez sancionada esta norma, es el más serio. Así lo planteó el ministro de Educación el día que vino a presentar el proyecto en el Salón Azul.

En esa oportunidad, sostuvo que hay que tener en claro que la sanción de este proyecto de ley no resuelve mañana los problemas de la educación sino que a ella hay que entenderla como un proceso.

Efectivamente comparto lo dicho por el ministro: a la educación debemos entenderla como un proceso en el que nadie puede hacerse el distraído y en el que todos –sabedores de que el camino no es sencillo– tenemos la obligación de aportar nuestro compromiso, nuestra voluntad política y nuestra voluntad social para no deslegitimarlo.

La educación no es solamente el docente en el aula; es la formación, la capacitación permanente, los recursos económicos, la infraestructura, el gobierno, la participación y la posibilidad de consensuar.

–Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª del Honorable Senado, senadora Mirian Curletti.

Sra. Gallego. – En ese sentido, cuando estamos por votar el proyecto, debemos tener en claro que hemos hecho los mayores esfuerzos para consensuarlo. Sabemos que seguramente existen muchas opiniones parciales de muchos de nosotros, que hubiéramos querido que fueran parte integrante de la norma, pero ésta debe ser el resultado de los consensos generales. No podemos tener una actitud mezquina, de entorpecer o lesionar la legitimidad de la discusión común en aras de un protagonismo personal.

Voy a finalizar aquí mi exposición, concediéndole los minutos que me restan a la señora senadora Bar. Luego contestaré, si fuera necesario, las preguntas que se formulen en el momento de los planteos individuales.

Sra. Presidenta (Curletti). – Tiene la palabra la señora senadora Bar.

Sra. Bar. – Señora presidenta: en primer lugar, quiero recordar que esta iniciativa surgió cuando el presidente de la Nación, en su discurso frente a la Asamblea Legislativa del corriente año, hace un poco más de nueve meses, nos convocó a participar de un nuevo proyecto de ley de educación, necesario para acompañar este nuevo modelo de país que hoy estamos encarando.

Quiero efectuar un reconocimiento, además del ya realizado por mi compañera de bancada,

al proceso de consulta y concertación que ha entablado el Ministerio de Educación de la Nación, porque por primera vez tenemos la experiencia de que en un proyecto de ley participan, en vivo y en directo, docentes, padres, alumnos, preceptores, sindicatos y asociaciones sociales y de derechos humanos.

También quiero llevar mi reconocimiento a este cuerpo, porque tuvimos amplitud, comprensión y aportes en los foros y en la Comisión de Educación. Creo que esto también es inédito. Estamos hablando de poner en práctica una política de Estado, que mucho necesita nuestro país, para garantizar que las transformaciones educativas puedan tener continuidad, porque nada comienza cuando uno llega sino que todo se va transformando para mejorar la calidad de nuestra educación.

Deseo rescatar de este proyecto de ley tres ejes fundamentales, que atraviesan el contenido de la norma. En primer lugar, quiero señalar el tema de la revalorización del rol del Estado, que en leyes anteriores estaba difuso. En efecto, no se tenía en claro cuál era el papel del Estado en un país federal y existían desentendimientos y fragmentación, producto de la ausencia estatal. En cambio, este proyecto recupera ese eje y marca una fuerte presencia del rol del Estado nacional, con la participación de las provincias y de las instituciones educativas.

Además, también se retoma para el Estado el papel de garante de la educación. No olvidemos lo que ocurría con leyes anteriores. Sin embargo, esta norma es respetuosa de los derechos y garantías de los ciudadanos, de los alumnos y de las alumnas, para que estos puedan tener los respaldos académico, profesional y económico necesarios. Esto hace bien a la democracia, porque cuando el Estado está presente brinda seguridad en cuanto a que las instituciones y los alumnos van a tener la igualdad que todos queremos.

Otro eje que atraviesa el proyecto es la calidad educativa. El texto prevé la extensión de la jornada en la escuela primaria, la formación continua de los docentes, nuevas formas de enseñar y aprender con nuevos procedimientos y técnicas, y el acceso a la tecnología. Todo esto, con mayores recursos, sin duda va a contribuir a que de una vez por todas nuestra educación, que supo tener un lugar digno en el contexto mundial, recupere su lugar de privilegio y capa-

cidad.

Pero esta calidad no sería tal si no fuera acompañada de otros principios que atraviesan la ley en el conjunto de su articulado, como son la equidad, la inclusión educativa y la igualdad. No seríamos ciudadanos completos si no aseguráramos una educación de calidad para todos.

Hoy, los niños, niñas y adolescentes comienzan y egresan del sistema educativo con diferencias terribles, algunas dolorosas. Es más, los índices –como bien dijo la señora senadora Gallego– aún persisten. Por lo tanto, creo que con esta intencionalidad de buscar una igualdad educativa, no estamos diciendo que vamos a ser todos iguales –no seríamos democráticos ni un país libre y soberano si lo dijéramos– sino que los alumnos tienen que alcanzar el máximo de sus potencialidades en cuanto a los logros y resultados en el aprendizaje, para que no existan diferencias entre zonas, regiones, género, etnias, y para que se brinde una educación según las necesidades de cada uno de los sectores. Recién ahí vamos a estar hablando de una educación de calidad con inclusión.

Si uno quisiera hacer una descripción del contenido y de la organización interna de la norma que estamos considerando, tendríamos que señalar que está conformada por 12 títulos y 144 artículos. Obviamente, voy a hacer una rápida mención de ellos.

El título I, denominado Disposiciones Generales, comprende los principios, derechos y garantías, así como los fines y los objetivos de la política educativa nacional.

Ahora bien, ¿qué rescatamos de estos dos capítulos que son el sustento de una educación de calidad con igualdad? En primer lugar, que se concibe a la educación como un bien público que hace a la democracia y a la igualdad, siendo a la vez un derecho personal, pero también social, porque de nada sirve que yo pueda formarme si mis colegas, mis pares y vecinos no pueden hacerlo.

A su vez, y por lo que mencionaba recién, la iniciativa concibe a la educación como una política de Estado. Entonces, los argentinos tenemos que acostumbrarnos a una continuidad en las políticas para poder lograr la mejora de la educación.

Esta iniciativa también se refiere a preservar

y defender el derecho de enseñar y aprender –que es de raigambre constitucional y que todos defendemos– y, fundamentalmente, a la responsabilidad del gobierno nacional y de las provincias de proveer una educación integral basada en valores que son propios del ser argentino. Me refiero a la libertad, la responsabilidad, la solidaridad, y la justicia.

Pero no sólo pretendemos una educación integral sino una que nos provea de los recursos necesarios. Seguramente, el senador Capitanich nos dará mayores precisiones cuantitativas al respecto, porque esta norma prevé que a partir de 2010 no sólo vamos a tener el reaseguro del financiamiento educativo por la ley específica que aprobamos este año sino que también el 6 por ciento del producto bruto interno va a estar exclusivamente destinado a la educación.

Obviamente, los gobiernos nacional y provinciales tendrán que destinar otro complementario para las universidades y el área de ciencia y tecnología. Creo que esto es auspicioso y va a contribuir a la mejora e igualdad educativa.

Como sería monótono reiterar los objetivos y fines de la norma, sólo quisiera rescatar el de asegurar una educación de calidad, garantizar la inclusión educativa y asegurar la vigencia de estrategias pedagógicas diferenciadas para lograr este fin con la asignación de recursos. Ahora bien, no sólo se favorece el acceso de los alumnos a las escuelas sino que también su permanencia y egreso. En efecto, en estos últimos quince años hubo una incorporación masiva al sistema educativo, pero hemos visto con preocupación y dolor que los niños no permanecen en él. Muchos van a escuelas nocturnas, a bachilleratos acelerados para adultos y otros a la educación no formal, pero lo cierto es que nos tenemos que preocupar para que esa permanencia en el sistema sea constante, con elevados índices y, a su vez, que el egreso de los alumnos tenga mejores logros.

Entre los fines y objetivos de la iniciativa también quiero rescatar algo que tal vez hemos olvidado y debemos tratar de recuperar en las escuelas argentinas. Me refiero a la cultura del esfuerzo y del trabajo como base del proceso enseñanza-aprendizaje. He hablado con colegas y muchos aseguran que no hay un nivel de exigencia según las capacidades, en los procesos de enseñanza-aprendizaje y tenemos que

recuperarlo, porque no sólo se forma en la cantidad de contenido sino también en capacidades, competencia y valores; y eso indudablemente implica capacidad de estudio, dedicación y esfuerzo.

En el proyecto de ley luego hay otro título: “El sistema educativo nacional”, que tiene trece capítulos. El primer capítulo sobre “Disposiciones generales” se refiere a las responsabilidades de los estados nacional, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la planificación, organización, supervisión y financiamiento del sistema, que está integrado por los servicios educativos de gestión estatal y privada. A su vez, como algo novedoso, también se incorporan los servicios de gestión social.

El sistema educativo propuesto tiene una estructura unificada, favoreciendo la interrelación entre los niveles y las modalidades, y establece la obligatoriedad desde los cinco años hasta la finalización de la escuela secundaria. A su vez, el sistema está organizado en cuatro niveles: inicial, primario, secundario y superior, y ocho modalidades, que trataré de sintetizar brevemente y que conforman los siguientes capítulos del título II.

La educación inicial constituye una unidad pedagógica desde los cuarenta y cinco días hasta los cinco años, siendo obligatorio este último año. Pero aparece algo novedoso que es la universalización de los servicios para los niños de cuatro años. Esto no nos está indicando que es obligatorio para los alumnos, los niños y niñas de cuatro años, pero sí para que los estados financien los cargos en aquellos lugares, situaciones y circunstancias que sean indispensables y donde haya necesidad de cubrir esa sección de cuatro años, porque todos sabemos el valor que tiene la educación inicial cuanto más pronto se la recibe. Esa universalización está asegurada luego en las disposiciones transitorias, en donde se establece la gradualidad de la implementación.

La educación inicial concibe a los alumnos niñas y niños como sujetos de derecho. Así, en varios puntos de la norma hace mención precisamente a la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que hemos aprobado el año pasado, y contiene esta concepción de entender que nuestros alumnos son sujetos de derecho. Asimismo, el proyecto de ley fija que la educación inicial es responsabilidad del

Estado y, así, debe expandir los servicios, promover la participación de las familias y asegurar la igualdad de oportunidades, que será diversa, porque en las zonas rurales, muchas veces con escasa cantidad de niños y niñas, se exigirá una organización institucional diferente para asegurar ese derecho.

El jardín, nivel inicial, tendrá dos ciclos: el maternal, de cuarenta y cinco días a dos años, y los jardines de infantes, de tres a cinco años.

La educación primaria por supuesto es obligatoria —como lo es hoy—, y constituye una unidad pedagógica a partir de los seis años. Pero lo novedoso es que a partir de este proyecto de ley las escuelas primarias serán de jornada extendida o completa. Esto también estará reglado en las disposiciones transitorias, que se implementarán en forma gradual en un término de seis años.

Todos sabemos, señor presidente, lo valioso del hecho de que los alumnos y alumnas estén más horas en la escuela, más horas estudiando nuevas disciplinas, contenidos, estrategias y, sobre todo, nuevas formas de participación, como lo veremos en el nivel secundario.

En efecto, se instituyen nuevos espacios extracurriculares para que ese joven adolescente tenga un lugar donde hacer deportes, participar en instancias de recreación y aprendizaje, y un lugar de contención social. Y no solamente se trata de estudiar sino también de un espacio que dé lugar a la recreación, a efectos de que la escuela se convierta en un centro de atracción al que vayan por gusto, ya que, a veces, los jóvenes no quieren ir a la escuela.

Esta educación secundaria es obligatoria y, obviamente, está destinada a adolescentes y jóvenes. Pero lo fundamental, y lo que la diferencia de otras leyes sobre el mismo tema, es que cumple con tres funciones.

El ejercicio pleno de la ciudadanía lo forma para el trabajo, pero también lo forma para la prosecución de sus estudios. No es “o”; es “y”. Estas tres funciones deben ser cumplidas por todas las escuelas secundarias del país. Además, la etapa está organizada en dos ciclos; uno básico, que sin duda será común, y uno orientado, donde cada institución, de acuerdo con sus expectativas, necesidades y demandas, verá qué orientación instaurará o mantendrá en el futuro.

Considero de suma importancia en el proyec-

to de ley la incorporación de nuevas figuras que contribuirán al desarrollo educativo interior de cada escuela.

Quienes estuvimos trabajando en las escuelas sabemos lo difícil que es desempeñarse hoy en día con los problemas de salud, drogadicción, alcoholismo, embarazo precoz, hambre o desnutrición. Es muy difícil atender a 25 o 30 adolescentes y jóvenes de distinta condición y, en muchos casos, muy vulnerables.

A partir de esta norma, se tendrá la posibilidad de que se incorporen a las escuelas los tutores o coordinadores de curso que, si bien constituyen una figura que puede estar perdida en un artículo, cumplirán un rol fundamental. Estos colaboradores o coordinadores de la actividad profesional en el interior de las escuelas, sin duda, serán algo muy valioso.

Y no podrá estar ausente tampoco la vinculación con el mundo del trabajo y la producción para que, realmente, los jóvenes no sólo puedan tener conocimientos teóricos sino también experiencias prácticas. De allí que se instituyen las prácticas educativas en instituciones y organizaciones sociales y culturales y en las empresas.

La educación superior comprende a las universidades y a los institutos de educación superior, estatales y privados, y estoy segura de que el señor ministro nos retará el próximo año con la presentación de una nueva ley de educación superior frente a la cual tendrá que existir también el compromiso de las unidades académicas, que tendrán que hacer su aporte para mejorar la actual legislación.

La educación técnico-profesional se rige bajo la ley 26.058, aprobada el año pasado.

La educación artística está destinada a una formación específica de los diversos lenguajes del arte a fin de que, realmente, se alcance una formación cualitativa en esta rama del conocimiento, del saber y de la expresión.

En efecto, se buscarán nuevos lenguajes en la escuela secundaria a través de la música, la danza, las artes visuales o el teatro.

La educación especial también está contemplada. De ahí que nuevamente se asegura el derecho de las personas con discapacidades. Y, fundamentalmente, la reglamentación del artículo respectivo tendrá que buscar la forma de

asegurar de una vez por todas la integración de los alumnos con discapacidades en la escuela común.

Un rol importante es el que cumplirá el nuevo actor que se incorpora en las escuelas comunes. Me refiero al maestro integrador, que es el que ayudará a que ese niño o niña con discapacidad se pueda integrar con mayor facilidad.

La educación permanente de jóvenes y adultos es importante, ya que no sólo incorpora a los que no cursaron en su debido tiempo, a fin de que puedan llegar a su certificación sino que también posibilita que la formación de jóvenes y adultos sea continua, a lo largo de toda la vida. Acá entramos todos, los ciudadanos, los padres, los docentes. La sociedad toda va cambiando vertiginosamente y nosotros necesitamos adecuarnos a ese cambio. Esos centros o escuelas de adultos deben tener esa actualización, para que el ciudadano que quiera capacitarse, ya sea en lo laboral, educativo o académico, tenga la posibilidad de hacerlo. Es un gran desafío para los centros de adultos la educación que rige hoy en nuestro país. Es una nueva concepción porque no sólo va a ser para aquel que no terminó en tiempo y forma la escuela primaria o la secundaria sino también para el que quiera seguir formándose.

La educación rural. Fíjese, señor presidente, que todas las provincias tienen escuelas rurales, pero nunca estuvieron en una ley que asegure la educación hasta el secundario. ¿Cómo vamos a hacerlo? Indudablemente, con nuevos recursos y estrategias, formas de organización flexibles, a distancia, diseños institucionales que permitan el aprendizaje de capacidades, con la participación de la familia, del medio, con la articulación de las acciones de otros ministerios. El Ministerio de Educación no puede solo; tienen que contribuir los ministerios de Desarrollo Social, de Trabajo, de la Producción. Tiene que estar el Estado, como muy bien se sustenta en los principios garantes.

Por lo tanto, para asegurar la educación rural el Estado no podrá obviar becas, comedores escolares, redes intersectoriales, recursos pedagógicos y materiales.

La educación intercultural bilingüe está presente por primera vez. A pesar de que está pre-

visto en la Constitución de 1994 el derecho que tienen los pueblos originarios, por primera vez se incorpora el derecho que tienen a recibir una educación que contribuya a fortalecer y preservar sus pautas culturales, su lengua, la cosmovisión e identidad étnica. Seguramente la senadora Fellner va a profundizar este tema, ya que es una especialista, y los aportes que ha hecho han sido sumamente interesantes.

La educación en el contexto de privación de libertad. No es sólo que puedan estudiar los internos, como sucede en muchas provincias actualmente, sino también que se asegure que en las unidades penitenciarias haya jardines maternales y jardines de infantes para aquellos niños o niñas que nacieran o sean criados en estos contextos. Es fundamental porque estamos asegurando el derecho de los niños y niñas a aprender.

La educación domiciliar hospitalaria para aquellos que por razones de salud se ven imposibilitados de asistir a la educación obligatoria. Habrá un servicio específico que se brindará para aquellos que no pueden ir a la escuela.

Un título aparte merece la educación privada. En este punto voy a disentir parcialmente con la senadora Isidori. La iniciativa responde a lo que hoy es la educación privada en nuestro país. Es un sector que garantiza los servicios educativos, previa autorización y reconocimiento por parte del Estado. Podrán brindar este servicio, además de los que ya lo hacen, que es la Iglesia Católica, las demás confesiones religiosas inscritas en el Registro Nacional de Cultos, las sociedades cooperativas, las organizaciones sociales y sindicales, las fundaciones o empresas con personería jurídica. Obviamente, el Estado ejercerá la supervisión pedagógica y el control contable. Pero los docentes de las escuelas privadas tendrán que recibir una remuneración mínima e igual a la de los docentes de gestión estatal.

En cuanto a los docentes y su formación, el proyecto enumera una gran cantidad de derechos y obligaciones. Derecho a la capacitación, a tener condiciones de trabajo dignas, a la jubilación, a un salario digno, y está la obligación de cumplir con la política educativa.

Se instituye una carrera docente diferente. No sólo va a ascender aquel que hoy está en la función directiva sino también el que se desem-

peña del aula.

La formación docente implica preparar profesionales capaces y comprende la formación inicial, su capacitación o formación continua, el apoyo pedagógico y la investigación.

La ley jerarquiza y revaloriza la formación docente, y todos sabemos el factor clave que el maestro o la maestra representan en la mejora de la calidad de la educación.

Tiene dos ciclos, aumenta la extensión de su formación y se crea el Instituto Nacional de Formación Docente, instrumentando un fondo de incentivo, como muy bien dijo la miembro informante.

Las políticas de promoción y de igualdad educativas tienen que ver con lo que yo decía al principio, de asegurar la inclusión y la calidad educativa a través de textos, becas, materiales tecnológicos y, sobre todo, asegurar la permanencia y el egreso de los alumnos.

La calidad de la educación, indudablemente, va de la mano de nuevos contenidos; incluye la enseñanza de otro idioma y la incorporación de nuevos contenidos.

Para ir haciendo un seguimiento de esta calidad tenemos que contar con un sistema de información y evaluación. No para hacer un ranking a efectos de saber cuál es la provincia en la que los chicos aprenden más o cuál es el niño que sabe más, sino para tomar decisiones y contribuir a una equidad educativa. Hay que darle más a los que menos tienen.

La educación con nuevas tecnologías, los medios de comunicación, la educación a distancia y la educación no formal son nuevas formas de enseñar y de aprender que incorporan una gran innovación, con apoyo tecnológico moderno.

Luego, el título X habla sobre el gobierno y la administración, tanto a nivel macro, es decir, a nivel provincial, como a nivel micro, que es la escuela. Se refiere a cuáles son precisamente sus nuevas funciones, es decir, fijar la política, hacer el seguimiento, coordinar; y a nivel de la provincia, administrar. Indudablemente, no está ajeno a los deberes y derechos de los alumnos y de los padres, agentes naturales y primarios.

Para finalizar, quiero rescatar las palabras del presidente de la Nación en la Asamblea Legislativa, que decía así: la educación es una de las políticas fundamentales para la construcción de

un país, donde la justicia social se convierte en una estrategia que caracteriza al modelo de desarrollo económico social. El conocimiento, la ciencia y la tecnología resultan elementos principales de la generación de una Nación productiva. Todo proyecto educativo se sustenta en un proyecto de país.

Ejemplo de ello fue la generación del 80, con la ley 1.420; el gobierno de Juan Domingo Perón, con la incorporación de los obreros y sus hijos al sistema educativo, y a la creación de escuelas técnicas y de la universidad obrera.

Hoy tenemos un nuevo país, hay un nuevo proyecto de país, donde la recuperación de la economía y la producción es visible; hay una valorización y una dignificación del trabajo; hay vigencia plena de los derechos humanos; hay una reconstrucción de la infraestructura vial, de las obras y los servicios; hay una recuperación de la salud pública y también de la educación.

Así, con este fundamento, con este compromiso, con esta convicción, el bloque Frente Justicialista para la Victoria y Partido Justicialista, vamos a dar el apoyo y el voto favorable a esta iniciativa.

Confiamos y estamos esperanzados en que la nueva educación podrá ser posible, porque tenemos un gobierno nacional que no sólo da los recursos sino también manifiesta su voluntad política para que eso sea posible.

Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. – Señor presidente: en primer lugar, quiero brindar el informe de quienes, desde nuestro bloque, hemos suscrito el dictamen pero con disidencias parciales.

De modo que, desde nuestro bloque, estamos dispuestos a acompañar en general un proyecto de ley que nos parece central para nuestro país.

Lamentamos que este debate debamos tenerlo cada diez años –o que en un lapso de diez años tengamos que tener nuevamente este debate–. Esto habla mal de todos nosotros, porque demuestra que todavía no podemos encontrar el rumbo en cuanto a las coincidencias básicas, en un tema de política pública tan central como es nada más ni nada menos que la política educativa.

Pero así son las cosas. Pasó lo que pasó en la década del noventa, pasó lo que pasó con la

ley vigente –con la Ley Federal de Educación–. Y nos parece altamente positivo que el gobierno nacional haya instalado nuevamente el debate de una reforma de la vigente Ley Federal de Educación. Entonces, no queremos dejar pasar esto sin reivindicar la actitud, especialmente del Ministerio de Educación, con el que tenemos algunas diferencias, pero es el ministerio con el que más coincidencias tenemos. A pesar de que tenemos algunas observaciones en particular, creemos que es auspicioso que podamos dar este debate y que se haya puesto en el centro de la escena el debate de la política educativa. Queremos reivindicar eso.

Por ello, nos parece que hay que votar en general este proyecto de ley que introduce cambios importantes después de un gran esfuerzo. Hay algunas cuestiones de visiones diferentes que tienen que ver con el hecho de si este esfuerzo va a alcanzar o no; si se va a poder materializar o no. Algunas cuestiones tienen que ver con el texto de la ley y, otras, con la actitud propia de quienes somos responsables en alguna medida de poner en marcha políticas y, en general, de la comunidad educativa, que es el conjunto de la sociedad.

Hechas estas aclaraciones, hay dos o tres ejes centrales que nos llevan a este apoyo en general con algunas observaciones en particular, que no son menores, sino que son centrales. Primero, debemos mencionar el concepto de que la educación es reconocida como un derecho social, lo que implica por parte del Estado y la sociedad en general garantizarla sin discriminación alguna a todo los ciudadanos niños, jóvenes y adultos de manera de asegurar el acceso, la permanencia y la apropiación de conocimientos, aptitudes y valores que permitan el desarrollo individual y social. Eso, a partir de ese concepto: reafirma la función del Estado como acaban de mencionar las tres miembros informantes. Además, recuperar el rol del Estado presente, fundamentalmente en el tema de la política educativa, rol que debe ser imprescriptible e indelegable por parte del Estado, como lo dice el texto del proyecto de ley.

Segundo, hay dos cuestiones y una de ellas es justamente el centro de nuestra disidencia en particular, que tiene que ver con la cuestión de la fragmentación que ha producido la vigente Ley Federal de Educación. Ese es un tema que

enseguida vamos a desarrollar, a partir de algunos artículos que observamos en particular. El otro tema tiene que ver con el problema de la segmentación del sistema educativo, que implica la existencia de circuitos diferenciales de trayectoria educativa generalmente asociados a condiciones socioeconómicas de los alumnos y sus familias.

Por ello, si bien se debe recuperar la escuela pública común para todos, con calidad, el logro de la igualdad puede suponer estrategias diferenciales de discriminación positiva para los sectores más desfavorecidos, entre ellos, niños de escuelas rurales carenciados, jóvenes y adultos que no están insertos en el sistema y no concluyeron distintos tramos de la escolaridad, así como mujeres que no están insertas en el sistema y no han concluido tampoco tramos de escolaridad.

Cada una de estas modalidades educativas requiere de formatos institucionales y pedagógicos específicos. En ese sentido, me parece que es algo que especialmente la senadora Bar ha terminado de puntualizar en cuanto a cómo se amplía el objetivo de la educación en distintos segmentos a partir de la aprobación de este proyecto de ley. Nosotros tenemos algún reparo con relación a objetivos del proyecto de ley, en la medida en que se concreten o no.

En general, el proyecto de ley está planteando objetivos de política concretos que vemos que se van a materializar y, otros, no tanto, que tienen que ver con alguna cuestión declarativa. Por eso es que el centro de nuestras observaciones tiene que ver con que, en cierta medida, alguna parte del proyecto de ley sea solamente una declaración de principios y no se pueda implementar. Está claro que hay varias Constituciones para una de las premisas básicas que se impone en el proyecto de ley y que tiene que ver con el debate de otros temas, como el del trabajo infantil –que enseguida vamos a desarrollar– y el tema de la obligatoriedad hasta el nivel secundario.

Hay varias Constituciones que la tienen. En el caso de mi provincia –que cuenta con una reforma desde el 85–, el Estado tiene la obligatoriedad de garantizar la educación secundaria para todos los ciudadanos; sin embargo, no pudimos cumplir aún con esos objetivos por diversos impedimentos prácticos y materiales. En

efecto, son algunas de las dudas que tenemos no en términos de conceptos relacionados con cuestiones coercitivas impuestas en la ley sino con frases vinculadas a expresiones tales como “acuerdo”, “de manera concertada y concurrente”, “por consenso” o “concertarán”; es decir, conceptos que, en definitiva, creemos que no nos permitirán garantizar todos los derechos que se establecen en la norma.

En términos generales, ésta es una apreciación a priori que tenemos sobre algunas cuestiones que observamos en particular.

Con relación a la estructura, planteamos un debate en los artículos 26, 29 y 134, que son los que abordan esta temática.

El artículo 26 establece que la educación primaria es obligatoria y constituye una unidad pedagógica y organizativa destinada a la formación de las niñas y de los niños a partir de los seis años de edad. El artículo 29 –que es concordante– habla de la educación secundaria, donde también se restablece este principio de la unidad pedagógica y organizativa. Y, finalmente, el artículo 134 deja abierto un debate que tendríamos que haber saldado. Por eso es que nosotros reivindicamos el esfuerzo que se hace desde el Estado y que, en general, se ha dado en toda la sociedad.

Ahora bien, nos preguntamos si hoy realmente estamos en condiciones de tratar este proyecto de ley con este tema central. Digo esto porque si bien hay un período de seis años –como lo establece el artículo 134– para que de una manera concertada el gobierno nacional, las jurisdicciones y toda la institucionalidad que define la ley resuelvan si van a ser seis años y seis años o siete años y cinco años, el hecho de dejar abierto este debate, de no marcar el rumbo y de no establecer coercitivamente si es seis y seis o siete y cinco, nos parece que implica la postergación de este debate y la profundización de la fragmentación que ha generado la Ley Federal de Educación.

Nosotros creemos que este debate debería haberse saldado. Está bien establecer un plazo de seis años para que las jurisdicciones se vayan adecuando; pero podría haber sido directamente siete años y cinco años, porque resolver ese tema es resolver la matriz de la fragmentación.

Justamente, éste es el debate que nosotros

consideramos que no se tiene que postergar, porque está en claro que la Ley Federal de Educación produjo distintos escenarios.

La mayoría de las provincias están todavía en alguna etapa bastante precaria de la aplicación de la reforma educativa de la Ley Federal de Educación y tienen experiencias piloto en 50 escuelas de 1.300 establecimientos, con el ciclado y el resto de las escuelas públicas de gestión estatal. Todavía están con el tradicional esquema de siete años y cinco años.

Y en la consulta nosotros observamos que hay un concepto de los docentes argentinos todavía arraigado en el esquema de los siete y cinco años; sin perjuicio de que puede ser recomendable desde el punto de vista de la ciencia de la educación el hecho de convertir el esquema en seis años y seis años. Sin embargo, esto choca con la realidad innegable de que hay escuelas que tienen y siguen teniendo el 7º grado, y los colegios secundarios, que tienen cinco cursos y los alumnos para cinco cursos. A ello debemos sumar la capacitación y el perfeccionamiento docente en cuanto a si los chicos de 7º año forman parte del 1º año del EGB 1, del EGB 3 y van a formar parte del actual esquema del colegio secundario. Es decir, la matriz de la fragmentación que ha dividido al país con sistemas educativos diferentes en todas las jurisdicciones –lo que ha destruido el principio de unidad nacional y ha hecho perder la identidad nacional en materia de política educativa–, creemos que seguirá así, sin resolverse, si permanece la redacción propuesta del artículo 134.

Por esa razón, vamos a votar negativamente los artículos 26, 29 y 134. Creemos que esta lógica de dejar abierto el debate, no va a resolver el problema de la fragmentación. Aquí tenemos una diferencia infranqueable. Reconocemos que se ha hecho un gran esfuerzo, pero seguimos sin resolver este tema; o sea, no tenemos la madurez para resolver dicha cuestión.

Otro tema al que me quiero referir es el título V, sobre las políticas de promoción de la igualdad educativa. Y vuelvo al planteo de que, en algunos capítulos, el proyecto parece terminar siendo una expresión de deseos. Por esa razón, efectuamos una propuesta en tal sentido, que luego pasaré a leer.

Es que, en verdad, el espíritu del proyecto ha tomado el de la ley 26.061, que es la de Protec-

ción Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes, en los términos de la Convención de los Derechos del Niño. Es decir, en general la filosofía del proyecto toma ese texto, lo cual constituye un avance que no estaba en la vigente Ley Federal de Educación. Es decir, todavía no teníamos una norma que nos sacara del esquema de la lógica del Pptronato y nos llevara a la Convención de los Derechos del Niño; así que reivindicamos esta circunstancia.

Por eso, hemos propuesto la redacción de un párrafo agregado al texto del artículo 80 o un artículo 80 bis, que establezca un sistema operativo en términos de decisión política escrita en la ley, para establecer un criterio de ingreso que garantice una condición mínima a los estudiantes de nuestro país, o sea, a los niños, niñas y adolescentes, a fin de encauzar su acceso al sistema educativo.

En consecuencia, planteamos la incorporación en el texto del proyecto del siguiente párrafo: la obligatoriedad garantizada por esta ley será respaldada por una asignación escolar universal, por hijos, hijas menores de edad, a cargo del Estado nacional. Esta asignación, que actuará como coseguro de acceso a la escolaridad, implicará la obligatoriedad por parte de los padres, madres o tutores de la matriculación de los menores de edad en todos los niveles del sistema educativo formal.

Esta es la sugerencia que hemos efectuado. Creemos que en los artículos 80 y 81 se debe agregar esta obligación para el Estado nacional y que este texto propuesto aleja la idea de que tengamos tan sólo una expresión de deseos o una redacción de principios declarativos que, en definitiva, luego no se llegan a cumplir.

Ahora bien, en el análisis de los artículos 80 y 81 queremos agregar lo siguiente, que nos retrotrae al debate que tuvimos en ocasión del tratamiento de la Ley de Financiamiento Educativo.

Es que, justamente, el artículo 80 del dictamen de comisión señala que las políticas de promoción de la igualdad educativa deberán asegurar las condiciones necesarias para la inclusión, el reconocimiento, la integración y el logro educativo de todos los niños, jóvenes y adultos de todos los niveles y modalidades, principalmente los obligatorios, agregando que el Estado asignará los recursos presupuestarios con

el objeto de garantizar la igualdad de oportunidades y los resultados educativos para los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

Aquí nosotros proponemos agregar el párrafo que acabamos de comentar.

En cuanto al artículo 81, establece que las autoridades jurisdiccionales adoptarán las medidas necesarias para garantizar el acceso y permanencia en las escuelas de las alumnas en estado de gravidez –algo que también constituye un tratamiento particular, de una situación particular– de niñas y adolescentes, y la obligación que se le impone a las jurisdicciones en esta materia tiene que ver con este concepto que hemos planteado al momento de debatir la Ley de Financiamiento Educativo.

Por las disposiciones que se establecen en otros artículos del texto de la norma se debe contar con el consenso de los sectores sociales, del Congreso de la Nación y de las jurisdicciones provinciales. En consecuencia, esta ley tendría que ser ratificada, porque es una ley convenio igual que la Ley de Coparticipación Federal. También tendría que contar con el acuerdo de los gobiernos provinciales y con el trámite de ratificación de las Legislaturas provinciales, como lo planteamos al momento del debate de la Ley de Financiamiento Educativo, lo que fundamentalmente está establecido por el artículo 75, inciso 2, segundo párrafo, de nuestra Constitución Nacional, que se refiere a la ley convenio de Coparticipación Federal. Pero especialmente el inciso 3 de este artículo 75 sería el de aplicación para este caso que dice: “establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables, por tiempo determinado, por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara”.

Tanto el concepto de ley convenio como el inciso 3 del artículo 75 establecen que si en el texto de la ley decimos que las provincias están obligadas a garantizar todas estas situaciones que tienen que ver con decisiones políticas de inversión educativa y de aplicación de recursos de coparticipación, esta ley nacional debe establecerlo con el acuerdo de los gobiernos provinciales. Entonces, pone sobre la mesa, por los artículos 80 y 81 y otros concordantes, el debate federal.

Creemos que para que esta ley pueda cerrar

el marco de consenso de ley general de educación para que el país recupere el principio de identidad nacional y unidad educativa nacional que establece el artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional, el acuerdo tiene que contar con la ratificación de los gobiernos provinciales. Entonces, éste es un tema que volvemos a traer al debate y que consideramos central en cuanto a que esta ley, que pasó por todas las instancias del consenso, pueda aplicarse y cumplirse. De nada sirve que le digamos a las provincias que hagan tal o cual cosa.

Por ejemplo, con la Ley de Financiamiento Educativo, cuántas provincias no van a presentar dificultades en sus finanzas públicas el año que viene porque no están en la misma situación que el gobierno nacional. Hay muchas provincias en las cuales 80 por ciento de los gastos están comprometidos en los sueldos y no es como el Estado nacional, en donde el compromiso en erogaciones corrientes no supera el promedio de 30 por ciento. Repito, las provincias en las cuales 80 por ciento de sus erogaciones corrientes se destinan al personal y es fundamental un tercio de ese gasto en educación se encuentran ante una situación comprometida. Entonces, no van a cumplir con la Ley de Financiamiento Educativo; por lo tanto, no podrán cumplir con la inversión de 6 por ciento del Producto Bruto Interno para 2010. También es injusto que 60 por ciento sea puesto por las provincias y 40 por ciento por la Nación. Los artículos 80 y 81 también contemplan este debate.

El tema del agregado del artículo 80 que planteamos es tan importante porque muestra que el debate central de la sociedad argentina tiene que girar en torno de un nuevo sistema educativo con una firme decisión política, porque a través de la modificación del sistema educativo y de la inversión en educación vamos a poder luchar contra el trabajo infantil.

Del foro sobre trabajo infantil que realizamos en la Comisión de Trabajo, pudimos extraer varias conclusiones. En esos encuentros, UNICEF nos dijo que el promedio de los chicos de 5 a 13 años que trabajan en el norte argentino son trabajadores rurales e ingresan mensualmente a sus hogares 22 pesos. Este es el ingreso que aportan a la economía familiar los chicos argentinos. Son datos oficiales de un censo reali-

zados por UNICEF. Es decir que cuando nos proponemos levantar la edad mínima de admisión para el empleo —está en 14 años— a 15 años, para llegar gradualmente a los 18 años, debemos ir en paralelo con el debate de la Ley de Educación. Porque si en esta ley se plantea la obligatoriedad en la educación secundaria, el chico está trabajando o está en la escuela. Ahora, para que el chico esté en la escuela, tenemos que generar las condiciones objetivas u operativas para que efectivamente lo esté. No sólo establecer declamativamente que garantizamos una ley de la educación secundaria si en verdad no generamos las condiciones para garantizarlo.

El agregado del artículo 80 que planteamos tiene que ver con esto. Ese agregado está estableciendo un seguro universal que garantice condiciones mínimas de acceso para los chicos, a lo que hay que sumar las decisiones de inversión, de infraestructura educativa de las escuelas rurales, de toda una infraestructura que todavía está pendiente.

No decimos que este gobierno o el Estado tiene que resolverlo de una día para el otro. Está claro que estamos planteándonos objetivos de política pública y estamos poniendo en el centro de la escena este debate. Pero tiene que ver, pues el debate de la Ley de Educación Nacional es el de la lucha en contra del trabajo infantil, a partir de decisiones de política pública que no sólo sean declamativas en el texto de la ley.

Entonces, para terminar el análisis de estos artículos 80 y 81, estaría el agregado de un párrafo para el artículo 80. Dejamos planteado que tiene que haber en las disposiciones transitorias una norma que diga que esta ley tiene que ser ratificada por los gobiernos provinciales, por aplicación del artículo 75, incisos 2 y 3 de la Constitución Nacional. Porque nosotros no podemos —reitero— tomar decisiones en un debate federal sobre recursos que les pertenecen, después de la distribución de la coparticipación, a las provincias.

Otro debate que planteamos está en línea de igualdad e inclusión y tiene que ver con el sistema de becas. En el artículo 138, estamos planteando agregar el siguiente texto, que pedimos sea tenido en cuenta. En caso contrario, vamos a votar en forma negativa.

Sr. Presidente (López Arias). — Señor se-

nador: la senadora Bortolozzi le pide una interrupción.

Sr. Morales. — Cómo no.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra la senadora Bortolozzi.

Sra. Bortolozzi. — Señor presidente: quiero agregar a lo que dice el colega que el artículo 5° de la Constitución Nacional también expresa que a las provincias se le encomienda la educación primaria. Entonces, estoy de acuerdo con la propuesta de la otra bancada, con referencia a que las provincias deberían tener que refrendar esta ley, a no ser que haya un convenio marco.

Como bien sabe el señor ministro, en Formosa, tenemos la Ley Integral de Educación de la provincia. Entonces, acá estaríamos en un conflicto de normas. No obstante, por disciplina partidaria y por estar muy contenta con esta iniciativa, voy a votar favorablemente este proyecto. Pero quería expresarles esa coincidencia.

Sr. Presidente (López Arias). — El senador Pichetto solicita una interrupción.

Sr. Morales. — Cómo no.

Sr. Pichetto. — Quiero manifestar que esa no es la posición del bloque. Nuestro bloque va a respaldar la ley como está planteada. Es decir, una ley referencial en el marco de la Constitución Nacional para todo el país. Porque no puede haber provincias que tengan una educación parecida a la de Biafra o a la de África y ciudades como la de Buenos Aires, que son del Primer Mundo. Tiene que haber un marco igualitario, un sentido de la equidad en el planteo de la educación para la Argentina. Y éste es el espíritu, la propuesta y el proyecto que respaldan el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Educación.

Discutiremos este tema oportunamente, cuando me toque hablar, senador Morales. No creo que haga falta una ley de adhesión de las provincias. De modo que oportunamente vamos a contestar sobre ese tema.

Sólo quería decir que la posición política del bloque es la que acabo de sostener y la que sostuvieron los miembros informantes de la comisión, senadoras Gallego y Bar.

Sr. Presidente (López Arias). — Señor senador Morales, continúe con su exposición.

Sr. Morales. — Como recién se sentó el se-

ñor presidente del bloque, no sé si me escuchó totalmente o sólo una “colita”.

Sr. Pichetto. – Lo vi y escuché por Senado TV.

Sr. Morales. – Entonces, quizás fui mal entendido.

Estamos totalmente de acuerdo con el planteo del señor senador Pichetto.

Realmente, el objetivo que se propone el proyecto es resolver el problema de la fragmentación y recuperar un proyecto nacional de educación, para que haya igualdad para todos los ciudadanos y equidad, según las realidades de las distintas jurisdicciones del país. Inclusive, hay propuestas de nuestra parte que tenemos pensado agregar, de modo que seguramente serán tomadas cuando el planteo sea hecho por la señora senadora Mastandrea.

El proyecto de ley en consideración, ni más ni menos, requiere un proceso de consenso que incluye a las provincias y que, como todos saben, son las que delegaron facultades para que naciera esta nación. No hay que olvidar que las provincias son las que detentan el poder originario. Entonces, no se puede eludir la participación de las provincias argentinas en el proceso de consenso de una ley tan trascendente como ésta.

Está claro que puede haber consenso de las fuerzas políticas y que lo hay también de los sectores sociales, ya que se viene trabajando desde hace tiempo con una gran responsabilidad por parte de las autoridades del Ministerio de Educación. Ya hemos dicho que compartimos totalmente este proceso.

No obstante, también decimos que hay que tener cuidado, porque por los artículos 80 y 81 se le exige a las provincias que hagan determinadas cosas mediante la asignación de recursos y según la coparticipación que reciban –artículo 75, inciso 2) y 3), que actúan concordantemente– y eso requiere el acuerdo de las provincias. A raíz de esta postura es que luego haremos explícita una propuesta concreta.

Entonces, estamos totalmente de acuerdo con el planteo del señor senador Pichetto.

En cuanto al tema de las becas, queremos que se genere un texto operativo y coercitivo, que defina políticas públicas y no sea tan sólo

una expresión de deseos. Es decir, lo mismo que anhelamos para la universalización y garantía del acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes, lo planteamos para las becas.

Por eso, en ese punto, vamos a plantear un agregado al artículo 138, que dirá: el sistema de becas destinado a jóvenes y adultos deberá complementar la cobertura total de la demanda educativa de esa franja etaria. Es decir que tiene que haber una mirada integral en la aplicación del sistema de becas.

¿En qué consiste el planteo? Debe haber una fuerte política del Estado en materia de acciones compensatorias. Eso es lo que acompaña la decisión escrita en la norma en el sentido de que se pueda cumplir con los objetivos que compartimos.

También nos planteamos un debate vinculado con la laicidad.

En el artículo 8º, queremos puntualizar el concepto de que la educación de gestión estatal es laica. Es un debate vinculado con la educación y que tendrá que ver con alguna futura reforma de la Constitución Nacional, ya no vinculada con la modificación de períodos de mandatos presidenciales, sino con asuntos centrales atinentes a la separación entre Estado y religión.

Entonces, introducir este concepto en el artículo 8º marcaría un camino importante.

En línea con esta postura, hemos planteado un texto distinto para el artículo 65, que precisa mucho más cuál es el esfuerzo del Estado. Y nosotros no estamos en desacuerdo con que el Estado realice un aporte a las escuelas públicas de gestión privada, pero sí decimos que hay que marcar muy bien el camino y la cancha de los objetivos de la política pública.

Voy a leer el artículo 65 completo, para que quede claro: La asignación de aportes financieros por parte del Estado destinado a los salarios docentes de los establecimientos de gestión privada, reconocidos y autorizados por las autoridades jurisdiccionales competentes, estará basada para su asignación atendiendo prioritariamente los siguientes criterios objetivos: las instituciones educativas cuyos propietarios sean una organización social sin fines de lucro, que no perciban ningún tipo de arancel, que cuenten en su matrícula con mayoría de estudiantes cuyos recursos económicos no les permitan efec-

tivizar su demanda escolar, y las instituciones ubicadas en zonas donde la demanda de cobertura educativa no se encuentre satisfecha por instituciones de gestión estatal.

Nos sumamos a la propuesta que realiza el presidente de la bancada del socialismo, senador Giustiniani, que plantea la obligación de pagar los aportes. Sucede que hay instituciones públicas de gestión privada que no pagan los aportes, generándose una situación de incumplimiento. Sería bueno marcar cuál es el camino sobre una decisión que toma el Estado de apoyo a la gestión privada, pero sobre determinados parámetros, privilegiando la escuela pública de gestión estatal y recuperando la presencia y el rol del Estado para garantizar la educación igualitaria para todos.

Eso es lo que planteamos con relación a los artículos 8° y 65.

Sra. Bar. – Señor presidente...

Sr. Morales. – Me faltan pocos artículos.

Sr. Presidente (López Arias). – Senador Morales: su tiempo está terminado. Lo estamos escuchando con atención, pero le pido que vaya redondeando.

Le solicita una interrupción la senadora Bar. ¿Se la concede?

Sr. Morales. – Sí.

Sr. Presidente (López Arias). – Senadora Bar, le pido que sea breve, porque el senador Morales está excedido en su tiempo.

Sra. Bar. – Señor presidente: quiero preguntarle al senador Morales si cuando él habla de una asignación universal incluye a todos los niños y niñas que asisten al sistema educativo, y si ahí incluye a los alumnos y alumnas de escuelas privadas, o si estamos hablando de una escuela chárter o del cheque para los chicos que tal vez no necesiten esa asignación. Quiero sacarme esa duda, nada más.

Sr. Presidente (López Arias). – Continúa en el uso de la palabra el senador Morales.

Sr. Morales. – Señor presidente: hay un seguro de acceso a la escolaridad que implica la obligatoriedad por parte de los padres, madres o tutores de la matriculación de los menores de edad en todos los niveles del sistema educativo formal. Está claro que la lógica es que quienes tienen capacidad de acceso no están incluidos.

Pero lo que estamos haciendo con este texto es marcar una política que universalice el ingreso ciudadano y el acceso de los niños, niñas y jóvenes a la educación.

El tema de garantizar igualdad y lo que decía el senador Pichetto, que compartimos, tiene que ver con el artículo 67. En ese artículo, hemos hecho una propuesta tendiente a evitar la fragmentación de nuestro sistema educativo, que tiene que ver con las remuneraciones diferenciadas que existen en las jurisdicciones de todo el país. El salario docente en gran medida está integrado por conceptos no remunerativos y no bonificables, es decir, pago de adicionales en negro a los docentes.

¿Queremos un sistema que resuelva todos los problemas para que realmente sea una política pública del Estado? Entonces, resolvamos también el problema de la remuneración de los docentes y marquemos cuál es la línea: mínimamente, que todos los conceptos que se paguen a los docentes sean remunerativos y bonificables. De esa forma, se va a igualar la brecha y va a permitir a los docentes que cuenten con un básico que luego les permita acceder a la jubilación.

En el inciso respectivo, decimos que sea una jubilación que garantice el 82 por ciento móvil. No voy a leer los decretos que se han firmado en el Ministerio de Trabajo que, justamente, van en esta línea. Esto es, están planteando la recuperación del viejo concepto de un sistema especial jubilatorio para los docentes, recuperando el principio del 82 por ciento móvil. Pero tenemos que establecerlo en la ley, porque de esa forma se va a generar la posibilidad de que haya recambio, de que se oxigene el sistema y que los docentes vivan en condiciones dignas.

Hoy tenemos una escuela nacional en donde lamentablemente los maestros tienen que hacer de psicólogos de los chicos, por su situación social, de pobreza, por la fragmentación el propio tejido social. Después, los propios docentes tienen que ir al psicólogo, por la situación que atraviesan sus familias, por los bajos salarios y porque tampoco se pueden jubilar.

Estos temas, con relación a lo que ha planteado el senador Pichetto –que compartimos–, hay que establecerlos expresamente en el artículo 67, incisos g) e i). Es decir, la remuneración no puede tener ningún concepto en negro.

Todos los conceptos tienen que ser remunerativos y bonificables, tienen que ser básicos para la jubilación. Debemos dejar expreso el 82 por ciento móvil para la jubilación. Y tenemos que dejar expreso el 82 por ciento móvil para la jubilación.

Yo solamente tiro los ejes. La senadora Alicia Mastandrea va a plantear en particular las observaciones que tenemos sobre los artículos 79, 83, 94, 97 y 99, que justamente tienen que ver con lo que acá se ha planteado. Es decir, objetivos de convergencia territorial y de reducción de la brecha educativa entre grupos socioeconómicos. Y el perfil permite resolver las inequidades territoriales, regionales y los problemas que realmente tiene que resolver esta ley, para que no sea una expresión de deseo y resulte operativa.

El otro tema tiene que ver con la calidad educativa, con las mediciones y los parámetros de medición de calidad educativa, y lo explicará la senadora Mastandrea.

Creemos, además, que a este proyecto le falta establecer con precisión los tiempos, los plazos de la reglamentación; es decir, cuándo se pone en vigencia. Esto para que tengamos una norma que sea operativa.

En síntesis, nuestra preocupación es cuáles son aquellas normas que podemos introducir, que “operativicen” estos principios, muchos de los cuales compartimos y están en este proyecto de ley, en este debate que ha puesto el gobierno nacional, que también compartimos pero que creemos que tiene estas falencias.

Con estas observaciones en particular, estamos dispuestos a votar en general el texto del proyecto de ley. Seguramente, en estos artículos en particular, en la medida en que no sean tomadas nuestras sugerencias, votaremos en contra.

Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra la senadora Fellner.

Sra. Fellner. – En el mismo sentido que la senadora Gallego y la senadora Bar, de mi bloque, para no ser reiterativa y en honor al tiempo que tenemos, quiero decir que no coincido en casi absolutamente nada de lo que escuché recién. Porque, justamente, creo que si hay algo que hace este proyecto de ley, al reconocer responsablemente la diversidad cultural, es fortalecer la identidad nacional.

Claro, cuando se tiene un concepto nacionalista, en donde solamente se ven los límites y parecería que todos tenemos que ser iguales, lógicamente se habla así, a la ligera –como creo que se ha escuchado acá– de la identidad nacional.

Pero si aun cuando sabemos que ese concepto nacionalista nos hizo tanto mal nos atrevemos a hablar de “lo nacional”, ya estamos en otro concepto.

Tampoco hago futurología, porque imagínese si lo hubiésemos hecho hace un tiempo cómo nos estaríamos viendo.

Así que para ser práctica, nada más y hablando del tema que me toca hablar, que es la parte del reconocimiento de la diversidad cultural y de los pueblos aborígenes, creo que este proyecto de ley justamente no habla de igualdad, porque acá no podemos hablar de igualdad. Tenemos que hablar de equidad y ése es otro concepto que creo que equivocamos, según lo que escuché hablar recién.

¿Fortalece? Sí, claro que fortalece la identidad nacional. Cuando lo escuchaba hablar al senador Morales, recordaba que en 2002, en mi provincia, Jujuy, se hicieron unas jornadas de educación intercultural bilingüe. Cuando tenemos un proyecto y este tipo de cosas, del sueño se pasa a creer, del creer se pasa al atreverse y del atreverse se pasa al hacer. En aquella época todo era así: nos invitaban a soñar, algunos creían más, otros creíamos mucho menos; pero del atreverse al hacer, absolutamente nada.

Creo que este proyecto de ley es justamente eso lo que hace: se atreve a hablar de diversidad cultural, a hablar de los pueblos indígenas, de la identidad nacional y nos da las pautas para poder hacer. Está muy lejos de la realidad decir que este proyecto de ley es o puede llegar a ser una expresión de deseo.

El tema queda establecido en dos partes. En el artículo 1º, inciso 17, lo dice claramente; justamente allí reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos aborígenes. Ahí ya nos abre la brecha y nos da la idea de cómo va este proyecto de ley y ahí es cuando nos hace sentir en este soñar, creer y atreverse que estábamos hablando.

Además, hay un capítulo íntegro que es para la educación intercultural bilingüe, donde habla

—y lo habla muy bien— de los educandos, de los educadores, de la formación de esos maestros y, también, se refiere a la investigación. Sin embargo, da un paso mucho más allá, cuando en los contenidos curriculares de absolutamente todas las escuelas de nuestro país va a haber un conocimiento, un enseñar y un aprender de los pueblos aborígenes, ya no desde el simple hecho de pensar qué pueblo aborígen existía en qué región de nuestro país, sino hablando de esa cultura que aún existe en muchas regiones. Tenemos muchísimos pueblos aborígenes que aún mantienen su cosmovisión, su cultura, su lengua, sus costumbres y eso es lo que se va a aprender en todas las escuelas de nuestro país.

Uno sueña —y eso es lo que hablábamos en un principio— que chicos de la Capital Federal puedan saber que palabras —que también usó recién el senador Morales— como “cancha” provienen del quechua. Sería muy bonito que más allá de aprender historia sepan que eso todavía existe y es una realidad en nuestro país. Tantas veces hablamos en este Senado de leyes para el desarrollo sustentable. Justamente ahí está el desarrollo sustentable: en la diversidad. Y en la posibilidad de que desde esa diversidad podamos crecer y de que nuestros niños, niñas y adolescentes aprendan que esa diversidad es una fortaleza. Ahí sí, como hablábamos recién de la identidad nacional y no de un concepto nacionalista, creo que está uno de los pilares del desarrollo sustentable.

Por último, pido permiso para insertar el resto de mi discurso y considero que este proyecto de ley es muy bueno, porque habla de la diversidad cultural, de los pueblos aborígenes y fortalece la identidad nacional argentina y latinoamericana. Creo que para todos los que estamos en cultura y entendemos la dimensión de la diversidad, este proyecto de ley no hace más que fortalecer lo que nosotros muchas veces llamamos una “cultura del respeto”, del poder estar y mantenerse en una misma tierra y de la “cultura de la paz”.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra la señora senadora Mastandrea.

Sra. Mastandrea. — Señor presidente: nuestro bloque se alegra de estar tratando hoy un tema trascendental como es la educación, que lo ha sido siempre para nuestro partido. Queremos comenzar con coincidencias básicas que

tenemos con el proyecto de ley.

Primero, introduce la obligatoriedad de la educación secundaria, así como propone la universalización de la sala de cuatro años y la jornada extendida. También, permite las distintas modalidades educativas, a las que no me voy a referir porque ya lo han hecho aquí, pero en el caso de las provincias del norte, el tema de la interculturalidad bilingüe es fundamental.

Además, permite saldar en parte la unificación de la estructura educativa. Algunos cálculos dicen que tenemos 54 modalidades y pasamos a dos, aunque nuestro bloque hubiera pretendido que esta discusión se hubiera saldado y pudiéramos hoy hablar de una sola estructura. Fundamentalmente, nos alegramos por incorporar el concepto de equidad educativa y promoción de la igualdad.

Indudablemente, creemos que en base a esto, con lo cual coincidimos ampliamente, hay algunos conceptos que quedan a mitad de camino. Nos hubiera gustado poder concretar, de modo de garantizar que esto no fuera un proyecto de ley de aspiración de deseos, sino un proyecto de ley que se materializara en realidades.

Debo aclarar que de los aportes que he hecho en la comisión, he logrado que se acepten algunos de ellos, por los cuales se han introducido modificaciones a algunos artículos. Realmente, me considero satisfecha por eso, pero es importante remarcar aquí los otros artículos en los que no hemos logrado coincidencias.

En ese sentido, hay un tema que se llama “círculo vicioso de la pobreza de las provincias del norte argentino”. Ese círculo conlleva un factor detonante. Creo que la educación es el único factor de movilización social que permitiría revertir el círculo de la pobreza de las provincias argentinas. Cuando evaluamos la planilla del índice de desarrollo humano de la República Argentina, vemos que estamos en igualdad de condiciones, en los primeros puestos de economía, con un marcado retraso productivo y empresarial: Corrientes, Chaco, La Rioja, Formosa, Santiago del Estero, Jujuy, Misiones y San Juan.

Entonces, no basta con decir “por algo estas provincias están así”, o “tendrán gobernantes malos”; porque, indudablemente, deberíamos decir que los gobiernos de Jujuy, de Formosa, de Santiago del Estero y del Chaco están implementando malas políticas, y no creo que sea así.

Sin duda, el retraso que sufre el norte argentino se debe a factores estructurales, a un proyecto de país que no piensa que el Norte es parte de la República Argentina; pero también estoy convencida de que la educación es el arma poderosísima que tiene cualquier partido político o cualquier proyecto político para revertir esta situación. Entonces, cuando me dicen que esto no debería estar incluido en este proyecto de ley, yo sostengo que sí; porque si no estuviera incluido en esta norma, que es la que nos va a permitir hablar nuevamente de educación, ¿dónde lo estaría?

Por otra parte, en nombre exclusivamente propio—no del bloque—quiero introducir el concepto de “educabilidad”.

—Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª del Honorable Senado de la Nación, senadora Mirian Belén Culletti.

Sra. Mastandrea. — Quiero citar a Néstor López en el libro *Equidad educativa y desigualdad social*, que es una publicación de la UNESCO.

“El concepto de ‘educabilidad’ apunta a identificar cuál es el conjunto de recursos, aptitudes, o predisposiciones que hacen posible que un niño o adolescente pueda asistir exitosamente a la escuela, al mismo tiempo que invita a analizar cuáles son las condiciones sociales que hacen posible que todos los niños y adolescentes accedan a esos recursos para poder así recibir una educación de calidad.

“Cuando uno habla con los docentes, es habitual escucharlos decir que, en las condiciones en que vienen sus alumnos, resulta muy difícil garantizar una clase ordenada y buenos resultados en el aprendizaje. La mala alimentación, la falta de materiales, el cansancio, la imposibilidad de concentrarse son indicios de una cotidianidad de los niños que dificultan el buen aprovechamiento de las prácticas educativas. Hay zonas en nuestra región en que la exclusión es tal que un número importante de niños no pueden ir a la escuela pública de su barrio, pues no cuentan con el mínimo de recursos materiales o con una cotidianidad que haga posible el acceso a esas instituciones.”

Sin duda, podría seguir hablando de lo que yo entiendo por “educabilidad”. Y nuevamente sostengo que éste es un tema que no debe abor-

darse solamente desde la ley de educación, sino desde la ley de educación y, también, desde otros parámetros.

No es posible fortalecer la capacidad de enseñanza de la escuela sin la capacidad de aprender de los alumnos; eso es lo que vivenciamos en las zonas más pobres del país. Pero para ello es necesario otorgar a las escuelas que atienden a los grupos vulnerables la capacidad para compensar las desventajas con las que llegan a la escuela. Los niños llegan con problemas de nutrición, de salud, de apoyo psicopedagógico, de seguimiento familiar, etcétera. Y tampoco es cuestión de que el docente se ocupe de todas estas cosas, porque entendemos que ya tiene muchas actividades que le son propias.

Ahora bien, decir que el docente no se ocupa, no es lo mismo que decir que la escuela no se ocupa. Realmente no tiene sentido que al docente se lo cargue con más actividades; sí tiene sentido que la escuela se haga cargo de esto. Y hago hincapié en que no es lo mismo fortalecer la capacidad de enseñar, que posibilitar la capacidad de aprender. Digo esto porque es lo que sufrimos y vivenciamos a diario, con docentes idóneos y especializados, pero que no logran revertir esta situación.

Sé que esta visión de la escuela y de la “educabilidad” como eje de la política se contradice con la de muchos gremios docentes. Sin embargo, considero que es fundamental que, por lo menos, la analicemos y la repensemos, porque esto serviría mucho para vencer fricciones en el norte argentino.

He articulado mi propuesta—y voy a solicitar permiso para insertarla, porque no la voy a poder desarrollar en su totalidad—en tres ejes fundamentales: el eje de la “educabilidad”, el eje de la convergencia territorial y los sistemas de equidad, y el eje de los sistemas de evaluación y transparencia, que debe tener todo proyecto de ley de educación.

Para incluir el concepto de “educabilidad” propuse modificaciones en los artículos 4º, 11 y 80, que no voy a leer dado que luego voy a pasar en forma escrita para su incorporación.

Y agrego en el artículo 18 mi pedido de que el ciclo de desarrollo infantil de educación inicial se divida en dos ciclos, constituyendo una unidad pedagógica desde los 45 días a los 5 años de edad inclusive, organizados el primero desde

los 45 días hasta los 2 años, y otro desde los 3 hasta los 5 años de edad.

En cuanto al objetivo de convergencia territorial, la brecha en calidad y resultados educativos entre regiones de la Argentina y entre grupos socioeconómicos es una característica dominante en el análisis de nuestro sistema educativo. Esto implica, en primer lugar, identificar las zonas y las escuelas de atención prioritaria sobre la base de indicadores objetivos. Obsérvese que, si se toman los gráficos donde el CIPPEC evalúa los resultados obtenidos por provincias, se comprobará que no necesariamente en las que tienen mayor pobreza se obtienen los peores resultados. Existen algunos indicadores, como por ejemplo los resultados de las pruebas de lengua, que reflejan que Formosa, Chaco y La Rioja –que son provincias muy pobres– presentan buenos resultados. Lo mismo ocurre, en porcentajes de contenidos enseñados, con las provincias de Catamarca, Chaco y Jujuy. Esto quiere decir que no podemos ponderar exclusivamente a partir de la pobreza el resultado que se obtiene.

Sin embargo, cuando analizamos el gráfico de ponderación del CIPPEC de programas compensatorios vemos que, indudablemente, las regiones más pobres son las que reciben mayor cantidad de dinero en concepto de compensación por alumno por año. Así, tenemos encabezando esos gráficos de ponderación a Tucumán, Chaco, Jujuy y San Juan.

Ahora bien, la diferencia entre las provincias que más reciben y las que menos reciben es, escasamente, de 20 pesos por alumno por año. Por eso, creemos que por más que ese gráfico nos coloque a las provincias más pobres en los primeros escalones, esa diferenciación es totalmente insuficiente. Creo que aquí valdría la pena efectuar una discriminación positiva, como expresara el señor senador Morales para vencer estos índices.

Sra. Presidenta (Curletti). – Señora senadora: le pido por favor vaya redondeando su exposición.

Sra. Mastandrea. – Perfecto, señora presidenta.

No voy a poder desarrollar el tema de la transparencia en la evaluación de los contenidos educativos. Voy a insertar mi discurso al respecto.

Cuando planteé en comisión el tema de índices que permiten una evaluación distinta me dijeron que después se dictaría una ley posterior. Creo que éste es el momento de tener un capítulo destinado a la evaluación, donde en los resultados obtenidos no se identifique al alumno ni al docente, pero sí a la institución educativa. Porque –vuelvo a decir– creo que esto daría transparencia a todo el sistema y posibilitaría que todos conozcamos la realidad de las escuelas de nuestro país.

En consecuencia, con la solicitud de insertar luego la modificación propuesta para cada artículo, agradezco el tiempo de exceso empleado.

Sra. Presidenta (Curletti). – Tiene la palabra el señor senador López Arias.

Sr. López Arias. – Señora presidenta: le agradezco que ocupe la Presidencia para que yo pueda decir unas breves palabras sobre esta norma que estamos considerando.

El primer concepto se refiere al claro apoyo a la sanción de esta iniciativa tan importante, porque en las sociedades modernas el tema central es el educativo. Esta norma que estamos por sancionar va a cumplir un papel histórico trascendental, además de un muy buen intento para avanzar y resolver los problemas que existen en la educación argentina, que todos conocemos y que son motivo de preocupación generalizada y de participación en la discusión de esta ley. Por lo tanto, voy a votar favorablemente, tanto en general como en particular, todo el articulado de la normativa.

Pero como represento a una provincia, no puedo menos que expresar y transmitir algunas de las inquietudes y dudas que se plantearon en Salta respecto de la sanción de esta ley, lo que no invalida mi apoyo irrestricto a una normativa que sin duda tiene que recibir el apoyo de todos. Es más, creo que tiene que ser aprobada con el mayor consenso posible para darle la fuerza institucional que necesitamos, para que sea un verdadero espacio de cambio en la política educativa argentina.

Ahora bien, ¿cuáles son esas dudas? Una de ellas es la vieja discusión de las facultades Nación-provincias para reglamentar o para dictar normativa respecto del tema –así como ocurre con el tema del medio ambiente– y que no está lo suficientemente saldada en la Constitución Nacional.

En general, no sólo el Poder Ejecutivo de mi

provincia sino también desde la Legislatura local me han hecho llegar las inquietudes en este sentido, que comparto parcialmente. Francamente, creo que el estado de fragmentación en que se encuentra la educación argentina requiere de una gran política nacional, que debe hacerse a través de una normativa que nos abarque a todos. En este sentido, creo que lo que establece la Constitución es suficientemente claro.

La reforma constitucional de 1994 amplía las facultades del Congreso Nacional en materia educativa y abre la posibilidad de dictar las políticas de base y de armonización entre los distritos, consagrándolo como una facultad del Congreso de la Nación. Esto lo comparto. Creo que éste es el ámbito donde se puede dictar esta normativa, pero también entiendo que para evitar todo tipo de duda habría que ser muy fino en la definición de cuál era el límite de esta política general y por dónde entramos en el ámbito de las políticas particulares, que son facultades exclusivas de los estados provinciales.

En su momento, hice entrega a la comisión de mis propuestas y de las que me hiciera llegar el Ministerio de Educación de mi provincia. Aprovecho para felicitar a todos sus miembros por el trabajo que han hecho juntamente con el Ministerio de Educación. Se trató de un trabajo abierto y amplio en el que se recibieron las inquietudes de todas las provincias. Por eso no quiero dejar de felicitarlos.

Algunas de estas propuestas fueron recogidas y otras, no. Sé, porque así se anticipó, que no se van a aceptar modificaciones de este texto en el momento de la votación. De todos modos, señalaré algunas propuestas de modificación. En el artículo 118, que comienza diciendo: “las resoluciones del Consejo Federal de Educación serán de cumplimiento obligatorio, cuando la Asamblea así lo disponga...” propongo que se agregue “...y se refieran a aspectos generales de organización y armonización de la política educativa...”, continuando luego tal como está redactado el artículo en el proyecto original. A mi entender, esta modificación era lo suficientemente amplia para darle al Congreso de la Nación todas las facultades para actuar y toda la fuerza a la ley nacional, preservando adecuadamente al mismo tiempo las facultades de los estados provinciales.

Como la comisión anticipó que esta iniciativa se va a votar sin modificaciones, me voy a limitar a agregar dos propuestas de artículos para ser tratadas al final, lo que no me va a permitir votar afirmativamente el texto de la ley.

La primera de ellas se refiere a que lo ideal sería que se siguiera el mecanismo que tuvo el Pacto Federal Educativo, por el cual en las discusiones de las adhesiones se establecieron incluso políticas compensatorias para permitir una adecuada inserción de todos los distritos en la política nacional educativa. Esto lo voy a plantear en un artículo aparte para tratarlo al final.

Pero fundamentalmente, la preocupación de los estados provinciales se refiere al tema del financiamiento futuro de esta reforma educativa.

La Ley de Financiamiento Educativo, en su artículo 5º, si mal no recuerdo, establece que todo lo que es incremento de recursos que ingresa en el sistema, tiene como asignación prioritaria el mejoramiento salarial docente, que es un objetivo que compartimos todos –no creo que haya alguien que no crea que los haberes docentes no deban ser mejorados– y el tema de la calificación y otros aspectos de ese tipo, pero no comprende el tema de infraestructura y equipamiento educativo entre las prioridades de asignación de estos nuevos recursos. Y esta ley que es muy ambiciosa, cosa que comparto, realmente va a significar un mayor costo y un mayor esfuerzo en el sistema educativo. La ampliación de la jornada y de la edad obligatoria va a requerir nuevas inversiones, y hasta tanto se resuelva el tema de las estructuras –que en mi provincia se ha optado por seis años para el primario y seis para el secundario–, en los distritos en los que no esté adecuada la normativa que finalmente se imponga va a ser necesario incurrir en gastos para adecuar las plantas docentes, los edificios y todo lo necesario para que el sistema educativo funcione.

En este sentido, uno teme que en los estados provinciales podamos llegar a una situación en que este enorme esfuerzo que hay que hacer para adecuar la educación argentina a los tiempos que nos toca vivir, va a requerir de un apoyo muy claro de parte del gobierno nacional que acompañe al distrito, que en muchos casos no van a estar en situaciones de poder afrontar estos problemas. No es el caso de mi provincia. Salta

ha hecho un gran esfuerzo para mejorar la calidad educativa. De haber estado tradicionalmente en el último lugar en materia de calidad educativa durante muchas décadas, en los últimos tiempos hemos logrado superar la media nacional, lo cual demuestra que se ha hecho un esfuerzo con resultados que, si bien no son los ideales, verdaderamente muestran un camino positivo. Pero la mayoría de los distritos hoy están en una situación complicada y creo que si no se establece claramente que haya una obligación del gobierno nacional de financiar los nuevos gastos que van a existir en la medida en que se vaya aplicando la ley, nos podremos encontrar con algunos problemas de funcionamiento del sistema en distintos distritos provinciales.

Por eso propongo dos artículos –cuyos textos ya entregué a secretaría para que los sometan a consideración en su momento– para que sean agregados a continuación del artículo 143. El primero de ellos dice: “sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 121, la Nación se compromete a garantizar el financiamiento de los mayores costos en los que deban incurrir las provincias para dar cumplimiento a las disposiciones de esta ley”; y el otro dice: “invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al régimen establecido por la presente ley”.

Son normas muy breves que –insisto– propongo para el final porque quiero que la aprobación de este proyecto de ley se realice con el mayor consenso, ya que creo es una ley liminar en la historia de nuestro país y tiene que ser el cimiento con el que podremos edificar la Argentina del futuro.

De modo que con estas breves consideraciones y acompañando con mucho entusiasmo el trabajo que han hecho, tanto la Comisión como el Ministerio de Educación, anticipo mi voto favorable con estas observaciones que acabo de hacer.

Sra. Presidenta (Curletti). – Tiene la palabra la señora senadora Giusti.

Sra. Giusti. – Señora presidenta: en honor a la brevedad que el tiempo nos impone, voy a insertar mi discurso, pero no puedo dejar de mencionar algunas reflexiones que me han surgido después de ciertas alocuciones escuchadas en este recinto.

En principio me siento absolutamente representada por las exposiciones de los miembros informantes de mi bloque, así como me parece importante también que rescatemos el trabajo de acompañamiento en la génesis y en la formulación definitiva de esta ley que desde el bloque y desde la Comisión de Educación se ha realizado este año.

Pero algunas aseveraciones que he escuchado en otras exposiciones me hacen pensar como si estuviéramos discutiendo el sistema educativo argentino treinta años atrás. No creo de ninguna manera que pueda reducirse a una linealidad tal como la que se planteó en este recinto la cuestión de los docentes que tienen que asumir un rol de psicólogos y después ellos mismos tienen que recurrir a algún tipo de ayuda profesional. Creo que la intención, el propósito más firme de esta ley expresado por la senadora Bar cuando habló de los principios, las metas, los fines, es recuperar precisamente el rol fundacional de la educación pública argentina, que refiere a volver a llenar a la escuela de contenidos –como solemos decir los docentes– socialmente significativos. Y ésta es una tarea de todos, no es un mérito o demérito de alguna norma en particular.

Tampoco creo que podamos confundir iniquidad con diversidad regional. Creo que las diversidades regionales son claras en nuestro país, están claramente reconocidas y el proyecto apunta, precisamente, a sostener en un marco de justicia la identidad de esas diversidades regionales.

–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador Marcelo López Arias.

Sra. Giusti. – En lo que hace al financiamiento, creo que está claramente asegurado por todo lo que el actual gobierno invierte en educación, por los aumentos de presupuesto en esa área y por lo que invierten las jurisdicciones.

Debo decir orgullosamente que la provincia que represento, Chubut, es una de las que paga salarios más altos a sus docentes y una de las que más invierte en infraestructura, ya sea con propios recursos o con recursos coparticipados con la Nación. Lo hace en capacitación docente y en recursos materiales y humanos para las escuelas. Pero, realmente, no creo que la situación sea muy diferente en La Pampa, Buenos

Aires, Entre Ríos, Misiones, Formosa y en muchas otras provincias, cada una con sus propias características.

Por otra parte, además de lo que se invierte actualmente en educación, sabemos que el financiamiento está asegurado, porque hay una Ley de Financiamiento Educativo. Además, lo prescribe el artículo 131 de la norma en consideración, ya que el financiamiento no caduca en 2010 en virtud de que el Congreso de la Nación deberá asignar fondos en los presupuestos nacionales.

Por otro lado, existe la posibilidad de suscribir convenios bilaterales de acuerdo con lo que estipula el artículo 12 de la ya mencionada Ley de Financiamiento Educativo.

Por ende, me parece que es una cuestión resuelta y que los docentes, o quienes nos acercamos al abordaje del tema educativo, tomamos más de un imaginario colectivo que de una realidad educativa del país. Me parece que los avances son significativos y sustentables en el tiempo.

Los otros aspectos de la norma fueron suficientemente desarrollados.

Creo que es importante asegurar la escolaridad obligatoria desde los cinco años de edad hasta la finalización del secundario. Me parece importante también la jornada extendida que, seguramente, las jurisdicciones irán implementando en la medida en que les sea posible desde lo material, la infraestructura y los recursos humanos y, a tal fin, es que se dan plazos.

Me parece importante destacar el rol de garante del Estado como custodio de la educación como un derecho individual y social y no como un bien de mercado. Eso marca el sentido humanista de la norma. Por lo tanto, es una herramienta de reconstrucción social. Marca, además, responsabilidades compartidas entre el Estado nacional y las provincias en el marco de lo que define la Constitución Nacional en su artículo 75, de brindar un plan de instrucción general. En este sentido estamos avanzando hoy.

Entonces, teniendo herramientas como la Ley de Financiamiento Educativo y la Ley de Educación Técnica –siendo esta última norma la que recupera la preparación del mundo del trabajo, aunque se haya visto desdibujada en la actual Ley Federal de Educación– creo que el

avance es sustantivo y no se puede dejar de reconocer.

El resto de mis fundamentos lo voy a insertar en el Diario de Sesiones y solamente me cabe decir que votaré afirmativamente en general y en particular el dictamen en consideración.

Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra la señora senadora Caparrós.

Sra. Caparrós. – Señor presidente: voy a ser muy breve porque voy a insertar mi exposición en el Diario de Sesiones. Pero no puedo dejar pasar esta oportunidad para señalar algunos aspectos de la iniciativa en consideración, sobre todo cuando estamos tratando una de las leyes más importantes de este año.

No voy a referirme al contenido de la ley. Mis compañeras de la Comisión de Educación han expresado claramente el contenido del proyecto y el significado que tiene para el sistema educativo.

Sí creo que es importantísimo hacer un reconocimiento al lugar que este gobierno le ha dado a la educación vinculándola con el desarrollo del país. Es de vital importancia tener en cuenta este aspecto y analizarlo en el contexto de las leyes que hemos ido tratando en este Senado de la Nación, que terminan de complementarse con el tratamiento de este proyecto de ley de educación.

No debemos olvidar que hemos tratado las leyes de financiamiento educativo, de protección integral de niños, niñas y adolescentes, y de educación técnica. Se han tomado decisiones políticas de promoción en investigación y ciencia y tecnología. El complemento que nos estaba faltando era la discusión de esta ley de educación.

Se trata de una ley que nace consensuada con un sinnúmero de organizaciones civiles y sociales vinculadas al ámbito educativo. Esto admite un enorme reconocimiento al Ministerio de Educación de la Nación, porque incluso en los lugares más lejanos logró convocarlas para que se pudiera dar este debate y que todos sintieran en este país que son parte de la ley con sus aportes, disidencias y coincidencias.

También quiero rescatar el trabajo de la Comisión de Educación de este Senado. Ese consenso que llevó adelante el Ministerio de Educación también se trasladó al Senado de la

Nación. Hoy una de las senadores de la oposición planteó claramente que se trabajó buscando coincidencias en ese debate y en el enriquecimiento de este proyecto de ley que hoy estamos tratando.

Debemos rescatar las posibilidades de un cambio en la política argentina, que lo está promoviendo el gobierno nacional. Un senador de la oposición también dijo hoy que llevamos muchos años de disidencias y diferencias y que quizás ello hizo que después de diez años estemos discutiendo una nueva ley de educación.

Me parece que frente a los tiempos políticos que se avecinan es importante reflexionar sobre esta necesidad de cambio, especialmente por parte de quienes representan a la oposición, tratando de empezar a encontrar el camino del disenso constructivo y no del disenso destructivo. Debemos lograr que esta ley, una vez que sea sancionada por el Congreso de la Nación, pueda ser aplicada de forma consensuada, con las diferencias y distintas necesidades que tiene cada región del país en esta cuestión de características propias. Pero debemos tener un solo objetivo, que debe ser el de cumplir con aquello que dio origen a esta norma, esto es, que se tome a la educación como una política vinculada directamente con las necesidades de desarrollo que tiene nuestra Nación. Así lo ha planteado el gobierno nacional.

Creo que como génesis de esta ley es lo mejor que nos puede estar pasando en el día de la fecha.

Como lo anticipé, solicito autorización para insertar mi exposición en el Diario de Sesiones.

Sr. Presidente (López Arias). – Antes de conceder la palabra a la señora senadora Pinchetti de Sierra Morales, aclaro que luego de la senadora hay varios senadores anotados en la lista de oradores que no están presentes. Es el caso de la senadora Negre de Alonso y de los senadores Urquía y Pérsico. Cuando les corresponda hacer uso de la palabra y no se encuentren presentes, voy a darlos de baja de la lista. Les pido a los auxiliares de los bloques que transmitan esta decisión de la Presidencia.

Tiene la palabra la señora senadora Ibarra.

Sra. Ibarra. – Señor presidente: le pido que lea la lista de oradores completa para que después nadie diga que no sabía y para que sepa-

mos quiénes están anotados para hacer uso de la palabra.

Sr. Presidente (López Arias). – Están anotados la senadora Negre de Alonso, el senador Urquía, la senadora Vigo, el senador Pérsico, la senadora González de Duhalde, los senadores Jaque, Capitanich, Gómez Diez, Rossi, la senadora Ibarra, los senadores Giustiniani, Sanz y Pichetto. Cuatro de los cinco próximos oradores no están en el recinto.

Tiene la palabra la señora senadora Pinchetti de Sierra Morales.

Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – Quería aclararle, antes de comenzar a hablar, que como miembro informante de mi bloque –dado que hemos presentado un proyecto diferente al de la mayoría– tengo más minutos que el resto de los senadores preopinantes.

Señor presidente: en marzo de 2004 muchos legisladores hoy presentes, reconociendo la necesidad de introducir cambios en la Ley Federal de Educación, acompañamos a la entonces senadora nacional por San Juan, Nancy Avelín, en la presentación de un proyecto de ley que proponía llamar a un Congreso Pedagógico Nacional a fin de estudiar las reformas y modificaciones de la ley vigente.

Ante esto, el ministro de Educación –presente hoy en este recinto– la acusó de intentar alumbra un proyecto con su nombre.

Señor ministro de Educación: respetuosamente le digo en esta oportunidad que si bien Leguizamón trajo a este Congreso la ley que después se conoció como ley 1.420, jamás se la nombró como “ley Leguizamón”.

Veintiséis meses después de nuestra propuesta el presidente Kirchner, durante el acto de lanzamiento del documento base para la discusión de la nueva ley de educación, ahora en tratamiento en este recinto, manifestó que la educación debe encararse como política de Estado para la construcción de un país, concepto en el marco del cual habíamos planteado, más de dos años atrás, nuestra intención de discutir la ley federal.

Nuestro planteo de hoy no es obstruccionista, porque estamos convencidos de que hacen falta reformas en el sistema educativo actual para que funcione como el motor del desarrollo humano en la República. Pero creemos que esas

reformas deben respetar absolutamente la democracia representativa y el país federal.

No podemos aceptar desde nuestro bloque que una consulta de dudosa consistencia reemplace al debate parlamentario. No podemos aceptar que la función legislativa se reduzca a un mero refrendo de la norma. Digo “una consulta de dudosa consistencia”, presidente, porque nadie me supo explicar cómo se ha hecho para procesar, en tan poco tiempo, tanta información que vino de tantos orígenes y de tantas maneras diferentes.

Creemos que estuvo muy bien preguntarle a toda la población de nuestro país que estaba en condiciones de opinar lo que significaba para ellos el documento que se les hizo llegar, pero creemos que estuvo mal hacerlo con plazos tan exigüos y perentorios.

De esa manera, podemos interpretar lo que se ha hecho como una puesta en escena y no como la construcción de política con los actores sociales, como dice siempre el señor presidente.

Vamos a dar un ejemplo: el 23 de octubre se debatió en las escuelas de Tucumán el anteproyecto, y los cuadernillos habían llegado el 14 de octubre.

El señor ministro de Educación presentó el 16 de noviembre...

Sr. Presidente (López Arias). – Perdón, señora senadora...

Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – No voy a aceptar interrupciones.

Sr. Presidente (López Arias). – No es una interrupción. Me advierten algunos señores senadores que para poder dar lectura tiene que solicitar autorización de la Presidencia, así que...

Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – Le solicito autorización, señor presidente, porque tengo que citar textualmente...

Sr. Presidente (López Arias). – Para todas las citas sí, obviamente, está autorizada, pero tratemos de seguir el reglamento.

Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – En este mismo sentido, en cuanto a la molestia que causó el poco tiempo que tuvieron los diferentes actores del sistema educativo para discutir, primero el documento y después el anteproyecto, voy a citar textualmente algunas de las opiniones, entre ellas la de la ministra de Educa-

ción de mi provincia, que dijo hace muy pocos días atrás que, después del debate, el anteproyecto irá al Consejo Federal y después a la Cámara de Diputados, porque no dan los tiempos.

Eso dijo la señora ministra. Y los alumnos dijeron –ésta es una crítica que se escuchó en todos los colegios– que faltó tiempo para analizar el proyecto. Tampoco hubo tiempo de leer bien el documento que llegó anteriormente, porque fue sin la suficiente anticipación.

Por su parte, los padres de colegios católicos y la Red de Padres pusieron en duda la transparencia del proceso. Las rondas de consultas fueron fragmentadas, insuficientes y desordenadas. Nunca hubo devolución de las diferentes opiniones y se desconoce quiénes son los responsables de procesar y elaborar las conclusiones... (*Manifestaciones en las galerías*).

Sr. Presidente (López Arias). – Perdón, señora senadora.

Voy a pedir al público que, fuese cual sea el contenido de los dichos de los señores oradores, mantenga el respeto. Esta es la casa de la pluralidad y de la democracia. Les pido que me ayuden a mantener el orden; de lo contrario, vamos a tener que tomar medidas...

Continúe, señora senadora.

Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – Lo nuestro no es un capricho ni una imposición descabellada de un sector político, sino que surge de haber creído en las palabras del señor presidente cuando durante el discurso de presentación del documento base, allá por el 22 de mayo del año en curso, dijo que se iba a citar al conjunto de los actores del sistema educativo y nombró en primer lugar a las fuerzas políticas entre los representantes de todos los sectores.

Compartimos con el señor presidente que hay una fuerte inversión en infraestructura escolar, lo dijo ese día en casa de gobierno. Hay una fuerte inversión en equipamiento y materiales aunque en mi provincia todo esto queda solamente en el Gran San Miguel de Tucumán.

Dijo el señor presidente que hubo un incremento importante en el número y en el monto de las becas aunque considero que habría que controlar las asignaciones. En realidad, no sé si se envía ayuda para aquellas escuelas que más lo necesitan porque cuando pedí aquí, en una visita del señor ministro, ayuda especial porque

el 60 por ciento de las escuelas de Tucumán tiene problemas de infraestructura, se me dijo que eso no era responsabilidad del Estado nacional.

El señor presidente mencionó la introducción de nuevas tecnologías de la enseñanza. Eso es verdad porque a mi provincia ha llegado una gran cantidad de computadoras y su equipamiento necesario, pero lamento informarle que la mayoría de ellas no está funcionando porque faltan docentes especializados o porque no existen las aulas debidamente dotadas.

Comparto con el señor presidente que es muy buena la equiparación salarial progresiva, aunque eso no se suceda totalmente en Tucumán porque los nuestros son los docentes peor pagados del norte del país. El presidente también dijo –y es verdad– que se incrementaron en gran medida los recursos para las universidades, pero la Universidad de Tucumán pasó mucho tiempo sin clases porque tenía problemas salariales.

Coincido también con nuestro presidente en que este proyecto de ley no puede ser una legislación para la coyuntura y que necesitamos una norma que sepa interpretar las opiniones, los deseos y los sueños de la gran mayoría de los argentinos y las argentinas.

Lamentablemente, a pesar de la buena voluntad de las señoras senadoras de la Comisión de Educación, en la que rescato a las señoras senadoras Isidori, Bar y Gallego, que escucharon y tomaron algunas de nuestras diferencias con el proyecto original, el proyecto excluyó del texto la religiosidad y la espiritualidad cuando la mayoría del pueblo argentino profesa la religión católica o adhiere a otros cultos y cuando la formación en todos los valores trascendentes hace no solamente a la calidad de vida, sino también a la grandeza de un país.

En Tucumán la mayoría de los docentes, cuando se les consultó, coincidieron en que se debían reconocer los valores por la dimensión trascendente del hombre.

Nuestro señor presidente dijo también que al convocar al debate sobre este proyecto de ley estaba poniendo en el centro de la discusión el modelo de país para las próximas décadas. Sin embargo, el Ministerio de Educación puso en último término nada menos que al Congreso de la Nación. Y habiéndose presentado hace muy

pocos días el proyecto de ley en el Palacio, estamos hoy votándolo.

El presidente dijo que la discusión se daría en pluralidad y en unidad para recuperar el tiempo que nuestras crisis sucesivas nos han hecho perder, que la Argentina tiene que dar un salto cualitativo en el trato de la diferencia y que era fundamental que en una norma tan profunda como ésta se termine con el “macartismo” que tiende a castrar la posibilidad de aquel que piensa distinto o de hacer aportes que se neutralicen por la vía de la descalificación.

Sin embargo, justamente a los que pensamos diferente no se nos aceptó, por ejemplo, incluir en primer término a la familia entre los responsables de las acciones educativas como agente natural y primario de la educación, ni tampoco se incluyó el respeto por las autonomías provinciales, según reza nuestra Constitución.

Mientras nosotros creemos que debemos alcanzar un modelo que dé homogeneidad al sistema, el proyecto oficial permite dos modelos diferentes: por un lado, contempla seis y seis años y por el otro, siete y cinco años.

Señor presidente: Tucumán ya vivió esa diferencia y le puedo asegurar al señor ministro que la provincia era una isla y los chicos estaban encerrados dentro de los límites de nuestro territorio, aun dentro del mismo norte grande.

Sr. Presidente (López Arias). – Señora senadora: debe dirigirse a la Presidencia y no a los aquí presentes.

Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – Disculpe.

Ante la negativa de aceptar integralmente nuestras sugerencias –para nosotros, imposibles de ser consideradas como temas menores y sujetas a una disidencia parcial–, hemos presentado un proyecto propio.

En este sentido –y para construir la Argentina que todos soñamos, tal como lo dice el doctor Kirchner–, nosotros consideramos a la familia, en primer lugar, como responsable del hecho educativo. A su vez, reconocemos las autonomías provinciales e incluimos en nuestros proyectos las dimensiones espirituales y religiosas; y como necesitamos conocer lo que les pasa a nuestros educandos, porque tienen dificultades en los diferentes niveles –cuánto aprendieron, qué podemos hacer por ellos, cuánto in-

cide su situación social en el aprendizaje—, queremos someter este sistema a evaluaciones, ya que para remediar la enfermedad debemos hacer un diagnóstico. En consecuencia, en nuestro proyecto proponemos la creación de una Auditoría Federal de Evaluación Educativa.

Estamos convencidos de que esos datos nos permitirán, entre otras acciones positivas, identificar en cada provincia las zonas educativas de atención prioritaria a fin de corregir errores, incluso en nuestros programas educativos.

En Tucumán hay evaluaciones periódicas de donde surge que podría estar haciendo falta reforzar la capacitación docente, así como tener en cuenta la dedicación exclusiva.

Señor presidente: nuestros chicos tienen dificultades, tienen problemas y les cuesta comprender e interpretar. En efecto, un punto débil en los test de calidad educativa es la comprensión de textos.

Por lo tanto, proponemos una asignación universal por alumno, a requerimiento de los padres o tutores, asegurándonos que contando con esos recursos asistan a los establecimientos educativos sin las dificultades propias de su situación social desfavorable.

Seguramente, se preguntarán el porqué de esta asignación. Para contestar, debo remitirme otra vez a mi provincia donde, tiempo atrás, el señor gobernador —decidido a entregar ayudas escolares a cada chico humilde de mi provincia— le exigió a cada escuela que cada alumno humilde que necesitara esta ayuda le escriba una “cartita” al señor gobernador. A posteriori, cada uno de estos niños, acompañados de su papá o de su mamá, debía ir a la casa de gobierno para recibir esta ayuda de las manos del señor gobernador.

Si vamos a hablar de la estigmatización de la pobreza y del respeto por las diferencias, está todo dicho, señor presidente.

Nosotros queremos que nuestros niños sean libres de ejercer su derecho a aprender, que no sean coaccionados de ninguna manera ni sean objeto de burlas, dádivas, ni de política partidaria de la peor. Por eso, a través de nuestro proyecto proponemos que reciban los recursos suficientes que les permitan acceder a cada unidad educativa y aprender en mejores condiciones que las actuales.

En mi provincia, según la última encuesta permanente de hogares, casi siete de cada diez niños están en situación de pobreza.

Por eso, señor presidente, en razón de la brevedad que se nos ha pedido, solicito que al momento de votar el proyecto en discusión, sea tenida en cuenta nuestra iniciativa que fue oportunamente presentada en el Senado de la Nación. Y ruego a Dios que la ley que hoy se vote establezca la igualdad de oportunidades para el niño que vive acá, en el país central, en la Capital Federal, y para el niño que vive en el interior del interior de mi provincia. Voy a poner como ejemplo el niño que vive en el campo, un niño de Alpachiri, muy cerca de mi casa. Son niños que no tienen hasta el día de hoy absolutamente garantizado el cumplimiento de sus derechos.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Urquía.

Sr. Urquía. — Señor presidente: simplemente solicito se me suprima de la lista de oradores y se autorice la inserción de mi discurso.

Sr. Presidente (López Arias). — Gracias, señor senador.

Oportunamente, se votará la inserción solicitada.

Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: leemos el dictamen del proyecto del Poder Ejecutivo e, indudablemente, no podemos dejar de compartir sus principios y los objetivos en él planteados.

En este momento, como integrante de la Comisión de Educación, quiero efectuar un reconocimiento expreso a su labor, plasmándolo en particular sobre dos personas, que son quienes me consta que han hecho el trabajo que quiero recalcar.

En primer lugar, me refiero a la señora senadora Bar, a quien he visto subiendo y bajando de los aviones recorriendo el país haciendo conocer y promoviendo debates con relación a este proyecto.

En segundo término, quiero felicitar también por la tarea realizada a la señora senadora Silvia Gallego, quien nos ha enviado además *e-mails* con las diferencias existentes y nos ha llamado por teléfono al interior, inclusive los días viernes

por la tarde, para proponernos que enviemos sugerencias con respecto al proyecto.

Finalmente, felicito a todos aquellos que trabajaron anónimamente con relación a esta iniciativa, que seguramente fueron muchos. Mencioné a las senadoras Bar y Gallego, simplemente porque me consta personalmente su tarea.

Ahora bien, además de compartir los objetivos y principios enumerados en el proyecto en consideración, debo decir también que mantengo algunas discrepancias con el mismo, las cuales nos han llevado a presentar un proyecto en minoría, que he suscrito y voy a tratar de sintetizar, para no excederme más de 10 minutos en mi exposición, en cumplimiento del compromiso asumido en la reunión de labor parlamentaria. Por esa razón, voy a solicitar se autorice una inserción sobre este tema.

En primer lugar, creo que es importantísimo para la estabilidad y el futuro del país tener memoria y construir a partir de ella. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos simplificar y pensar que todo lo pasado fue malo y que vamos a hacer borrón y cuenta nueva. Creo que la ley 1.420 constituyó una herramienta de progreso cultural y social, a través de la unidad del sistema educativo primario.

Después de 100 años, se sancionó la Ley Federal de Educación, que se presentó como la “ley de la libertad” y que aún se encuentra vigente, más allá de que hoy se afirma que es la responsable del fracaso de la educación en la Argentina.

En realidad, creo que en materia de políticas públicas y, con mayor razón, en materia de políticas públicas de educación, su fracaso o su éxito no solamente va unido a la inteligencia de quienes las dieron a luz, las diseñaron y las planificaron, sino que es sumamente importante quiénes llevan a cabo su ejecución. Puede implementarse una exitosa política educativa pero puede fracasar por los agentes que la ejecutan, y *a contrario sensu*.

Por otra parte, también creo que no puede estar ausente de la discusión y del debate de las políticas públicas educativas el tema de la evaluación; un criterio crítico y evaluativo de un pasado reciente que implica que no volvamos a caer en los mismos errores que hemos tenido y

que han hecho que tengamos la educación que hoy tenemos. Pero también implica poder tomar lo que, en ese análisis crítico del pasado, se cree que ha sido bueno, exitoso, que ha dado resultado y, a partir de allí, poder diseñar y planificar.

Entonces, a través de la unidad y la libertad podemos llegar a dos principios fundamentales de la política educativa, que son los de inclusión y calidad. Inclusión y libertad implicarían no solamente sumar a todas aquellas personas que la ley vigente ha dejado fuera, expulsado o excluido del sistema educativo, sino aspirar a que la política educativa también abarque el desarrollo integral de la persona en su dimensión física, espiritual, biológica, afectiva, ética, estética, intelectual y religiosa.

Digo esto, porque exclusión también significa no darle a los padres y tutores la posibilidad de elegir libremente la educación que quieren para sus hijos, de acuerdo con sus convicciones éticas y religiosas, participando del presupuesto de conformidad con lo que exige la justicia distributiva. Y también hay exclusión cuando a los docentes no se les da la oportunidad de capacitarse y formarse conforme sus principios o su cosmovisión.

Unidad, libertad, inclusión y calidad serían los principios que lograrían conjugar un importantísimo éxito de una política educativa, que debe analizar críticamente el pasado, para no volver a cometer los mismos errores, pero sí para tomar los éxitos que se consideren rescatables. Ahora bien, el éxito de una política educativa de inclusión lo debe ser en toda su dimensión y no solamente en el aspecto económico, aunque sea este el más palmario en nuestro país después de todo lo que se ha vivido y ya explicado detalladamente.

Quiero sintetizar los principios de la diferencia. En primer lugar, el principio de subsidiariedad. Considero que el Estado tiene constitucionalmente la indelegable responsabilidad de fijar y controlar la política educativa. Pero su diseño y planificación debe hacerlo en base a este principio de subsidiariedad, contando para ello con la participación de la familia, de las organizaciones sociales, de los directivos, de los docentes, etcétera.

El principio de subsidiariedad es aquel que exige que las sociedades mayores se abstengan

de realizar acciones que pueden llevar a cabo las sociedades menores, en un orden inferior y de inmediatez con la cuestión que se está resolviendo. Así, entonces, la subsidiariedad garantiza la libertad y el pluralismo necesarios para la democracia, los que aplicados a la educación permiten la formación de ciudadanos conscientes de la responsabilidad que tienen en la construcción de la sociedad.

Por eso, en nuestro dictamen en minoría hemos plasmado el principio de la subsidiariedad, estableciendo expresamente en el artículo 4º que la familia tiene la responsabilidad principal como agente natural y primario de la educación.

En segundo lugar, está el principio de justicia distributiva, como complemento necesario del principio de subsidiariedad, porque creemos que esta norma es tan importante que tiene que ir más allá de situaciones contingentes o coyunturales, más allá del gobierno que toma la determinación de cambiar la ley de educación. En fin, tiene que ser una ley que tenga estabilidad, duración y que permita –más allá de las diferencias– dar continuidad a un modelo que se elige, tal como ocurre en las sociedades maduras. Es decir, cualquiera que sea el color del partido gobernante, la política pública de educación tiene que poder superar los cambios de gobierno, con un criterio de bienestar para toda la población.

Indudablemente, el gasto público se financia con los impuestos que estamos pagando todos los argentinos.

Este principio de subsidiariedad y de responsabilidad en la justicia distributiva, que ha sido plasmado en el artículo 26, y que está perfectamente explicado en los fundamentos de este dictamen en minoría, ha sido tomado de otros países que lo han legislado con mucho éxito, ya que les permitió elevar el nivel de la calidad educativa de sus ciudadanos.

También hemos pensado que esta iniciativa no solamente puede ser una ley de principios o de objetivos importantes, sino que –y dentro de ese criterio de unidad, libertad y de no olvidar el pasado–, debemos implementar algunas herramientas para que haya un control y se cree en la gente la responsabilidad de lograr los objetivos de la política educativa. Con ese fin es que pusimos a la familia como agente natural y responsable de educación.

Por eso hemos establecido en uno de los artículos del dictamen en disidencia, la obligación de acreditar los certificados de escolaridad para cualquier tipo de trámite a nivel nacional, como una manera de poder acceder a los beneficios sociales. Es decir, exigirlo sí o sí, tal como ocurre en algunas provincias argentinas en las que los padres deben acreditar que están cumpliendo con la obligación de educar a sus hijos para poder acceder a determinados beneficios o realizar trámites ante el Estado.

Además, por su obligación de garantizar la educación para todos, en el supuesto de que el incumplimiento obedezca a causales ajenas que no puedan ser solucionadas por el núcleo familiar, el Estado debe brindar los medios y herramientas necesarios para cumplir el cometido.

Finalmente, en el artículo 30 hemos incorporado un criterio específico en cuanto al financiamiento. Indudablemente, la Ley de Financiamiento Educativo constituyó un avance importantísimo en la financiación, pero también es una realidad que las provincias argentinas pagan el 70 por ciento de la educación en sus territorios y el 30 por ciento proviene de lo que envía el Estado nacional; es decir, una parte de lo que recauda lo envía a las provincias.

Reitero que la Ley de Financiamiento Educativo en realidad es un paso importantísimo que se ha dado con una planificación especial para atender esta cuestión, pero entiendo que esto debería proponerse de otra manera.

Garantizar la educación primaria es responsabilidad de los gobiernos provinciales. Y si no se lo hace, ello constituye una de las causales de intervención.

Como consideramos que se debe avanzar más sobre la Ley de Financiamiento Educativo, estamos proponiendo que el Estado nacional garantice los fondos para la educación secundaria, transfiriéndolos en forma automática –como se hace con la coparticipación y hasta que se pueda debatir una nueva ley de coparticipación federal–, en base a criterios objetivos, que deberán ser plasmados en la reglamentación y que, indudablemente, deberán tener un contenido mínimo, estable, igualitario, a la vez que un carácter geométrico y no aritmético.

De esa forma, se podrá garantizar el principio de inclusión no sólo desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades en cuanto a lo

económico sino también en cuanto al desarrollo del educando, de acuerdo a su criterio –si se trata de un mayor– o al de sus padres o tutores, pudiendo acceder en igualdad de oportunidades a los establecimientos educacionales, que a lo mejor no son públicos.

Ahora bien, siguiendo un criterio de justicia distributiva, como por cuestiones económicas hay quienes no pueden acceder a un establecimiento que coincide con sus convicciones religiosas –y que sí tienen otros estamentos de la sociedad argentina–, es necesario que se establezca un sistema que dé igualdad de oportunidades, para que todas aquellas personas que tienen pensamientos diferentes, ya sean de índole cultural, religiosos, ético, etcétera, puedan acceder a establecimientos acordes con su pensamiento, aunque no tengan los recursos suficientes.

Ese es el fundamento de los tres o cuatro principios de diferenciación con el proyecto de la mayoría. El resto de la fundamentación, en donde están volcadas experiencias de otros países que han implementado lo propuesto, va a estar en el discurso que voy a pedir se inserte.

Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra la señora senadora Vigo.

Sra. Vigo. – Señor presidente: la verdad es que al oír las palabras de algunos colegas preopinantes, me da la impresión de que nos hemos olvidado del vendaval que hemos vivido en la Argentina y en muchos países de nuestra región.

Sin duda estamos en tiempos fundantes, en un cambio de época, ante un mundo globalizado, un proceso histórico de orden o de desorden planetario. Y, en ese escenario, especialmente en nuestro tiempo y nuestro espacio de argentinos y latinoamericanos, con dolores históricos, tenemos una fuerte esperanza y fe de que construyendo este presente vamos a dejar nuevos horizontes para el futuro.

Creo que discutir el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo es, sin duda, un hecho de profunda significación histórica. Debemos remitirnos a que la crisis de la sociedad argentina padece su comienzo con el golpe militar de marzo de 1976, hecho que la llevó a sufrir situaciones de desesperación y desesperanza y a que nadie supiera qué sería de su vida.

Cuando escuchaba a la señora senadora por Tucumán, recordaba que la noche del 24 de

marzo estaba con mis dos hijos –el mayor tenía 5 años y la menor 3 años–, con una valija llena de libros, y no sabía qué hacer, porque mi marido había tenido que refugiarse, dado que nos habían avisado que esa noche sobrevendría un hecho que ameritaba proteger bienes y personas. Y en ese momento yo pensaba dónde estaba la democracia, dónde estaba la posibilidad de decidir cuál era la educación que queríamos para nuestros hijos.

Creo que la crisis de diciembre de 2001 fue un vendaval gratificante. Como siempre, con ese tino y ese sentido común que tienen los pueblos, el argentino marcó el nuevo rumbo para nuestra patria, finalizando con esa ideología del neoliberalismo, que destruyó no sólo a la sociedad argentina sino también a la de muchos pueblos de América Latina, con expresiones como el derrame económico y otras de ese tipo, supestamente todas de gran igualdad.

Creo que nosotros debemos enmarcanos en el hecho de que la crisis institucional, que inclusive comenzamos a vivir más expresamente en la década del 90, al ponerse de manifiesto la separación y el alejamiento del Estado de la problemática y la preocupación por la sociedad, también se dio en el área educativa.

En esa oportunidad, en aras de un federalismo, se construyó una nueva ley federal de educación, que en realidad dejó a las provincias a la buena de Dios en lo que hacía a sus posibilidades de instrumentación.

Sin embargo, más allá de todo eso, se llega a este punto tan importante en donde se trata de retomar la conducción de algo tan fundamental como es la fijación de políticas de Estado que, en este caso en particular, sin duda, hoy pasa por la educativa.

Este es un desafío gigantesco que sólo será posible a partir de que nuestros países proyecten la política educativa como pilar central de una política de Estado. Justamente, el proyecto de ley remitido por el presidente Néstor Kirchner cumple con esta condición, ya que en la sociedad del conocimiento, que es en la que vivimos, la educación es el nuevo nombre de la justicia social y la única generadora de la inclusión.

Por consiguiente, es muy importante el tratamiento de este proyecto de ley, que refleja la voluntad política del gobierno nacional, acompañado por la mayoría de los gobiernos provin-

ciales y el conjunto de los actores sociales de la comunidad, como bien lo han expresado las colegas informantes de la iniciativa.

Nuestra sociedad no ha eludido las necesidades y exigencias del actual tiempo político en cuanto a redefinir una ley que acompañe a la educación en la Argentina del siglo XXI.

En el artículo 2º del proyecto, al conceptualizar la educación y el conocimiento como bienes públicos y un derecho personal y social garantizado por el Estado, estamos reconociendo que la educación y el conocimiento son inseparables de un proyecto nacional, que la educación es un potencial humano inalienable del desarrollo integral y que no podrá existir crecimiento si este no implica desarrollo intrínseco de una comunidad capaz de generar densidad nacional inclusiva y masa crítica calificada para que podamos enfrentar los desafíos del siglo XXI.

Desde este punto de vista, el Estado nacional fija en la política educativa la unidad del sistema, a través de la materialización de un verdadero federalismo con sus respectivas particularidades.

Señalo que para la elaboración del proyecto se han tenido en cuenta todas las problemáticas que veníamos sufriendo las provincias. Me parece que está muy bien definido el financiamiento del sistema educativo nacional.

También es muy importante la concepción que emana de este proyecto de ley, que concibe al Estado como la organización institucional estratégica proveedora de los servicios sociales que consoliden la ciudadanía del siglo XXI.

Y quiero detenerme en este aspecto, porque en las discusiones en las que he participado o en las reuniones de la Comisión de Educación, he tenido la preocupación de plantear el papel importantísimo de la familia. Pero me parece que en este momento fundacional de nuestra sociedad necesitamos que el Estado se haga cargo, que sea el conductor de una política, de un plan estratégico integral de la sociedad, de inclusión, de explicitación de la diversidad y garantista de la atención y cuidado de esas expresiones diversas que conforman la totalidad de nuestra entidad cultural.

Sr. Presidente (López Arias). – Señora senadora: le pido que redondee su exposición, porque ha terminado su tiempo.

Sra. Vigo. – Entonces, solicito autorización para poder insertar mi discurso en el Diario de Sesiones.

No obstante, quiero destacar que, además de todas aquellas cuestiones operativas y funcionales de la formación estructural, es muy importante haber incorporado como principios sostenedores de esta ley de educación.

Fundamentalmente el espíritu democrático que impulsa el gobierno nacional sobre todo lo que tiene que ver con las expresiones diversas, tanto en la educación rural, en la educación para capacidades diferentes y en la educación a distancia.

En fin, creo que todos esos temas son cuestiones vivientes en nuestra sociedad y que hasta ahora incluso habían sido evaluadas como no importantes, como es el papel de la educación privada y el de la educación a distancia.

La educación para la identidad consiste en recuperar la educación de la identidad de la región de América Latina –mestiza, criolla, indígena–, donde el todo fue adquiriendo sus pequeñas particularidades en la medida de la intensidad que adquirió el mestizaje.

Quiero finalizar, señor presidente, diciendo que es deseable que este proyecto de ley dé lugar –una vez que lo aprobemos– a todas las manifestaciones que están pendientes en cada una de nuestras regiones.

Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra el señor senador Pérsico.

Sr. Pérsico. – Señor presidente: creo que hoy es un día muy importante para la educación argentina, para nuestros jóvenes y para el futuro de nuestro país.

Si bien voy a pedir autorización oportunamente para insertar mi discurso, en primer lugar quiero felicitar el arduo trabajo de la Comisión de Educación, la importante acción del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, que con su proceso de consulta y opiniones creo que han dado una muestra de avance importante para nuestra democracia.

Este debate ha sido muy enriquecedor, dado los foros que hizo la Comisión de Educación, en los cuales hemos escuchado la palabra de los diversos sectores sociales, de los gremios, de los docentes, de los no docentes, de los sectores empresariales y de sectores religiosos.

—Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª del Honorable Senado, licenciada Mirian Belén Curletti.

Sr. Pérsico. — Todo ello ha dado la posibilidad de que en este nuevo proyecto de Ley de Educación esté plasmado, en líneas generales, el futuro para nuestro país, para nuestros jóvenes y niños, que creo que son los únicos privilegiados que tenemos que tener.

Creo que es muy importante que el Estado recupere a la educación como un bien público, y cumpla su rol. Considero fundamental que eduquemos para la identidad nacional, para la democracia y, especialmente, como lo propone este proyecto de ley, para la igualdad social, dándoles a los que más las necesitan las posibilidades que muchas veces no tenían.

Como profesor y como persona que ha arrancado desde un espacio social humilde, puedo dar prueba de que realmente, a quienes nos ha permitido Dios recorrer el camino de la educación, de universidades, de escuelas primarias y secundarias, nos ha puesto en un plano de igualdad social. Por lo tanto, considero que es muy fuerte lo que se plantea hoy en este proyecto de ley de educación.

Asimismo, quiero destacar algunos temas, como por ejemplo, un importante debate que se hizo acerca de este proyecto, sobre el mejoramiento de la calidad educativa. O sea, no sólo se ha tratado de preocuparse por la cantidad sino la calidad. Creo que en este proyecto están plasmadas las dos cosas.

Primero, el hecho de imponer la secundaria hace a la cantidad, y el hecho de la formación docente hace a la calidad. Como docente que soy, sabiendo que los docentes siempre pusieron el máximo esfuerzo en la educación de los chicos, considero que este proyecto de ley realza la formación de los docentes y, por ende, la calidad de la educación, en ese sentido. Como le decía, en honor a la brevedad, voy a pedir autorización para insertar mi discurso. Creo que este proyecto de ley va a permitir lograr en los próximos años lo que siempre decimos respecto de que tenemos un país rico y que se incorporará con esto el desarrollo económico. Y también aquello a lo que siempre nos referimos: un cambio cultural para que vivamos bajo ciertas normas de convivencia, que muchas veces olvidamos, y que esta calidad educativa haga a la

calidad de vida y a la felicidad de los argentinos.

En definitiva, creo que estamos cerca de alcanzar una utopía y adelanto de esta forma mi voto positivo al proyecto de ley.

Sra. Presidenta (Curletti). — Tiene la palabra la señora senadora González de Duhalde.

Sra. González de Duhalde. — Señora presidenta: primero, quiero adelantar mi voto afirmativo a este proyecto de ley, porque es realmente impecable en su articulado. También debo decirle que es, hasta hoy, un enunciado de buenas intenciones que ojalá se pueda plasmar en la realidad.

Represento a la provincia que tiene el mayor sistema educativo no solamente de la Argentina sino de la mayoría de los países latinoamericanos. Es una provincia en la que se apiña, en el 2 por ciento del territorio, más de 9.000.000 de hermanos que provienen, obviamente, de nuestra provincia así como de otras provincias y de países limítrofes, creciendo día a día la manifestación a través de nuevas villas que van apareciendo en ese conurbano bonaerense. Y dentro del otro 98 por ciento del territorio, con otra realidad y otros valores, viven 5.000.000 de hermanos. O sea, es una provincia con dos realidades absolutamente diferentes.

Mi preocupación tiene que ver con la inversión; para 2010 va a representar un incremento del gasto de 120 por ciento. Por otro lado, la Ley de Responsabilidad Fiscal nos dice que las provincias no pueden excederse del 50 o 60 por ciento en el gasto. ¿De dónde va a salir ese recurso? Seguramente habrá que descuidar otras áreas que, debo decir en rigor a la verdad, hoy tampoco funcionan bien y que son vitales para la gente.

Por supuesto que la única forma de inclusión, o la más importante, se da a través de la educación. Y también las posibilidades laborales se dan a través de la educación. En ese sentido, debemos tener en cuenta que quienes no accedan a ella serán en el futuro discapacitados laborales. Entonces, el tema que me preocupa es la inversión.

¿Cómo hacemos realidad este proyecto de ley que, reitero, es impecable? Porque ya tuvimos en 1993 una ley que establece en el artículo 61 la forma de inversión en educación. Y ha-

bla de dos maneras; una, dice que la inversión pública consolidada total en educación será duplicada gradualmente y, como mínimo, a razón del 20 por ciento anual. Y la otra, que se considerará un incremento del 50 por ciento en el porcentaje –base 1992– del 4 por ciento del producto bruto interno, que sería del 6 por ciento; pero la realidad es que la educación ha ido para atrás.

No solamente nos preocupa la situación de los chicos, que serán discapacitados laborales en el futuro si no acceden a una educación, nos preocupa también la situación del docente. Y voy a hablar del conurbano bonaerense, donde se apiñan –vuelvo a decir– 9 millones de personas. El docente es el que padece las consecuencias de una sociedad quebrada, con todas las patologías sociales y que, muchas veces, en lugar de transmitir conocimiento tiene que atender las problemáticas sociales que le plantean los chicos, muchas veces armados, o sus padres. En alguna escuela de “Fuerte Apache”, se construyó un lugar para desarmar a los chicos antes de que entren a la escuela.

Esta es la realidad que vive el docente. Entonces, me pregunto si, en algún lugar, tal vez en su reglamentación, dentro de la capacitación se va a prever cómo se va a trabajar en zonas de altísimo riesgo, como el conurbano bonaerense u otros conglomerados urbanos, cómo se va a acompañar al docente para que recupere el rol, la autoridad, para que el director sea respetado. Hoy –todos lo sabemos– muchos de los padres van a la escuela y toman partido por sus hijos sin tener en cuenta que el docente tiene que hacer frente a un montón de situaciones que deberían serle ajenas, pero que las acepta porque históricamente ha sido solidario, más allá de los magros sueldos que siempre se le han pagado.

Reitero, me preocupa la posibilidad de concreción. Y, en mi provincia, el compromiso de campaña del señor presidente de la Nación fue devolvernos los puntos de coparticipación que nos habían sido quitados. Hoy representarían 3.700 millones.

Tenemos escuelas con paros semanales. No van a cumplir los días de clase obligatorios. Con esos recursos podríamos poner a punto el sistema educativo y otras áreas que están padeciendo.

Hemos escuchado, también de boca del presidente, acerca de la construcción de 700 escuelas, hace aproximadamente tres años. De esa cantidad, según la página que muestra el ministerio, se han construido y terminado 149 escuelas en el país. Se trata de leyes que hemos derogado, que prometían en algún aspecto –creo que ésta es mucho mejor– cumplimiento de cosas que no se han cumplido, promesas gubernamentales que no se cumplen, gobernadores –y voy a hablar del mío, porque no tengo por qué hacer mención a otros– que no definden los puntos de coparticipación que les corresponden.

Esto, que hoy voy a acompañar creyendo verdaderamente que esta vez es en serio, espero que lo sea. Y espero que nos demos cuenta de que no solamente el chico es el que nos debe preocupar, sino también la situación dramática de los docentes argentinos en lugares de altísimo riesgo, como ocurre en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente en el conurbano.

Simplemente quería decir eso, agradecer al ministro su presencia y a las señoras senadoras y a los señores senadores el trabajo que han realizado, pidiéndole a Dios que esta vez sea verdad.

Sra. Presidenta (Curletti). – Tiene la palabra el señor senador Jaque.

Sr. Jaque. – Señora presidenta: anticipando mi voto afirmativo en general y en particular a este proyecto de ley. No quisiera pasar por alto el verdadero valor estratégico y político de la iniciativa que estamos considerando. Y lejos de hacer un análisis acerca de cómo está compuesta esta norma, preferiría destacar algunos elementos a tener en cuenta para demostrar que lo que estamos haciendo es muy bueno para nuestro país y su gente.

En primer lugar, estamos considerando un proyecto de ley nacional de educación que viene a poner orden a un desorden que tenemos especialmente en la forma en que estamos aplicando la actual ley de educación; pero que, por otro lado, trata de incorporar, además de este orden, un marco general. No estamos tratando aquí una norma de carácter reglamentarista que deba abordar un sinnúmero de temas que, obviamente, sabemos que también deben tenerse en cuenta; para eso está no sólo la función y

obligación de las provincias sino además un consejo federal en el que habrá que hacer este abordaje.

Por otra parte, se ha manifestado acerca de si el tiempo que se dedicó a la discusión de este tema es el adecuado o no. Yo sólo quisiera recordar que estamos transitando el siglo XXI, que además de caracterizarse por la globalización, se ha caracterizado por la acumulación de conocimiento. Y cuando en el mundo el conocimiento total acumulado se duplica en menos de cinco años, decir que vamos a dedicar más tiempo del que le hemos dado a la discusión de la norma, es no entender el mundo en que vivimos. En efecto, vamos a estar solamente discutiendo, y mientras nosotros discutimos el conocimiento sigue avanzando y nuestros chicos siguen quedando excluidos.

Por lo tanto, creo que hay que valorar la decisión política del presidente de la Nación, expresada a través de ministro de Educación, el licenciado Daniel Filmus, por la metodología y el tiempo para participar. Créanme que todo aquel que quiso participar lo hizo; y, especialmente, quienes tenemos responsabilidad política, gozamos de los mecanismos y los lugares para expresarnos. En consecuencia, esto hay que dejarlo bien en claro.

Cuando un país empieza a crecer no sólo aparecen nuevos desafíos como este, de discutir una ley, sino también otros, frente a decisiones que son importantes de concretar, como la construcción de escuelas. Pero si alguien entiende que el problema del país –cuando cuenta con recursos y se quiere construir– radica en que no se puede licitar por falta de mano de obra calificada, es no saber dónde estamos viviendo.

Entonces, tenemos que poner énfasis en esto y en la capacitación técnica para resolver el problema de las escuelas. Hoy, uno de los problemas es que no hay mano de obra calificada. Por otro lado, los productos y los costos con que en algunos lugares aparecen las nuevas escuelas son valores que salen de lo normal, y no se puede hacer en esas condiciones.

Ahora bien, no sólo estamos estableciendo una ley para la educación: estamos hablando de un elemento que significa –además de la nueva forma de acumular riqueza– verdadera justicia social. Nos referimos a una verdadera inversión no únicamente para combatir la pobreza

sino para evitarla en el futuro. Estamos hablando del principal autor del desarrollo de una economía moderna. En definitiva, estamos hablando de qué vamos a hacer con nuestros niños y con nuestros jóvenes, que no son el futuro sino el presente; y para ello debemos adecuar las estructuras para tener un país que realmente genere igualdad de oportunidad para todos.

Sé que es muy difícil en estas circunstancias pretender llegar a la ley perfecta; pero creo que el trabajo que se ha hecho hoy bien vale la pena para sentirnos orgullosos de esta decisión que estamos tomando. Se trata de una norma que nos dará un orden frente a un desorden existente.

Por otro lado, creo que hay que sentirse muy contentos por esta decisión, porque estamos avanzando hacia una democratización cada vez mayor de este elemento vital de justicia social, que es la educación, abarcando especialmente el tema de cómo vamos a capacitar y a formar a nuestros futuros docentes. Y para entender cómo va cambiando el mundo y la acumulación de conocimiento, quiero citar dos ejemplos.

El primero es que, anualmente, se esbozan alrededor de 200.000 nuevos teoremas, solamente en matemáticas. Esto indica que existen cosas que tenemos que cambiar y en las cuales más que discutir, hay que actuar.

El segundo ejemplo que quiero citar es el siguiente: cuando vemos que cualquier persona de nuestra sociedad hoy accede a un teléfono celular, en realidad está accediendo no solamente a algo que le permite comunicarse, puesto que dentro de ese pequeño aparato hay casi 10 veces más tecnología que la que se utilizó cuando el hombre llegó a la Luna. Esto significa, para entender el mundo en el que estamos, que la educación debe dejar de ser algo que solamente se declama, para pasar a ser algo sobre lo que debemos empezar a actuar.

Obviamente, aquí se discute si los recursos están o no. Crea, señora presidenta, que para esto se necesitan recursos. Y este es el nuevo desafío que tiene no solamente el gobierno nacional, sino nuestros gobernadores e intendentes, porque si no entendemos que hay que invertir en serio en educación, no tendremos futuro.

Entonces, más que poner esto como un gran interrogante, es el desafío que se nos presenta por delante y sobre el que hay que trabajar. Y debemos hablar con hechos, como lo ha hecho

el gobierno que hoy nos representa, que ha dado pasos firmes: recuperamos la educación técnica, tenemos una ley de financiamiento educativo y hoy estamos tratando este proyecto de educación nacional. Nos queda por delante mucho más, sobre lo que tenemos que ponernos más que a discutir, a trabajar y a actuar. Si no lo hacemos, no solamente no estaremos garantizando que nuestro país pueda estar incluido en el mundo, sino que nuestra tarea de trabajar para que nuestros niños tengan igualdad de oportunidades será una mera declamación.

Quiero creer que bien merecemos llegar a nuestro bicentenario no solamente con este proyecto, sino con un trabajo constante, donde el combate contra la exclusión no sea una mera utopía, sino algo sobre lo que estemos trabajando.

Este proyecto es una gran herramienta y, por esa razón, anticipando mi voto favorable, quería poner en valor lo que hoy estamos considerando.

Sra. Presidenta (Curletti). – Tiene la palabra el señor senador Capitanich.

Sr. Capitanich. – Señora presidenta: muy brevemente quisiera efectuar una referencia estrictamente sobre la parte que compete a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

En ese sentido, este proyecto en su artículo 9º establece que a partir del año 2010 se mantiene la inversión educativa, equivalente al 6 por ciento del producto interno bruto, en forma sistemática e indefinida. Y, a su vez, con la inclusión expresa de Ciencia y Tecnología, como formando parte del financiamiento educativo.

Por lo tanto, quiero plantear claramente que este proyecto de ley de educación forma parte de una estrategia que el gobierno ha planteado desde el año 2003.

En ese sentido, en este Congreso hemos sancionado la ley 26.058, que permitió una tendencia incremental desde el punto de vista de los recursos hacia la educación técnica, con el objeto de vincular el sistema educativo con el productivo. En los años 2003-2004 teníamos 8.000.000 de pesos; en 2005 pasamos a tener 16.000.000 y, en 2006, 260.000.000. Y la proyección, tal como prevé la ley 26.058, es equivalente al 0,2 por ciento de los ingresos corrientes del sector público nacional consolidado.

Por lo tanto, las proyecciones son cercanas a los 300.000.000 de pesos para las escuelas de

educación técnica, que son aquellas que están seleccionadas en todo el país y para las cuales nuestros alumnos cuentan con becas de mayor incremento de recursos y con el equipamiento tecnológico necesario para la formación adecuada de los recursos humanos. Naturalmente, esto forma parte de un proceso de certificación de calidad técnica y de extensión de títulos perfectamente certificados en el ámbito nacional.

En segundo lugar, creo que es importante señalar que con la ley 26.075, de financiamiento educativo, nosotros hemos planteado desde un piso de 23.000.000.000 de pesos de recursos al sistema educativo nacional consolidado en el año 2005, una meta de casi 53.000.000.000, lo cual implica no sólo un aumento de 4 a 6 puntos, o sea, de dos puntos de participación de la inversión educativa en términos de producto interno bruto, sino también –y lo que es más importante– aproximadamente 30.000.000.000 de pesos de recursos vinculados al sector.

En este período, desde el 2003 hasta hoy hemos tenido un incremento significativo del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que también está incorporado a la ley 26.075.

Tenemos una proyección para el presupuesto 2007 equivalente a 1.618 millones de pesos. Al respecto, recordemos que en 2001, esta proyección era de 660 millones de pesos y fue absolutamente incumplida y regularizada en este período. Es decir que el gobierno nacional ha establecido una prioridad extraordinaria desde el punto de vista de la educación.

También, hay una proyección de 1.480 millones de pesos para un programa federal de construcción de 700 escuelas, que se terminarán en el transcurso del ejercicio presupuestario 2007. Esto implicará un incremento sustancial de la capacidad y de la oferta educativa, así como el mejoramiento de las remuneraciones de los trabajadores docentes, estableciendo claramente el salario inicial por encima de la línea de pobreza.

Por lo tanto, creo que en esta etapa, los esfuerzos desde el punto de vista de la asignación de recursos han sido considerables y las metas destinadas a la ley 26.075 se van a cumplir. Tanto es así que si uno observa la consolidación de recursos para las universidades y para la educación básica inicial, para las distintas partidas del presupuesto nacional que pertenecen a diversas finalidades vinculadas con la prestación

del servicio educativo, se llega a 10.750 millones de pesos.

Para finalizar, me parece importante remarcar que cuando votamos la ley 26.075, este Senado agregó el artículo 20, para compatibilizar la Ley de Financiamiento Educativo con las restricciones de la Ley de Responsabilidad Fiscal, la 25.917, que en su artículo 10 establecía las pautas desde el punto de vista de las erogaciones y, como metas, el equilibrio fiscal y financiero. Pero naturalmente, hemos flexibilizado el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal a través de la participación expresa del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, con el objeto de priorizar las asignaciones de las erogaciones vinculadas con el sistema educativo, de manera tal que la garantía de financiamiento del sistema educativo fuera compatible con las metas perfectamente establecidas por el artículo 2º de la ley 26.075.

Por lo demás, es importante remarcar que, independientemente de ese artículo, las transferencias de recursos de origen nacional a las jurisdicciones provinciales se incrementaron sustancialmente desde 2002 a la fecha, porque pasaron de 15.500 millones de pesos a una proyección de casi 46 mil millones de pesos. Es decir que hubo una triplicación de recursos de transferencias de origen nacional, que permite cumplir objetivamente con las pautas establecidas por la ley 26.075, para garantizar no sólo las metas del artículo 2º sino de todas aquellas que se van a incorporar en esta ley de educación.

Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra el señor senador Gómez Diez.

Sr. Gómez Diez. – Señor presidente: en primer lugar, quiero destacar la importancia que tiene la presencia del ministro de Educación en este recinto, quien nos ha acompañado a lo largo de este debate.

Si señalo esto es porque es importante sancionar las leyes, pero también el éxito de ellas depende de cómo se implementen y apliquen. Y en esta cuestión, el Ministerio de Educación tiene un rol central.

En 1993, en este mismo recinto, quienes nos precedieron sancionaron la ley 24.195, conocida como Ley Federal de Educación. Seguramente, cuando lo hicieron pensaron que estaban aprobando un proyecto educativo que iba a

tener una vigencia de por lo menos un cuarto de siglo, considerando la aceleración de los tiempos.

En esos días, se sostenía que el sistema educativo que se iba a reemplazar era memorista, que se basaba en la repetición, que no desarrollaba la capacidad de abstracción y que, por lo tanto, no capacitaba adecuadamente para que, sobre la base de los conocimientos adquiridos, se pudieran desarrollar nuevos conceptos.

En definitiva, se sostenía que la escuela transmitía contenidos, pero no construía competencias; es decir, la capacidad para aplicar con autonomía los conocimientos a situaciones prácticas.

Quiero señalar que todos los que estamos acá, por razones generacionales, indudablemente, hemos sido educados en ese sistema anterior que la ley federal venía a reemplazar.

Al respecto, tengo tres hijos: uno tiene 29, otro 28 y otro 21. Los dos mayores están educados en el mismo sistema educativo en el cual nosotros nos educamos. Al de 21, le tocaron los cambios. La verdad es que cuando yo hablo con mi hijo menor, me plantea que siente que hay diferencia en su capacitación, comparando con mis hijos mayores. Ahora, él está en la universidad; un día me decía: “mirá, yo me eduqué; nadie me dio una noción de química”. Está bien, eligió en el Polimodal una orientación vinculada con las humanidades. Pero ¿es posible, hoy, formarse y no tener una idea elemental de la química? Indudablemente –y por esta razón estamos debatiendo esta nueva ley–, algo falló.

¿En qué se fracasó? ¿En los contenidos de la Ley Federal de Educación? ¿Se fracasó en la implementación de la ley? Indudablemente, los contenidos son muchos y discutimos sobre ellos. Acá tuvimos que sancionar una Ley de Educación Técnica. ¿Por qué? Porque la Ley Federal no contemplaba la educación técnica, que llegó a ser orgullo en nuestro país.

Frente a esta omisión, en algún momento, se idearon los trayectos técnicos como una suerte de ropaje con el cual se buscó ubicar a la escuela técnica como si fuera una variante del Polimodal. Siempre cito, porque me quedó muy grabada en mi memoria, una anécdota en mi provincia: una mamá me decía que tenía dos hijos con educación técnica. Orgullosa, me de-

cía que uno era técnico de verdad y que estaba trabajando. Y respecto del otro, que estaba por salir de la escuela me decía: “¿sabe qué, doctor? Es técnico trucho”.

Entonces, hay muchos aspectos en donde fuimos perdiendo la calidad que hoy tenemos que recuperar para la educación argentina.

También pienso –y me lo he preguntado muchas veces– si con el sistema del Polimodal, un chico de catorce años, cuando tiene que elegir una orientación, está con la madurez para hacerlo. Hay que ver cómo toma la decisión. Porque mucha veces, he visto tomar esa decisión no por vocación, sino porque la escuela que estaba más cerca tenía esa orientación. De modo que esa persona va ahí porque se ahorra el transporte, porque está más a mano o por la razón que fuere.

También debemos decir que hubo defectos de implementación. Es importante que lo tengamos en cuenta en las etapas que vienen, porque acá hemos hecho referencia a contenidos y la verdad es que esta ley tiene enumerados algunos contenidos que no voy a controvertir.

Me parece muy importante la proyección latinoamericana, que se entienda el Mercosur, etcétera. Pero, si bien hay que entenderlo en el marco de nuestra identidad, primero hay que comprender el fenómeno de la globalización y cómo nos afecta. Porque entonces, alcanzaríamos a comprender muchas cosas que nos pasan y aprenderíamos a valorizar la educación, entendiendo qué pasa en el mundo.

Hoy, el gran fenómeno de este mundo en cambio es, precisamente, la aparición de grandes economías emergentes, sobre todo las asiáticas, con mano de obra barata, que inundan el mundo con manufacturas producidas a muy bajo costo.

En este contexto, la Argentina ¿cómo va a competir? ¿con mano de obra barata? Indudablemente que no. China tiene todavía muchos millones de trabajadores en el mundo rural para trasladarlos a las fábricas de las ciudades. Entonces, sólo hay una manera de competir: con mano de obra calificada y con educación. Así, comprenderíamos que el futuro de la Argentina está ligado a la educación como prioridad, a la inversión en ciencia y tecnología y al desarrollo de la capacidad innovativa.

Pero más allá de esto, hay algo que es cen-

tral en materia de contenidos.

Hay un núcleo básico del conocimiento y del saber, un núcleo que se mantiene inalterable a lo largo del tiempo. Los chicos tienen que saber matemática, lengua, historia, geografía y ciencias naturales; es decir, biología, física y química. Luego, se puede agregar todo lo que se quiera, pero este núcleo básico no puede faltar.

La verdad es que con los cambios que se han introducido, se disminuyó la carga horaria de este núcleo básico del saber humano y aparecieron otras asignaturas, que no desvalorizo en la medida que no quiten espacio al núcleo central mencionado –como tutoría, tecnología, etcétera–.

Este ha sido un defecto de implementación. Otro ha sido la enseñanza por áreas, cuando los profesores están formados por disciplina. Así es como he visto en mi provincia a profesores de historia que enseñan geografía y viceversa. Esto disminuye la calidad.

Por otra parte, hay sistemas de calificación que no premian el esfuerzo, motivo por el cual se ingresa en la cultura del facilismo.

La confusión de la educación con el asistencialismo es otro gran problema.

Lo mismo podría decir de la cultura sintetizada en esa expresión “pobrecito, no puede”, olvidándonos de que el sistema educativo tiene que desarrollar al máximo las capacidades de los chicos. No se trata de “pobrecito, no puede”, sino de exigirlo, para potenciar todo lo que hay en el interior del chico que va a la escuela.

En definitiva, si bien hay omisiones en la norma, también hay muchos problemas de implementación. De ahí que es importante ser cuidadosos frente a la experiencia que se ha tenido. La suerte de la norma en consideración dependerá de cómo se implemente.

Así como están los artículos de la Constitución Nacional que hacen referencia a las competencias del Estado nacional –que las tiene porque formamos parte de una nación–, me gustaría que se respetara su artículo 5º, que alude a las autonomías de las provincias.

El proyecto en consideración tiene aspectos positivos, eso es indudable, y aquí se han mencionado. Por ejemplo, se extiende la obligatoriedad de la enseñanza por un lapso de tres años más; algo muy bueno. No obstante, no puedo

dejar de señalar que comparto todas las preocupaciones que se han vertido en orden a cómo va a financiarse esa cuestión. Es obvio que posee un costo.

La Ley de Financiamiento Educativo es una ley que fija llegar en tres años más a invertir el 6 por ciento del producto bruto interno en educación. Estamos avanzando. Esto tiene un costo financiero, que es muy claro. El costo es más grande para las provincias que tienen mayores dificultades, y que tienen menor ingreso por habitante. Nuestra situación, en el Noroeste y en el Nordeste, es distinta de la del centro del país, de la de cuyo y de la del Sur. Con respecto a la deserción en el nivel Polimodal, prácticamente la mitad de los chicos de nuestra región no egresan del sistema educativo. Si aspiramos a llegar al 100 por ciento, se darán cuenta de que no es una inversión menor.

Creo que es positivo volver a la modalidad del primario y del secundario. Esto está muy internalizado en la gente. Incluso, es recordado con mucha nostalgia por muchos. Me parece que la ley debería solucionar la cuestión de cuántos años dura el primario y cuántos el secundario. Creo que el período de transición de seis años, para definirlo, no es bueno. Deberíamos optar por una modalidad u otra de las que están contempladas en la ley, pero hacerlo desde el vamos y que después, haya un período de adecuación de las distintas jurisdicciones, pero definimos por un camino u otro: seis el primario y seis el secundario, o siete el primario y cinco el secundario.

Quiero señalar, en orden a algunas consideraciones que acá se han vertido, que los artículos 4º, 8º y 11 de la ley hacen referencia a la formación integral de la persona, con lo cual creo que indudablemente el aspecto espiritual está contemplado. También, se ha hecho referencia a la cuestión religiosa. Y en esto, me permito señalar que acá está vigente el Pacto de San José de Costa Rica, que tiene rango constitucional. Este pacto, claramente, dice que los padres tienen derecho a elegir la educación religiosa y moral que quieran darle a sus hijos.

Me parece central el tema de la evaluación de la calidad educativa, porque es la única manera de ir siguiendo la implementación del sistema. Y tenemos que terminar con la cultura de

engañarnos a nosotros mismos, porque somos propensos a ello y, a veces, desde el vértice mismo del poder se ejerce presión hacia abajo, para decir que los resultados tienen que dar bien. Y los resultados pueden dar bien o pueden dar mal. Si dan mal, nos dan la oportunidad de corregir, de enfocar adecuadamente las cosas. La Argentina no hace evaluación de calidad con estándares internacionales desde el año 2000. Es muy importante que haya buenos docentes y me parece que en esto, también, es importante ampliar su formación. Esto conlleva, lógicamente, a dignificar la carrera docente.

En definitiva, señor presidente –y con esto termino–, creo que el tema de la implementación de la ley es una cuestión absolutamente central, para que dentro de 10 años, quienes nos sucedan no tengan que volver a reunirse para debatir un texto legal.

–Ocupa la Presidencia el señor presidente del Honorable Senado, licenciado Daniel Osvaldo Scioli.

Sr. Gómez Diez. – Ojalá lo logremos, con el esfuerzo de todos. La política educativa siempre tiene que ser una cuestión de Estado. Va más allá de un gobierno. Inclusive, una gestión de gobierno no alcanza para desarrollar un proyecto educativo. Por eso, señalaba al principio la importancia que tiene no sólo que legislemos, sino que luego se implemente y se aplique esta ley de una manera adecuada, aprendiendo de toda la experiencia acumulada a lo largo de los años.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador por Córdoba, senador Rossi.

Sr. Rossi. – Señor presidente: en primer lugar, adelanto mi voto afirmativo al proyecto de ley en tratamiento.

Destaco como elemento distintivo el consenso que se ha logrado, que no es fácil en leyes emblemáticas como la que estamos considerando. Obviamente, para alcanzar ese consenso, hacían falta ingredientes: un proyecto serio, un compromiso, una discusión, una participación, un debate que se fue dando, particularmente, en todos los sectores de la sociedad.

Cuando uno escucha a los directamente involucrados –más allá de que toda la sociedad está involucrada–, a los especialistas, a los técnicos, a los que diariamente tienen esa expe-

riencia frente al aula, se advierte que en este consenso hay un acompañamiento, un compromiso y una esperanza.

Quiero puntualizar que este consenso también se dio en el tratamiento específico de la Comisión de Educación, en el que participaron senadores de distintos bloques. Pero particularmente, quiero señalar a tres senadoras —más allá de lo odioso que es dar nombres—: la presidenta de la comisión, la senadora Isidori; la senadora Bar y la senadora Gallegos, que han manifestado un compromiso hacia adelante, superador, y fueron buscando los consensos, incluso en las modificaciones.

Es todo un detalle que la miembro informante del proyecto de ley en consideración, la presidenta de la comisión, precisamente pertenece a un bloque de la oposición.

Además del consenso, es importante señalar que es una ley con compromiso, dado que propicia que se genere una calidad institucional y educativa, poniendo nuevamente como eje central el compromiso del Estado nacional.

Todos recordamos lo que pasó con la implementación de la ley anterior, particularmente, en la década del 90. Parecía que en algunos momentos, les quemaba en las manos la problemática de la educación y buscaban los artilugios, formas —a veces— disfrazadas de hiperfederalismo, para pasar a las provincias compromisos del gobierno nacional. Las provincias fueron recibiendo este traspaso con resignación, con compromiso, pero muchas veces eran estériles sus esfuerzos para poder brindar este servicio indispensable.

Hay un compromiso con la etapa inicial de la educación. Se genera en favor de los padres la posibilidad de que los chicos de cuatro años tengan una contención en la escuela y una respuesta desde el punto de vista de la educación.

Hay un compromiso con la mayor presencia en la escuela. Todos sabemos que el único y meritorio trabajo que debe tener un niño es, precisamente, el de estudiar. Es un compromiso y un trabajo importante, que es el que va formando, el que va modelando al hombre del mañana. Y acá hay un compromiso, porque se habla de la prolongación de la jornada y de llegar a la doble escolaridad, con lo cual, el chico va a estar más tiempo en el aula, más contenido y más

cerca del conocimiento.

Hay un compromiso con la educación obligatoria. Así como la ley 1.420 marcó la obligatoriedad de la educación primaria, me parece que ahora la obligatoriedad de la escuela primaria y secundaria también marca un mejoramiento digno de destacar.

Hay un compromiso con la capacitación docente, en todos sus elementos constitutivos, y se agrega un año más, llevándola a cuatro.

En este punto es válida una observación. Si al docente le estamos exigiendo una mayor capacitación, un mayor compromiso previo para poder estar frente a los alumnos, tenemos que saber que, necesariamente, ese compromiso va a tener que venir acompañado con una mejoría sustancial en los salarios. Caso contrario, cuando necesitemos docentes para cubrir la doble escolaridad, la prolongación de jornada, la etapa inicial, nos vamos a encontrar con que no hay un incentivo suficiente, porque la vocación sola, muchas veces, se ve frustrada porque son madres y padres que hacen del ingreso del salario realmente un medio dignísimo de vida, por lo que deben tener la compensación adecuada.

Hemos empezado a andar con este proyecto de ley. Así comenzamos un nuevo desafío que tiene dos componentes o dos virtudes.

Me parece que tenemos un buen proyecto de ley, por encima de las observaciones a su articulado. Pero hay otro componente: tenemos un buen gobierno. Y quiero subrayar especialmente que hablo de “buen gobierno”, no de buen ministro, porque no está en tela de juicio la capacidad de nuestro ministro de Educación de la Nación. El tal vez hoy testifica una vez más su compromiso —como pocas veces se debe haber visto en el tratamiento de otros proyectos de ley—, siguiendo detenidamente y escuchando las cosas que le gustan y las que no le gustan; acompañando la presentación del proyecto de ley, siendo permeable y elástico a las modificaciones que se le fueron introduciendo. Pero cuando digo que hay un buen gobierno, también me refiero a que seguramente en muchos gobiernos ha habido buenos ministros de Educación pero que no se han sentido acompañados.

Quienes hemos tenido responsabilidades ejecutivas, seguramente recordaremos que muchas veces la vocación, la intención, la decisión de un ministro de Educación para llevar adelante

un plan positivo encuentra los tropiezos de las propias áreas del gobierno. Algunas expresiones son reiterativas y seguramente estarán en todos los anales de las reuniones de gabinete. Cuando dicen “no hay presupuesto”, “lo dejamos para más adelante”, “hoy no te lo puedo dar”, el que le pone freno, particularmente, es el ministro de Economía, los técnicos.

Pero en definitiva, lo que yo advierto como un compromiso de este buen gobierno es precisamente que todos, presididos por el presidente de la Nación, han apostado a la educación. Y debemos destacar que cuando se sancionó la Ley de Financiamiento Educativo, este ministro hizo un compromiso, una afectación presupuestaria y estamos trabajando en ese sentido. Tiempo atrás, quienes teníamos la oportunidad de recorrer el interior de las provincias veíamos cómo le habían bajado la persiana a los colegios técnicos. Estos colegios, verdaderos generadores de mano de obra, habían bajado sus persianas porque no tenían docentes, porque no tenían equipamiento y no tenían el compromiso político de que eso no se cerrara. Doscientos ochenta millones de pesos es el presupuesto que se ha afectado a la educación técnica superior.

Hubo un hecho emblemático que fue para mí todo un hilo conductor. Cuando el presidente asume la responsabilidad de conducir los destinos del país el 25 de mayo de 2003, viaja a dos distritos provinciales –San Juan y Entre Ríos– para resolver un problema docente. Porque ahí los docentes ya no reclamaban aumento de sueldo: lo que no cobraban era el sueldo desde el mes de enero. Y el incentivo docente era otra plegaria que los docentes sufrieron muchísimos años. Eso sí que fue una letra muerta. Cuando los docentes cobraban un incentivo docente no sabían si le estaban pagando el de seis meses o el de seis años atrás.

Este Congreso tuvo el compromiso con el acompañamiento del gobierno y afectamos el primer año 1.200 millones de pesos. Pero entonces dijimos que “hasta tanto salga la Ley de Financiamiento Educativo” –que no sabíamos si saldría rápida o lentamente– se afectaban también los cinco siguientes presupuestos, para que esto dejara de ser una espada de Damocles, una duda o una incertidumbre del docente. Creo que, hoy por hoy, eso también se cumplió.

Estamos en un desafío y este desafío seguramente nos alcanza a todos. Cuando digo “todos”, obviamente involucro al Estado, a los docentes, a la comunidad educativa, a los padres, a los alumnos.

Este me parece que es el enorme desafío de todos. No busquemos mañana decir “esta ley fracasó porque alguien no cumplió”. Pensemos que si la ley fracasa también la autocrítica debe ser de todos. Y para que la ley sea de todos, todos debemos tener un compromiso en ese sentido.

El año 2007 va a ser el año de implementar todos estos desafíos que propone el proyecto de ley. Les decía a mis colaboradores que seguramente uno de los indicios será cuando comparemos los diarios y veamos que se está ampliando una escuela, que se está construyendo otra y que se está invirtiendo en educación por parte del gobierno nacional y los gobiernos provinciales, porque no hay forma de implementar una doble escolaridad o una prolongación de jornada cuando necesitamos una nueva escuela o una mucho más grande. Estos van a ser los primeros síntomas. Lo mismo sucederá cuando veamos que realmente se está hablando de salarios pero no como un migaja obtenida después de días de paro, sino la mejora salarial como el consenso en un proceso de diálogo.

Seguramente, con la sanción de este proyecto de ley, el año 2007 será vital y clave para el futuro de la educación en el país. Si acertamos habremos empezado a hacer cierto ese viejo sueño de Sarmiento de hacer de toda la República una escuela.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, senadora Ibarra.

Sra. Ibarra. – Señor presidente: también voy a comenzar por felicitar a la Comisión de Educación, en particular, en la persona de su presidenta, la senadora Amanda Isidori. No es una felicitación formal, la senadora Isidori es miembro de la oposición y ha hecho carne en este proceso de trabajo del proyecto de ley la idea de que la educación es una política de Estado. En ese sentido, trabajó incansablemente con el ministro del área del gobierno nacional y con los distintos bloques para llegar a un fuerte consenso, que es como llegamos a este recinto.

La verdad es que la satisfacción se extiende al bloque radical, que acompaña en general este proyecto de ley que va a salir con un fuerte consenso del Congreso; al bloque oficialista, en particular en la persona de las senadoras Silvia Gallego y Graciela Bar, que trabajaron incansablemente yendo y viniendo con todos los textos, las modificaciones y las propuestas para lograr los consensos; y, sin dudas, al ministro del área, Daniel Filmus, que supo trabajar mano a mano con el ámbito legislativo en el proceso inicial que dio germen a este proyecto de ley con toda la sociedad en su conjunto para llegar a una norma con un fuerte debate social previo.

Sin dudas, este proyecto de ley es el resultado de una política de Estado iniciada por el gobierno en sus primeros días de gestión. El primer acto del presidente Kirchner fue trasladarse junto con el ministro del área a la provincia de Entre Ríos por un conflicto docente. Allí la lucha se daba porque los docentes no cobraban –acordémonos de la cifra– los 260 pesos que debían cobrar. Ese era el debate en el que estaba la Argentina en 2003 cuando se inició el gobierno nacional de este presidente.

A partir de allí, y resuelto ese conflicto, se determinó que la educación fuera un eje central de la política de gobierno. La primera ley que discutimos fue la garantía nacional del salario docente y después la ley que duplicaba y prorrogaba el incentivo docente. Luego, dictamos la Ley de Financiamiento Educativo, que es la plataforma que permite a esta altura que podamos planificar y tener metas ambiciosas en materia de educación. Sin el financiamiento correspondiente, que lo resolvimos en la Ley de Financiamiento Educativo, hoy estaríamos pensando en tener más de lo mismo y en reordenar lo que tenemos. Sin embargo, estamos apostando a cambiar y a poner financiamiento, pero no para tener lo mismo más caro, sino para tener una mejor educación financiada a futuro.

Además, dictamos la Ley de Educación Técnica que nos vuelve a traer la cultura del trabajo y nos permite mirar estrategias para el crecimiento económico y el desarrollo de la industria nacional; dictamos la Ley de Educación Sexual –imprescindible por toda la problemática existente en adolescentes y niños– y la Ley de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

Con toda esta plataforma en materia de educación y de protección a la niñez llegamos hoy a la redacción de esta Ley Nacional de Educación, como política de Estado, con un fuerte consenso y con un fuerte debate social.

Se habló mucho aquí de las bondades de esta norma; y lo ha hecho gente mucho más autorizada que yo. Efectivamente, se unifica el sistema educativo; se jerarquiza la capacitación docente; se establecen trece años de educación obligatoria, con el deber del Estado de garantizar este bien público que es la educación; se universaliza la sala de niños de cuatro años, donde el Estado ofrece a todos los padres que opten por esa opción la certeza de que tendrán vacantes. Asimismo, se establecen ocho modalidades –que se vinculan con universalizar la educación, atendiendo las necesidades especiales y diferentes de la población–, la jornada completa o extendida de la educación primaria, la calidad educativa y los contenidos curriculares obligatorios tendientes a recuperar valores que habían sido degradados en las últimas décadas.

En efecto, de esto se habló mucho. Y quiero pasar a contestar algunos cuestionamientos minoritarios y puntuales que se hicieron en el recinto respecto de algunos contenidos.

Quiero detenerme sólo un instante en la intervención de la senadora por Tucumán. Dijo no conocer y dudar del debate social que tuvo este proyecto de ley; es decir, del debate en las escuelas con docentes, con no docentes, con organizaciones sociales y políticas, con padres, con alumnos y con la comunidad en general. Para conocer ese proceso, basta con entrar en la página *web* del Ministerio de Educación; basta con haber leído lo difundido por los principales medios masivos de comunicación nacionales y locales, porque fue un debate que alcanzó a todas las jurisdicciones del país. Pero, además, como representantes del pueblo, basta con acercarnos a las comunidades educativas de las jurisdicciones.

Conozco la experiencia de la ciudad de Buenos Aires, donde escuchamos a nuestros niños y a los padres defendiendo a los tutores, pidiendo trabajo social y voluntariado, y solicitando educación sexual. Asimismo, sabemos de experiencias en jurisdicciones donde se pedía a gritos educación rural como una educación especial.

Esto era sabido con sólo participar en las escuelas en donde se desarrolló un enorme debate que fue previo a esta norma. Si bien se dice que el debate social no reemplaza al debate parlamentario, este proyecto llega con un debate social y con el debate parlamentario amplio y con el trabajo mancomunado entre el gobierno, el oficialismo, la oposición y todos los bloques en general.

En realidad, sospecho que lo que le molestó a la senadora por Tucumán –tal vez por ser ella representante ideológica del genocida Bussi– es el artículo 70 de esta ley, que va a impedir que se incorpore a la carrera docente a quienes hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad o a aquellos que hayan participado en golpes de Estado.

Sr. Presidente. – Senadora Ibarra: la señora senadora Pinchetti le solicita una interrupción. ¿Se la concede?

Sra. Ibarra. – No voy a conceder interrupciones, presidente.

Yo creo que un enorme logro de esta norma es garantizar que a nuestros hijos no los van a educar genocidas.

Tal vez hubo otra molestia, que es el artículo 92. Esta norma va a exigir como contenido curricular obligatorio la reconstrucción y la memoria histórica de lo que pasó en este país, para conocer los procesos históricos y políticos que llevaron a romper con el orden constitucional, a instaurar terrorismos de Estado que costaron miles de vidas de argentinos y para formar a nuestros hijos en el respeto a los derechos humanos.

Sin duda, son dos logros maravillosos de esta ley, que hacen a las necesidades básicas de un país que sabe lo que es vivir la tragedia de las rupturas institucionales.

Hay otro punto que tampoco quiero dejar pasar y sobre el cual uno o dos senadores han hecho mención, que es el concepto laico de la educación pública. Estamos orgullosos del Estado laico. La enorme mayoría de los argentinos está orgullosa de que nuestra Constitución Nacional nos coloque en situación de tener un Estado laico y una educación pública laica. Y un Estado, además, muy respetuoso de la libertad de culto, de la libertad de expresión y que brinde la posibilidad a quien quiera elegir una

educación religiosa para sus hijos de poder hacerlo. En ese sentido, este proyecto respeta la educación pública laica y respeta, como derecho inalienable, la posibilidad de elección de la educación, en un marco de libertad de culto y religiosa, con capacidad de educar en la religión a los hijos cuyos padres así lo decidan.

En otro orden de ideas, quiero contestar algunas dudas o inquietudes que se han planteado con respecto a si es necesario o no que las provincias ratifiquen esta ley. En primer lugar, creo que esto está resuelto constitucionalmente. No hay debate posible al respecto. Nuestra Constitución Nacional establece como facultad propia del Congreso Nacional la sanción de leyes de organización y de base en la educación que consoliden la unidad nacional, respetando las particularidades provinciales y locales. Por eso, nosotros legislamos hoy por mandato constitucional.

Aquí nos congratulamos diciendo que la educación es un bien público; todos lo felicitamos y sostenemos que esto debe ser garantizado por el Estado. Entonces, ¿vamos a dejar las políticas públicas que hacen a la infancia, a la educación, al futuro y a la construcción de un modelo de país fuera del debate parlamentario nacional, cuando se trata de una facultad nuestra, por mandato constitucional? No estamos dictando una ley para erigir un monumento, para lo cual aportan fondos las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Nación. Estamos dictando políticas de Estado, políticas públicas sobre un bien público nacional, como es la educación. Y sobre esas políticas nacionales públicas define la Nación.

En lo que respecta al financiamiento, la cuestión ha sido resuelta por la Ley de Financiamiento Educativo, como bien dijo la señora senadora Bar...

–Murmillos en las galerías.

Sr. Presidente. – Por favor, pido se guarde silencio en las gradas, a fin de poder escuchar a la oradora, que está redondeando su discurso.

Continúa en el uso de la palabra la señora senadora Ibarra.

Sra. Ibarra. – La Ley de Financiamiento Educativo establece los esquemas por los cuales se determina el financiamiento, que va a lle-

gar al 6 por ciento del producto bruto interno hacia el año 2010. Esta ley ha sido votada aquí en general por unanimidad y está vigente. Es la ley que define el modo en que vamos a financiar el cumplimiento del proyecto en tratamiento.

Se ha planteado también el esquema de que puedan coexistir el nivel primario y el secundario, con 7 y 5 años, o con 6 y 6, porque esto no podría traer problemas de fragmentación. El senador Morales, en particular, ha señalado que él propiciaría el esquema de 7 y 5 años, y su deseo de que ello fuera resuelto en este proyecto. La verdad, este tema no sólo se vincula con 7 y 5, o con 6 y 6. Tenemos en el país una multiplicidad de sistemas y de esquemas —creo que 54— y hoy vamos a unificar un sistema donde van a coexistir con un tiempo límite, sólo dos.

Se ha invertido en infraestructura, sin ir al fondo del problema educativo. El tema educativo central no es dónde está el séptimo grado. Tenemos temas vinculados con la estabilidad docente y con la infraestructura muy importantes. Por eso, me parece una salida muy inteligente que, con tiempo fijo, puedan coexistir estos dos sistemas, para no realizar gastos en infraestructura que hoy no hacen a una mejor calidad educativa y poder definir dicha cuestión a futuro, cuando tengamos sólo dos sistemas coexistiendo, en lugar de la multiplicidad actual.

Por otra parte, quiero aclarar que en realidad el senador Morales está exigiendo a nuestro proyecto que resuelva un problema que ni siquiera en el propio radicalismo pudieron resolver. El senador Morales planteó un esquema de siete años para el nivel primario y de cinco para el nivel secundario o medio. Al respecto quiero decir que con una docena de firmas de diputados de su partido, el radicalismo impulsó en la Cámara de Diputados el proyecto 6.903/06, que precisamente se refiere a un esquema distinto al que el senador menciona porque es de seis años y seis años en vez de siete años y cinco años. En realidad, no está mal porque todavía hay miradas de distinta índole, ya que hay temas de estabilidad docente, de infraestructura y de realidades locales y provinciales como ocurre en el Neuquén, Río Negro, la ciudad de Buenos Aires y Mendoza que todavía tienen un esquema vinculado al siete y cinco, mientras hay otras que han quedado en puntos intermedios o

otras que han pasado al seis y seis. Una salida buena e inteligente es que coexistan estos dos sistemas, hasta que los definamos en los años que establece la ley.

Se ha planteado la posibilidad de asignación universal por alumnos. Se ha dicho que sería una política universal, el sistema conocido como *voucher*, que fracasó en Chile, país en donde hemos visto a los alumnos saliendo a la calle. Pero, la verdad es que no es un sistema razonable. La política universal consiste en que haya becas para financiar a aquellos niños que no están en condiciones de acceder a la educación pública por falta de recursos. No quiero financiar a la educación privada dos veces, no quiero darle la asignación a aquel niño, a aquella niña, que está en condiciones de acceder a la educación pública. Al contrario, quiero que el financiamiento que realice el Estado se destine a políticas universales para sostener a aquellos sectores de más bajos recursos, pero no para financiar al niño que va a la educación privada con una asignación universal o a los que están en condiciones de llegar a la educación, haciéndolo sin garantizar los recursos del Estado para los sectores de más bajos recursos.

Finalmente, también se planteó un criterio más amplio respecto de las posibilidades de los subsidios para las escuelas privadas. Aquí se dijo que se querían parámetros más precisos para estos subsidios. Al respecto, el artículo 65 de la iniciativa en tratamiento plantea con muchísima claridad los parámetros por los cuales se pueden aplicar subsidios al salario docente de las escuelas de gestión privada. Por ello, precisamente se establece que la asignación de aportes financieros por parte del Estado destinados a otros salarios docentes de los establecimientos de gestión privada reconocidos y autorizados, estará basado en criterios objetivos de justicia social, teniendo en cuenta la función social que cumplen sus zonas de influencia, el tipo de establecimiento, el proyecto educativo, la propuesta experimental y el arancel que se establezca en el establecimiento. Tenemos criterios objetivos, equidad social y se tiene que implementar con mucha inteligencia este esquema.

Precisamente, en el proyecto de los diputados radicales, se señalan criterios y se establecen subsidios docentes con prioridad hacia aquellos que reciben alumnos de escasos recursos y

a propietarios que sean entidades sin fines de lucro. Podríamos decir que hasta tienen menos requisitos.

Me parece que la idea es que los subsidios lleguen a los establecimientos que cumplen una función social; es decir, a aquellos lugares en los que su desarrollo es necesario para la población.

No queremos financiar con recursos del Estado aquellas escuelas de gestión privada que son para la educación de elite. Como dijeron aquí las autoridades de la comisión, con esta ley estamos tratando de lograr la mejor educación, que sea de excelencia para todos los niños, niñas y adolescentes; educación permanente para los adultos, atendiendo las diferencias de nuestra población y garantizando por parte del Estado el bien público que, consideramos, es la educación.

Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – Pido la palabra.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Pinchetti de Sierra Morales.

Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – Señor presidente: tengo derecho de responder a quien me acaba de mencionar.

Sr. Presidente. – Sí, brevemente, dado que ha sido aludida.

Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – Me sentí aludida y, además, descalificada por la senadora preopinante.

Quiero aclararle al cuerpo que no represento a nadie en particular. Represento a una provincia de la República Argentina, que es la de Tucumán. En segundo lugar, quiero aclararle que soy docente, vengo de familia de docentes y conozco en profundidad esta cuestión.

En tercer lugar, le voy a pedir autorización para leer lo que se dijo oportunamente en el diario “La Gaceta”, que es el de mayor tirada en la provincia de Tucumán: “después del debate el anteproyecto irá al Consejo Federal y después a Diputados, porque no dan los tiempos”, dijo la ministra de Educación. “No hay apertura. Son pocos los alumnos que participaron porque no sabían que podrían hacerlo; nadie les dijo nada”, dijo un alumno de la escuela normal, de la Capital.

“Una crítica que se escuchó en todos los co-

legios fue que faltó tiempo para analizar el anteproyecto. Tampoco hubo tiempo de leer bien el documento, porque llegó sin la suficiente anticipación.”

“...la Comisión de Padres de Alumnos de Tucumán reclamará hoy en la Defensoría del Pueblo la falta de participación de los padres...”

“A pesar del reclamo de ATEP y de la mayoría de los docentes y alumnos, que sostuvieron que un solo día no alcanza para un análisis de tal magnitud, la secretaria de Educación, Susana Montaldo, confirmó a “La Gaceta” que no habrá otra jornada de discusión a este nivel...”

Considero que con esto queda contestado lo que dijo de mi persona la senadora preopinante y, si le parece, después le voy a hacer una copia de los recortes del diario “La Gaceta” y se la haré llegar a su despacho.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.

Sra. Bar. – ¿Me permite una interrupción?

Sr. Presidente. – Señor senador, la senadora Bar le solicita una interrupción. ¿Se la concede?

Sr. Giustiniani. – Cómo no, señora senadora.

Sra. Bar. – Es para dejar aclarada la legitimidad del proceso de consulta. Porque en la provincia de Tucumán no se hayan establecido los mecanismos, no se puede afirmar que en el resto del país no se lo hiciera. Hablo por la provincia de Entre Ríos, en donde hubo tres días de asueto para que los docentes, en el interior de sus escuelas, discutieran y escribieran sus aportes, y a su vez fuimos nosotros responsables también de la educación. Organizamos foros y en dos oportunidades el licenciado Tedesco, y en una el ministro Filmus, fueron a la ciudad de Paraná. Queda en nosotros haber generado espacios de discusión y de escucha para los distintos actores.

Senador Giustiniani: aprovecho esta interrupción y no quiero dejar de pasar por alto una expresión del senador Gómez Diez. No quiero que quede como un reduccionismo que la culpa de la mala educación la tiene la escuela. La crisis educativa nos llevaría otras cinco horas más de debate porque son múltiples los factores que incidieron en la misma. Pero afirmar que los

chicos saben menos por una ley, por los contenidos o por las maestras, es un reduccionismo. Los niños y los jóvenes están cuatro horas en las escuelas, y en el hogar ¿cuántas? Hagámonos cargo como padres también de la voluntad y la exigencia para estudiar que tienen nuestros hijos porque somos garantes, como padres, de que nuestros hijos sepan estudiar y aprendan los conocimientos y competencias. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.

Sr. Giustiniani. – Estamos en un debate muy importante. Ojalá el Parlamento argentino destinara mucho más tiempo a la educación. Creo que estamos cerrando un año con una nueva ley de educación. Por lo tanto, se cierra un año de manera trascendente.

En el tema de la educación está explícito y subyace un profundo debate ideológico; hablar de educación es hablar de un tema que aborda muchas cuestiones, algo que no se hace nunca desde un Estado aséptico. Hay una mirada ideológica, sobre todo en cuanto a educación.

¡Qué complejo que resulta cuando en una cuestión que tiene la profundidad de un debate ideológico en el que se contraponen miradas absolutamente diferentes, también sostenemos que la educación debe ser una política de Estado y que, para ello, debe tener amplio consenso!

El debate de este tipo de leyes debe darse sobre la base de un consenso en la sociedad y en los sectores populares, y con una mirada de acuerdo con el tiempo en el que se la está analizando.

Se dijo hoy –durante el debate– que la ley 1.420 duró cien años mientras que la Ley Federal de Educación –apenas a trece años de su sanción– fue un fracaso. ¿Por qué se plantean estas cuestiones? ¿Por qué una ley dura cien años mientras otra, a los trece años, debe ser cambiada? ¿Es por un problema temporal? No exclusivamente. ¿Es por un problema de este tiempo de globalización, por la velocidad del cambio en los conocimientos, por la revolución de la tecnología? ¿Hay que actualizar esos conocimientos? De ninguna manera.

Me parece que el tema importante que estamos discutiendo hoy –por lo que acompañaré con mi voto favorable en general a este proyecto de ley– es que estamos poniendo un punto de

inflexión a una concepción que perdió la Ley Federal de Educación, hasta hoy vigente. Lo trascendente es que estamos dejando atrás una mirada sobre la educación profundamente impulsada por el neoliberalismo. Esta es la cuestión central del debate.

Podemos ver que el sistema educativo argentino enfrenta un conjunto de problemas que resulta necesario abordar. Los principales son las desigualdades en el acceso, la permanencia y el egreso del sistema educativo. Pero lo central es que hay dos formas de ver la educación: desde la ventana del mercado –así fue como se la vio en los 90 y por eso esta ley fue un instrumento, como la ley de enseñanza superior, de esa visión de educación–, o desde la ventana de la democracia y, entonces, entendemos la educación como un derecho, como una responsabilidad indelegable del Estado nacional, como la posibilidad de igualación en una sociedad profundamente desigual.

Por eso, voy a acompañar en general el dictamen y voy a plantear algunas propuestas para algunos artículos. Creo que la ley retoma ciertas ideas centrales de lo que significa la educación como un derecho en democracia, con la responsabilidad indelegable del Estado. Y me parece que, en otros aspectos, no avanza tan claramente y manifiesta tímidamente una concepción pública que arrastra un lenguaje que viene de la época anterior.

Señor presidente, quiero que el Parlamento argentino también tenga en cuenta, ya que hemos escuchado aportes relevantes en este debate, que el tema de la educación tiene generalmente una sobrecarga. Decimos que la educación debe ser una política de Estado, que debe instruir. Por eso el ministerio del área se llamaba Ministerio de Instrucción Pública antes del siglo XX. Había que instruir a los niños, había que darles la nociones básicas, elementales y formativas. Pero también la educación tiene una sobrecarga porque ante cualquier problema que aparece –la droga, los embarazos adolescentes o hasta los accidentes de tránsito, por ejemplo– siempre hay un señor sesudo que dice “el problema es la falta de educación”.

Sin embargo, quiero precisar el objetivo de qué se discute con la norma en consideración, cuál es el rol del Estado que se debe jerarquizar y cuál es la diferencia al hablar de lo público y

lo privado.

En este sentido, no se puede mirar la realidad como una fotografía. No se pueden mirar las carencias sino que deben analizarse los porqués. Por qué el sistema educativo está en una verdadera crisis. Por qué nuestro país viene de profundas crisis económicas, sociales y educativas.

Recordar la ley 1.420, mencionada en este recinto, sería, como diría Walter Benjamín, sumergirnos en el futuro retrocediendo. Y sumergirnos en el futuro retrocediendo es analizar que aquella escuela fue la escuela común, laica, pública, gratuita y obligatoria, que estuvo en un proyecto de nación y en una concepción de país. Y además tenía el entorno cultural de un país que venía cambiando.

Por eso, la ley 1.420 tiene el consenso de todo el país cuando se la analiza en retrospectiva histórica.

Es importante analizar que en aquel momento aquella ley significó también una genial perspectiva y mirada de futuro.

Por eso, duró cien años. Sentó al hijo del rico junto al hijo del pobre con el mismo guardapolvo blanco y en el mismo pupitre. Fue una ley que igualó hacia arriba, niveló hacia arriba, generó nuevas posibilidades para aquellos que nunca las habían tenido. Lo mismo pasó con la Ley de Reforma Universitaria, que derrumbó los muros de la universidad para que no solamente el privilegio pudiera tener una formación universitaria.

El doctor era el hijo de la oligarquía, no del pueblo, pero, a través de esta concepción de la educación, como lo dice Florencio Sánchez en la magistral novela *M'hijo el doctor*, es que el doctor pudo ser el hijo del colono, el hijo del obrero o pudieron serlo los hijos de familias humildes y postergadas.

Esa es la rica tradición argentina en materia educativa que hoy por hoy tenemos que rescatar.

Además, esto iba de la mano de la Ley Sáenz Peña, la del voto popular, y de la mano de una fuerza social que se hacía presente en la vida política del país como nunca había pasado; es decir, momentos en que estos recintos eran reservados para los señores doctores que provenían de los sectores del privilegio y nunca de los sectores populares.

Como dice Aníbal Ponce, en ese hermoso opúsculo *La vejez de Sarmiento*: “la llegada de sabios de otras costas, la creación de institutos

que despertaron el amor por las ciencias naturales en los jóvenes. Era Burmeister reorganizando el museo que Moreno enriquecía. Era Holmberg clasificando las flores y Linch la fauna. Era Fontana que exploraba. Latzina describía y, mientras Gould continuaba desde el cielo austral el recuento de estrellas, comenzando con Hiparco, un oscuro maestro de Mercedes, que era Florentino Ameghino, tallaba piedra a piedra el más alto monumento de la paleontología americana. Ramos Mejía iniciaba en el país los estudios médicos psicológicos. Un congreso pedagógico sintetizó que una profunda renovación en la cultura tenía que acompañarse de una no menos profunda renovación de la enseñanza”. Ese era el momento histórico de aquella etapa.

Por eso hoy, y no para ponernos épicos sino para analizar la realidad en este devenir histórico, tenemos que entender que lo positivo de dejar atrás la Ley Federal de Educación es que estamos sancionando una ley que es un punto de partida, como aquí se dijo. Es un punto de partida que tiene un gran consenso social, que no lo tuvo nunca la Ley Federal de Educación. Esa ley se aprobó con una mayoría parlamentaria, no salió con un consenso como el que tiene esta ley. Tampoco salió con el consenso social de aquellos momentos porque hubo resistencia de los maestros en las calles, que terminó en aquellas jornadas épicas de la “carpa blanca” por un mayor presupuesto, por mejores salarios, por una educación diferente.

Aquella ley 1.420, a pesar de los golpes de Estado y de las rupturas institucionales, siguió en el tiempo produciendo hechos magníficos en la cultura y educación de la Argentina. Fue la escuela serena de las maestras...

Sr. Presidente. – Tiempo, senador.

Sr. Giustiniani. – Por eso, en este debate nosotros queremos ser muy concretos cuando hablamos de lo público y de lo privado, porque la escuela es un lugar muy especial. No nos podemos olvidar de los *vouchers* que querían dar a los pobres para que asistan a la escuela privada. No nos podemos olvidar de que se quiso instrumentar las escuelas *charter*.

Todas estas concepciones modernas que campeaban en el mundo acá no pudieron ser aplicadas por la lucha de la sociedad, de los maestros.

Por eso el cuchillo de las políticas neoliberales no pudo llegar tanto al hueso. Por eso tenemos todavía estas reservas que permiten que hoy discutamos una ley de educación de esta manera, que permiten que marquemos un punto de inflexión con relación a esa política del neoliberalismo.

Nos hubiera gustado que no se arrastrara alguna terminología de la ley federal, cuando hablábamos recién de lo público y de lo privado. Fue curioso el ejercicio de confusión conceptual que realizó la impronta neoliberal, no justamente para permitir que el Estado fuera a controlar a la enseñanza privada, sino con el objetivo de licuar lo público en lo privado. Ese fue el objetivo. Por eso, cuando se plantea lo público de gestión estatal o de gestión privada se comete un error en mantener esta terminología.

Esta ley debiera poner mucho énfasis en rescatar lo público como lo que es, el espacio de la sociedad, de la gente, sin desconocer que hay una enseñanza privada, que cumple un papel...

Pido cinco minutos más porque en realidad yo no tenía diez minutos. Usted me contó diez minutos...

Sr. Presidente. – Igualmente, hace rato que pasaron los diez minutos. Pero tómese su tiempo, senador, no hay problema.

Sr. Giustiniani. – Estoy terminando.

Sr. Presidente. – De todas formas, se había acordado que fueran diez minutos para cada uno.

Sr. Giustiniani. – No para los miembros informantes de los bloques.

Considero que esta ley representa un avance importante dado que plantea la obligatoriedad hasta la enseñanza secundaria. Es un avance importante que se vuelva a la obligatoriedad del primario y del secundario. Me decían en una asamblea en Casilda, en mi provincia, ¿cómo se va a garantizar la obligatoriedad hasta el secundario? Es un debate. Pero es un debate todo el tema de los derechos sociales.

Cuando uno plantea un derecho social está planteando la obligación de su cumplimiento. Pero tampoco podemos entrar en ese escepticismo de aquellos que, al no querer cumplir los derechos sociales, no fijan objetivos porque dicen que son de imposible cumplimiento. Entonces analizan el artículo 14 bis de la Constitución

Nacional, dicen que es de un carácter programático y, por lo tanto, una utopía su realización.

Acá estamos hablando de una ley, de una norma jurídica que es imperativa-atributiva y, por lo tanto, estamos planteando un hecho muy importante, un consenso del Parlamento argentino, de cara a la sociedad y al Estado argentino, en cuanto a que vamos a cumplir con esa obligatoriedad hasta la enseñanza secundaria. Claro que no va a ser del día a la noche, claro que no será en dos o tres años. Pero que este consenso quede plasmado en este proyecto de ley es muy importante para las generaciones futuras. Es muy importante que el Parlamento argentino tome esta decisión histórica de extender el ciclo de la enseñanza obligatoria.

Por eso, creo que en este proceso de enseñanza-aprendizaje, lo sustancial, lo insustituible son los maestros.

Por tal motivo, considero fundamental que su formación, sus salarios y sus condiciones sean las mejores; y retomar el concepto de una formación a partir de un proyecto nacional, de una concepción nacional, es volver a la idea de la unidad del proceso educativo.

Precisamente, la ley federal fue en contra de eso y lo echó por tierra. Ahora volvemos a un debate de un proyecto de Nación, al debate de una educación para todos, de una educación popular y democrática. Ese es el punto de partida.

El viejo Hegel diría, como maestro de realismo: “la charlatanería enmudece ante la seria réplica de la historia”. Ojalá que con este instrumento que hoy estamos por sancionar estemos echando un poquito hacia adelante la rueda de la historia, para nuestros niños, para nuestros hijos y para un futuro mejor de la República Argentina. (*Aplausos en las galerías*).

Sr. Presidente. – Vamos cerrando el debate, en primer lugar con la palabra el señor senador Sanz.

Sr. Sanz. – Señor presidente: pretendo ser breve, porque se han dicho esta tarde cosas muy importantes, muy profundas. Y fundamentalmente porque estamos considerando un proyecto de ley que tiene un amplísimo consenso y que es consecuencia de un consenso social articulado durante de todo el año, a lo largo y a lo ancho del país.

Quería decir simplemente que hoy estamos reemplazando a una Ley Federal de Educación por otra. Y creo que las dos leyes –la vieja y la nueva– tienen particularidades, porque responden a modelos de países distintos. Creo que éste es el lugar en el cual hay que pararse, por lo menos, al hacer una síntesis de este debate. Algo de esto acaba de decir el senador Giustiniani.

La Ley Federal de Educación vieja, la que estamos reemplazando, respondía a un modelo de país fragmentado, inequitativo, no solidario, basado en el crecimiento de los servicios, del sector financiero, en la concentración económica, en el debilitamiento del Estado, que se convirtió con el transcurrir de los años de esa década, en un Estado ausente y en muchos casos cómplice de intereses que poco tenían de nacionales.

Ese fue el país que se generó por aquellos años, y ése fue el país que tampoco se pudo desactivar en el gobierno del 99 a 2001; por eso fue que explotó en las manos, gobierno del que mi partido formó parte.

Esa ley no fue la única causante de todos los males, por lo menos de todas las cosas que hoy se han vertido aquí como opiniones de diagnóstico y que me eximo de reiterarlas, porque han sido, en todos los casos, expresadas por senadores y senadoras que conocen del tema, que tienen idoneidad profesional y que, a la vez, han traído al debate de hoy en el Senado, la visión de la experiencia y la visión federal de cada una de sus provincias.

Así como no seríamos justos si le achacáramos a la ley federal de educación todos los males que hoy tiene la educación en la Argentina, tampoco lo seríamos si dijéramos que la ley 1.420 por sí sola fue la responsable del crecimiento nacional de la primera mitad del siglo XX, porque al lado de cada una de las leyes había y hay un modelo de país que tiene mucho que ver con cómo nos va más allá de las propias leyes.

Sí es cierto que cada ley recoge las particularidades de cada modelo. Por eso, no es casual que en la ley federal de educación aparezcan por primera vez algunos conceptos como mercado, oferta y demanda, gerenciamiento, competitividad u otros similares. Esos eran los paradigmas de los noventa. Y por eso, en este proyecto de ley tampoco es casual que muchos

de esos términos desaparezcan y que exista una reaparición del Estado como el principal constructor de la educación y herramienta de desarrollo de la sociedad.

Es cierto que hay algunos términos que también nos hubiera gustado que desaparecieran, pero no hacen al fondo de la cuestión. El señor senador Giustiniani ha hablado recién de los términos de “gestión privada o pública”, pero la verdad es que no son conceptualmente la columna vertebral del proyecto de ley.

Hablábamos recién del Estado como constructor del desarrollo de la sociedad. Entonces, ¿qué nos permite la educación? Nos permite formar un tipo de sujeto para que, junto con otro sujeto, forme un tipo de sociedad. Eso es lo que estaba en discusión en los noventa y también lo que está en discusión en estas épocas con otro modelo de país.

Desde la Unión Cívica Radical quiero expresar cuál es el tipo de sujeto que pretendemos; y es precisamente la antítesis del que concibió el anterior modelo. En los noventa existía el tipo de sujeto mercantilista y nosotros creemos que con este proyecto de ley apuntamos al sujeto de valores. En los noventa se fomentó la desidia social y nosotros creemos que en este modelo hay que fomentar el compromiso y la participación social. En los noventa hubo un sujeto que soportaba pasivamente la impunidad y nosotros queremos que en este modelo haya un sujeto que se revele activamente contra la impunidad, porque ella socava y corroe los cimientos de esa sociedad que pretendemos. En los noventa el sujeto era el de “Nada me importa” y hoy apuntamos a un sujeto con pensamiento crítico, donde todo le importe. En ese sentido, he escuchado con atención a la señora senadora Bar cuando se refería al compromiso de todos los sectores, más allá de esas cuatro horas que los chicos pasan en el colegio.

El principal objetivo de este proyecto de ley –por eso es que lo vamos a acompañar– es desarrollar ciudadanos en cada uno de los ámbitos donde les toque actuar. Si van a ser médicos, que se comprometan con la política pública de salud, por el estado de los hospitales y por la ética de la profesión; si van a ser diseñadores gráficos o van a trabajar en *marketing*, que no generen propaganda que abone o legitime valores y prácticas perjudiciales para la sociedad; si

van a trabajar en el campo, que sean formados en la conciencia del cuidado de la naturaleza y de la diversificación en la producción. Es decir, desarrollar ciudadanía en cada especialización.

Crear conciencia ciudadana significa, como alguien ha dicho por allí, que el hambre de mi semejante me resulte intolerable. Esos son los sujetos que todos los que estamos aquí queremos concebir para la Argentina, para construir una sociedad –si ése es el tipo de sujeto– democrática, comprometida y desarrollada equitativamente.

Ahora bien, la pregunta es la siguiente: ¿puede esta ley, por sí sola, alcanzar este fin? Ha quedado claro a lo largo de este debate que no, porque, como ya lo dijimos, ni siquiera la ley 1.420 por sí sola fue la creadora del desarrollo en la Argentina de la primera mitad del siglo XX. No obstante, es verdad que esta iniciativa es un paso muy importante y por eso venimos a apoyarla. Este no es un momento de diferenciaciones; y quiero que eso quede absolutamente en claro.

Seguramente, el ministro y sus colaboradores –que son hombres que están en este ambiente desde hace mucho tiempo– sabrán que en el propio seno de mi partido hubo muchos debates y muchas discusiones. Obviamente, cuando llegan estos momentos parlamentarios, la Unión Cívica Radical –que siempre ha tenido como columna vertebral esta discusión– tiene natural inclinación a diferenciarse. En efecto, la diferenciación, sobre todo en estos ámbitos, siempre ha sido tradición en la política argentina.

Pero hoy, en este bloque, nosotros no queremos diferenciarnos; al contrario, queremos apostar por una política de Estado votando a favor este proyecto de ley. Digo esto, porque este tipo de normas no nos pueden hacer incurrir en un torneo de diferenciaciones parlamentarias a quienes podemos coincidir en un mismo modelo de país. ¡Que nadie se equivoque! Podemos tener disidencias en particular en algunos artículos, pero no son más que eso: disidencias en particular vinculadas a cuestiones operativas, como por ejemplo definir una estructura. Efectivamente, podemos estar equivocados o no, pero creemos que habría que definir una estructura y consolidar derechos, como bien dijo el señor senador Morales, que hablaba de los derechos

de los docentes, en particular del 82 por ciento móvil –eso es consolidar derechos–; o mejorar aspectos de la evaluación de la calidad educativa, como lo mencionó en su discurso la señora senadora Mastandrea. Ahora bien, todos estos conceptos se relacionan con un signo positivo, como cuando volvemos en nuestros discursos a la cuestión del financiamiento.

Y acá quiero hacer un paréntesis, porque en su momento, durante el debate de la ley de financiamiento educativo, se nos criticó por hacer hincapié en el reparto o en la distribución de los porcentajes entre Nación y provincias, ya que en lugar de un 60 y un 40 por ciento, nosotros hubiéramos preferido un 50 y 50 por ciento. Se nos dijo que, en realidad, estábamos atacando al corazón de la ley. ¡Craso error, señor presidente! No obstante, nosotros votamos también a favor de la ley de financiamiento educativo, porque su columna vertebral era el compromiso de pasar la inversión en educación del 4 al 6 por ciento del producto bruto interno y la cuestión operativa era lo vinculado a los porcentajes.

Ahora bien, a casi un año de la instrumentación de esa ley de financiamiento educativo, no fuimos nosotros quienes trajimos este tema a debate público diciendo que estábamos en lo cierto. En efecto, hace pocos días, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, se refirió a esos aspectos del financiamiento educativo –aquellos del 50 y 50 por ciento– y dijo que esa ley no sólo no brinda más recursos a la provincia de Buenos Aires sino que le resta, porque tiene que aportar a un fondo que se reparte con otros distritos nacionales. Sin duda, es un caso particular el de la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, cuando nosotros discutíamos en aquel momento el reparto de la distribución, lo hacíamos desde la concepción de que es hora de que la Nación les vaya devolviendo a las provincias parte de lo que en los últimos años se ha apropiado.

Por otro lado, quiero decir que apoyamos esta iniciativa por el procedimiento con el que se ha llegado a esta discusión. Y no me pongo colorado por hablar bien de un ministro del Poder Ejecutivo nacional, de un ministerio o de su equipo; lo hemos hecho en otras ocasiones.

Y creo que es consecuente con nuestro pen-

samiento que, si en muchas ocasiones le reclamamos al gobierno nacional apertura, participación y respeto por la pluralidad, hoy estemos votando a favor esta norma, porque ha sido un ejemplo de participación, de pluralidad y de apertura.

Es verdad que en algún rincón del país alguien podrá quejarse de que, en esa doble vuelta de consultas que tuvo la iniciativa, no contó con los días suficientes para discutir. Sin embargo, el hecho de que hoy estemos debatiendo este proyecto de ley, respecto del cual hace un año que se está trabajando en su consenso con todas las comunidades educativas, es algo que nos alienta también a rescatar. Y digo esto, porque nos gustaría que muchas otras herramientas legales tuvieran no ya el procedimiento extenso que tuvo esta iniciativa —reitero, de un año de búsqueda de consensos—, pero sí por lo menos un mínimo respeto al pensamiento ajeno, a la pluralidad y a la participación.

Por eso, vamos a votar a favor de este proyecto de ley. Estamos convencidos de que responde a un modelo de país distinto, que no nos avergüenza decir que compartimos en sus trazos gruesos, más allá de que tenemos diferencias. Desde nuestro partido combatimos con mucha fuerza el modelo de los noventa y también nos sentimos muy mal por no haberlo podido cambiar cuando nos tocó ser gobierno. Por eso hoy, que tenemos la oportunidad de decir estas cosas, no tenemos ningún empacho en manifestarlas y en sumarnos a las cosas buenas que se llevan a cabo, como este proyecto.

Por todo lo expuesto, vamos a votar favorablemente esta iniciativa y a pedir la inclusión de algunas modificaciones en algunos artículos; y si éstas no fueran aceptadas, votaremos negativamente esos artículos.

Sr. Presidente. — Para cerrar el debate tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. — Señor presidente: quiero rescatar este debate, por el nivel de madurez y de responsabilidad que ha tenido el Senado de la Nación, definiendo a la educación como una política de Estado que requiere de niveles de consenso de las fuerzas políticas. Me parece que en esta jornada esto es quizá lo más valorable y positivo.

También rescato la tarea llevada a cabo por la comisión, tanto de parte de su presidenta, que

no es de nuestro partido, como de sus integrantes y vicepresidenta, la señora senadora Gallego, quien sí pertenece a nuestro bloque. Ellos han llevado adelante un trabajo de debate y de discusión importante, en el que se han incorporado la mirada y la visión del Congreso, dado que la iniciativa del Poder Ejecutivo tuvo mejoras y reformas. A su vez, también existió una gran comprensión por parte del ministro.

Además, el proyecto fue presentado como una cuestión de Estado. En efecto, en la Casa Rosada, el presidente de la Nación, junto con el ministro de Educación y gobernadores de distintos signos partidarios, ha definido claramente un rumbo, una política y una acción de gobierno, consolidando a la educación como un pilar básico de la acción institucional del Estado.

Hubo algunas preguntas que fueron una constante en el debate. Así, por ejemplo se preguntaba si una ley sirve para cambiar la educación de los argentinos. Yo diría que es un instrumento necesario. Pero toda ley tiene que estar inserta en una política, en una acción de un gobierno. Los productos de laboratorio no cambian la historia. Podemos tener la mejor ley y proyecto teórico que, sin correlato con la acción política, con la decisión y con la convicción de cambiar y transformar las cosas, de nada servirán.

Por eso, hoy estamos encarando un modelo de país que crece, que genera trabajo, que produce empleo e inclusión. Sin estas cosas, indudablemente, por más extraordinario que fuera el proyecto, por más que planteara la equidad y el mejor de los mundos, no lograríamos cambiar las cosas. Si no hay crecimiento económico, si no hay incorporación de gente al trabajo, si no logramos que el país se desarrolle, crezca y recupere una burguesía nacional, si no llevamos a cabo la reconstrucción de la industria, que el campo produzca y que generemos empleo, una ley de educación no será la solución.

Hoy estamos recuperando el modelo que en algún momento tuvo el país. Me refiero a la década del 45 al 55, cuando con toda una simbología, tuvimos un modelo educativo y de inserción de la gente. Baste recordar los libros de ese tiempo. Yo era chico, pero estos reflejaban la imagen del obrero, del trabajador, de la mujer ama de casa. Por supuesto que también todo el “gorilismo” argentino criticaba algunas consignas de esos libros que, por ejemplo, de-

cían “Evita me ama”. Pero ese modelo y proyecto educativos indudablemente permitieron la inclusión social, el ingreso de vastos sectores del trabajo al mundo educativo en igualdad y también el acceso a las universidades, porque quienes hemos estudiado lo hicimos en la universidad pública, siendo la Argentina uno de los pocos países del mundo en que es gratuita; y ni hablar de Latinoamérica, donde tenemos un sistema universitario de libre acceso y gratuito. Entonces, nosotros somos producto de esa educación pública.

Como recién decía el señor senador Gómez Diez, somos el fenómeno, la consecuencia de un proceso político y social de inserción, de incorporación de vastos sectores de trabajadores a la educación, lo que permitió el ascenso y la promoción social. Ese tiempo se ha puesto en marcha nuevamente en la Argentina con el gobierno del presidente Kirchner, porque además hay un rumbo.

Esta es una ley integral de educación que busca un sistema de igualdad y de equilibrio, pero teniendo de contexto a las provincias.

El otro día, el ministro de Educación recordaba la siguiente anécdota: él estaba en la provincia del Neuquén, en un punto límite junto a Río Negro y La Pampa, y las tres provincias tenían un sistema educativo totalmente distinto, más de cincuenta y siete modalidades de estudio. Es decir, un complejidad extraordinaria.

Creo que volver al primario y secundario es regresar al camino del sentido común, a modelos que permitieron una adecuada formación tanto en el nivel primario como en el ciclo medio, para nuevamente formar chicos que sepan leer, que escriban sin faltas de ortografía, que salgan preparados para la vida, que ingresen a la universidad con un grado de capacitación y que comprendan lo que estudian.

Aquí hay un rumbo; y esta iniciativa que estamos por sancionar tiene antecedentes que tienen que ver también con decisiones muy fuertes del gobierno nacional y de su ministro de Educación, licenciado Daniel Filmus, que pone en primer lugar el eje del financiamiento.

En efecto, este Congreso discutió el financiamiento de la educación en la Argentina y estableció como meta por lograr para 2010 que el producto bruto interno para educación sea del 6

por ciento. Por lo tanto, ésa es una decisión política del gobierno, del Estado argentino, para darle a la educación una prioridad en el marco del gasto público, de la inversión que se realiza en materia educativa.

Hay un segundo camino que me parece de gran trascendencia y que se refiere a la recuperación de la escuela técnica en la Argentina, que fue la cuna de la universidad obrera y que estaba perdida en la bruma de no sé qué reforma. También constituye el primer paso de la formación de técnicos, torneros, fresadores, para un mundo ligado a la industria. Esa escuela fue recuperada cuando volvimos a sancionar la ley de educación técnica en la Argentina, que tiene que ver con un proyecto de país.

Como se había concebido un mundo de servicios, no hacían falta técnicos. Pero, indudablemente, ya sabemos qué paso con ese mundo de servicios financieros o de otro tipo, donde se pensaba que la Argentina podría ser un país que no produjera, donde no existiera la producción.

Entonces, estamos consolidando un rumbo, una acción, en el marco de un gobierno y de definiciones políticas estratégicas, que tienen que ver con el crecimiento, con la inversión, con el desarrollo, con la generación de empleo y con volver a recuperar un camino ligado a la industrialización del país. Para lograr esto tiene sentido y valor una ley de educación, porque de lo contrario estaríamos votando una norma que gira a lo loco, de manera indefinida, en un universo perdido, como esos cometas que se pierden o esos satélites perdidos que giran alrededor de la tierra y que no se sabe para qué están.

La ley tiene sentido, porque está inserta en un proyecto de país, de recuperación de la economía real, y porque busca volver a determinados valores de la educación.

Esta iniciativa también tiene el valor del consenso, de haberla discutido con más de 4 millones de personas durante seis meses. No obstante, siempre hay alguno que se queja. No sé quiénes están afuera; si la FUBA u otros que todavía no lograron consolidar la gobernabilidad en la universidad autónoma argentina y están quejándose no se sabe por qué ni cómo ni cuándo. Pero se quejan; es una Argentina quejosa.

Quiero decirle al señor ministro que se quede tranquilo, porque la unanimidad no la va tener nunca. Pero indudablemente es un gran paso el

que estamos dando; un paso que afianza la educación. La iniciativa apuesta fundamentalmente a los sectores más humildes, a un esquema que tiene que ver también con fortalecer las modalidades, a la educación ligada a los pobres, a ampliar las horas, a llegar a la doble jornada. No se puede concebir el aprendizaje de idioma si no hay doble jornada. Este es un dato central.

Por lo tanto, alentamos al señor ministro a seguir trabajando en este rumbo de fortalecimiento de la educación en la Argentina, de volver a recuperar la educación como un pilar básico. Estamos muy contentos de pertenecer a este gobierno, que está haciendo una gran tarea de reconstrucción del país y de la educación pública.

Sr. Presidente. – En consideración los pedidos de inserción solicitados.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.

Señora senadora Isidori: ¿usted iba a proponer un método de votación? ¿Quiere hacerlo en una sola votación?

Tiene la palabra la señora senadora Gallego.

Sra. Gallego. – Señor presidente: lamento que no me entendió cuando le hacía señas para pedirle una interrupción al presidente de bloque, porque quería decir que no vamos a aceptar modificaciones. Por lo tanto, propondría que se vote en general y en particular en una sola votación, salvo que la oposición quiera señalar previamente cuáles son los artículos que no van a aprobar expresamente.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Sanz.

Sr. Sanz. – Señor presidente: para darle celeridad a la votación, voy a mencionar cuáles son los artículos que vamos a votar en contra. Hacemos la salvedad de que la señora senadora Isidori va a hacer una consideración particular sobre su voto respecto de algunos artículos.

A fin de que la Secretaría tome debida nota, dejo constancia de los artículos que votaremos en contra. Son los artículos 8º, 26, 29, 65, 67, 79, 80, 81, 83, 94, 97, 99, 134 y 138.

Sr. Presidente. – Se deja constancia.

Señora senadora Isidori ¿quiere hacer algu-

na referencia?

Sra. Isidori. – Solamente voy a votar en forma negativa el artículo 134.

Sr. Presidente. – Se deja constancia.

Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.

Sr. Giustiniani. – Voy a votar en contra los artículos 8º y 65, 118, y 13 y 14. Pido que los fundamentos se adjunten a la versión taquigráfica, ya que no tuve tiempo de exponer sobre las propuestas que quería hacer; y quedó claro que no se iban a aceptar modificaciones.

Sr. Secretario (Estrada). – Señor senador: ¿puede repetir los artículos?

Sr. Giustiniani. – Sí. Son los artículos 8º y 65; los artículos 13 y 14, vinculados a lo público y lo privado, y el artículo 118, que desde mi punto de vista está mal formulado.

Sr. Presidente. – Se deja constancia de eso.

Tiene la palabra el señor senador Bussi.

Sr. Bussi. – Quiero dejar constancia de mi voto negativo, en general y en particular, reivindicando de este modo el dictamen en minoría elaborado por la senadora Pinchetti.

Sr. Presidente. – Se deja constancia.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola votación. Se ha dejado constancia de las votaciones negativas en los diversos capítulos.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 57 votos por la afirmativa, 3 votos por la negativa, en general y en particular, con las salvedades en particular que se han hecho en cada caso por el bloque de la Unión Cívica Radical, el senador Giustiniani y el bloque de Fuerza Republicana.

–El resultado de la votación surge del Acta N° 2.¹

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley.¹

¹ Ver el Apéndice.

Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados. (*Aplausos y manifestaciones en las bancas y en las galerías.*)

–Varios señores senadores rodean y fe-

licitan al señor ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, que, luego, se retira del recinto.

—Luego de unos instantes:

Sr. Presidente. — Continuamos con la sesión.

9

MODIFICACION DEL PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Pichetto.

Sr. Pichetto. — Señor presidente: solicito que se invite al ministro del Interior, que se encuentra en el Salón Eva Perón.

Vamos a considerar el proyecto de ley sobre trata de personas. Pido un cambio en el Orden del Día.

Sr. Presidente. — En consideración el cambio de plan de labor.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—Se practica la votación.

Sr. Presidente. — Aprobado.

Encontrándose el ministro del Interior, doctor Aníbal Fernández, en antesala, lo vamos a invitar a pasar al recinto a los efectos de presentar el debate.

—Ingresan en el recinto el señor ministro del Interior, doctor Aníbal Fernández, y sus acompañantes.

10

OD 1319 (ND): PREVENCIÓN Y SANCION DE LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS VÍCTIMAS

Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, elaborado sobre distintos proyectos de los senadores Falcó, Agúndez, Pichetto, Capitanich, Basualdo, Perceval, Giri y otro proyecto más de Perceval y Kirchner, que se refiere a la prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas. (O.D.-1.319, no impreso.)

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.

—Se practica la votación.

Sr. Presidente. — Aprobado.¹

¹ Ver el Apéndice.

En consideración en general.

Tiene la palabra la señora senadora Ibarra.

Sra. Ibarra. — Señor presidente: se va a tratar el día de hoy el proyecto de ley de prevención y sanción a la trata de personas y asistencia a sus víctimas.

En primer lugar, quiero dejar en claro que el proyecto llega al recinto con un fuerte consenso de todos los bloques. Han trabajado en él para lograr un dictamen único el bloque oficialista, el bloque radical y los diversos bloques minoritarios del Senado.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador José Pampuro.

Sra. Ibarra. — Agradezco especialmente la presencia del señor ministro del Interior, doctor Aníbal Fernández, porque con dicho Ministerio se ha hecho un trabajo mancomunado de muchos meses para lograr que la iniciativa llegara al recinto, hecho sobre el que luego haré referencia. También quiero agradecer al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que, a través de su ministro, Iribarne, puso a sus equipos técnicos a trabajar con el ámbito parlamentario, y a la Procuración General de la Nación, que hizo su aporte legislativo y de equipos técnicos.

El proyecto, en principio, ha tenido como antecedente iniciativas de los senadores Agúndez, que recoge un proyecto presentado por el procurador Righi, Pichetto, Capitanich, Falcó, Basualdo, Giri, Perceval y Alicia Kirchner, a quien le agradezco especialmente porque, tanto desde la banca como desde su gestión como ministra, impulsó y trabajó mucho para que el proyecto llegara a tratarse.

Aludiré a algunos temas vinculados a la problemática de la trata de personas como delito del crimen organizado.

Según UNICEF, Cruz Roja y organizaciones de mucha jerarquía, la trata de personas es la tercera actividad lucrativa ilegal en el mundo, luego del tráfico de armas y del tráfico de drogas.

En general, la mayoría de las víctimas de trata son mujeres, a las cuales se las tienta con la ilusión de conseguir trabajo, se les quita la documentación y se las reduce a explotación. Hay

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL

PE-424/06

VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Observaciones: Dictamen de mayoría.
Sobre tablas

Acta N°: 2	Fecha: 6-12-06	Hora: 18:21:29
Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo	Mayoría Requerida: mas de la mitad de los presentes	Miembros del Cuerpo: 72
Presidente: SCIOLI, Daniel	Desempeate: NO	

Presentes Identificados:	60	Votos afirmativos:	57
Presentes No Identificados:	-	Votos Negativos:	3
Total Presentes:	60	Abstenciones:	-
Ausentes:	12		
Votos Afirmativos Necesarios:	31	RESULTADO de la VOTACIÓN	AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones

		Versión Original	Actual
CAPOS, Lilliana Delia CURLETTI, Miriam Belén MARINO, Juan Carlos MARTINEZ, Alfredo Anselmo MASSONI, Norberto MASTANDREA, Alicia Ester MORALES, Gerardo Ruben PETCOFF NAIDENOFF, Luis C. SANCHEZ, María Dora SANZ, Ernesto Ricardo TAFFAREL, Ricardo Cesar ZAVALLIA, José Luis	Artículos: 8°, 26°, 29°, 65°, 67°, 79°, 80°, 81°, 83°, 94°, 97°, 99°, 134° y 138°.	AFIRMATIVO	NEGATIVO
ISIDORI, Amanda Mercedes	Artículo 134°.	AFIRMATIVO	NEGATIVO
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	Artículos: 8°, 13°, 14°, 65°, 118°.	AFIRMATIVO	NEGATIVO

Observaciones:

Las senadoras y senadores integrantes del Bloque UCR solicitan dejar constancia de su voto negativo en los artículos 8°, 26°, 29°, 65°, 67°, 79°, 80°, 81°, 83°, 94°, 97°, 99°, 134° y 138°.

La senadora Isidori deja constancia de su voto negativo sólo en el artículo 134°.

El senador Giustiniani deja constancia de su voto negativo en los artículos 8°, 13°, 14°, 65°, 118°.

Votación Nominal

124° Período Legislativo - Ordinario - 27° Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL

PE-424/06

VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Observaciones: Dictamen de mayoría.
Sobre tablas

Acta N°: 2

Fecha: 6-12-06

Hora: 18:21:29

Tipo de Quórum: mas de la mitad de los
miembros del cuerpoMayoría Requerida: mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente: SCIOLI, Daniel

Desempate: NO

Apellido y Nombre	VOTO	Apellido y Nombre	VOTO
BAR, Graciela	AFIRMATIVO	MARIN, Rubén Hugo	AFIRMATIVO
BASUALDO, Roberto Gustavo	AFIRMATIVO	MARINO, Juan Carlos	AFIRMATIVO
BORTOLOZZI, Adriana Raquel	AFIRMATIVO	MARTINEZ, Alfredo Anselmo	AFIRMATIVO
BUSSE, Ricardo Argentino	NEGATIVO	MASSONI, Norberto	AFIRMATIVO
CAPARROS, Mabel Luisa	AFIRMATIVO	MASTANDREA, Alicia Ester	AFIRMATIVO
CAPITANICH, Jorge Milton	AFIRMATIVO	MAYANS, José Miguel Angel	AUSENTE
CAPOS, Liliana Delia	AFIRMATIVO	MAZA, Ada	AUSENTE
CASTILLO, Oscar Aníbal	AFIRMATIVO	MENEM, Carlos Saúl	AUSENTE
CASTRO, María Elisa	AUSENTE	MERA Mario Ruben	AFIRMATIVO
CLOSS, Maurice Fabián	AFIRMATIVO	MIRANDA, Julio Antonio	AFIRMATIVO
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.	AUSENTE	MORALES, Gerardo Ruben	AFIRMATIVO
CURLETTI, Miriam Belén	AFIRMATIVO	NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita	NEGATIVO
DANIELE, Mario Domingo	AFIRMATIVO	PAMPURO, José Juan Bautista	AFIRMATIVO
ESCUADERO, Sonia Margarita	AUSENTE	PERCEVAL, María Cristina	AUSENTE
FALCO, Luis Alberto	AUSENTE	PERSICO, Daniel Raúl	AFIRMATIVO
FELLNER, Liliana Beatriz	AFIRMATIVO	PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos	AFIRMATIVO
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina	AFIRMATIVO	PICHETTO, Miguel Angel	AFIRMATIVO
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro	AFIRMATIVO	PINCHETTI de SIERRA M. Delia	NEGATIVO
GALLEGO, Silvia Ester	AFIRMATIVO	QUINTELA, Teresita Nicolasa	AFIRMATIVO
GALLIA, Sergio Adrián	AFIRMATIVO	REUTEMANN, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GIOJA, César Ambrosio	AFIRMATIVO	RIOFRIO, Marina Raquel	AFIRMATIVO
GIRI, Haide Delia	AFIRMATIVO	RÍOS, Roberto Fabián	AFIRMATIVO
GIUSTI, Silvia Ester	AFIRMATIVO	RODRIGUEZ SAA, Adolfo	AUSENTE
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	AFIRMATIVO	ROSSI, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GOMEZ DIEZ, Ricardo	AFIRMATIVO	SAADI, Ramón Eduardo	AFIRMATIVO
GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.	AFIRMATIVO	SALVATORI, Pedro	AUSENTE
GUINLE, Marcelo Alejandro	AFIRMATIVO	SANCHEZ, María Dora	AFIRMATIVO
IBARRA, Vilma Lidia	AFIRMATIVO	SANZ, Ernesto Ricardo	AFIRMATIVO
ISIDORI, Amanda Mercedes	AFIRMATIVO	SAPAG, Luz María	AFIRMATIVO
JAQUE, Celso Alejandro	AFIRMATIVO	TAFFAREL, Ricardo Cesar	AFIRMATIVO
JENEFES, Guillermo Raúl	AFIRMATIVO	TERRAGNO, Rodolfo	AFIRMATIVO
KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia	AUSENTE	URQUIA, Roberto Daniel	AUSENTE
LATORRE, Roxana Itatí	AFIRMATIVO	VIANA, Luis Alberto	AFIRMATIVO
LEGUIZAMON, María Laura	AFIRMATIVO	VIGO, Elida María	AFIRMATIVO
LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo	AFIRMATIVO	VIUDES, Isabel Josefa	AFIRMATIVO
M. PASS de CRESTO, Laura	AFIRMATIVO	ZAVALIA, José Luis	AFIRMATIVO

Filosofía, Humanidades y Artes y la Facultad de Ciencias Sociales) ya han emitido los actos resolutivos mediante los cuales se proyecta la realización del congreso.

II

INSERC

1

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR URQUÍA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL (P.E.-424/06).

Señor presidente:

En el día de la fecha tratamos un proyecto de trascendencia mayúscula para el futuro de la educación en la República Argentina.

Luego de un pormenorizado análisis, y consultas a expertos en la materia, he formado una opinión favorable al texto y espíritu del proyecto en tratamiento; y en tal sentido mi voto contundente por la afirmativa.

En oportunidad de evacuar mis dudas, debo reconocer la invalorable colaboración de la vicepresidenta de la Comisión de Educación de este cuerpo, y del ministro de Educación que hoy nos honra con su presencia, quienes coinciden en afirmar que el artículo 67, específicamente los incisos *f)* y *k)* comprenden únicamente a los docentes de las instituciones de gestión estatal.

Por último quiero manifestar, que adhiero a todos los conceptos positivos vertidos en derredor de este proyecto de ley, y que por cuestiones de brevedad me remito a los mismos.

Señor presidente, señores y señoras senadores y senadoras, hoy damos a la educación argentina, un nuevo marco y un nuevo horizonte que descuento mejorará cualitativamente la educación de los argentinos y de las generaciones futuras.

4

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
NEGRE DE ALONSO

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL (P.E.-424/06).

Señor presidente:

La educación es la principal herramienta que tiene un país para satisfacer las expectativas de desarrollo y progreso de sus ciudadanos y como tal ha sido considerada siempre un aspecto central de la política nacional aunque en la práctica, no siempre se le ha dado la importancia que realmente tiene.

La ley 1.420, de enseñanza primaria, unificó al país en las décadas de las grandes o más pequeñas inmigraciones y se constituyó en una poderosa instancia de progreso cultural, social y económico que hizo posible que la Argentina fuera una tierra capaz de acoger y de brindar a sus habitantes las posibilidades de insertarse en la sociedad a partir de un propio proyecto de vida que resultó multiforme como lo era la población que construyó con su laboriosidad y su preparación una sociedad plural y dinámica, abierta al mundo y a la vez consciente de su identidad.

Cien años después, la Ley Federal de Educación, se propuso como una ley de la libertad, asumiendo la historia y el camino recorrido tanto por la Argentina como por el mundo entero, historia y camino que planteaban el desafío de actualizar la brillante intuición de la generación del ochenta, adecuándola a los cambios, a los progresos y a las nuevas situaciones para lograr una educación que la hiciera apta para responder a una exigencia nueva y antigua a la vez, la de posibilitar el desarrollo pleno de las nuevas generaciones de argentinos, como personas y como ciudadanos y la de darles los conocimientos

y la preparación requeridos para su inserción en una sociedad compleja, que ya entonces se perfilaba claramente como una sociedad del conocimiento en donde la riqueza de los pueblos, el verdadero motor del progreso social, está sin duda, en su educación y en su cultura.

Hoy la problemática que predomina en los debates y en las declaraciones públicas de funcionarios y expertos, de padres y docentes, es la de la inclusión educativa y la de hacer frente a lo que se constata como una fragmentación del sistema educativo nacional que profundizaría y agudizaría la exclusión. Cuestiones, sin duda preocupantes y que requieren nuestra máxima atención y diligencia.

Pero no podemos permitirnos el ceder a la tentación de adoptar recetas simplistas como la que podría postular una mirada ciertamente superficial para la cual la solución es siempre la ruptura con el pasado. Al contrario, se nos exige hoy la capacidad de mirar el pasado con objetividad para rescatar los aciertos y corregir los errores, para que podamos dar una respuesta adecuada al derecho humano fundamental de la educación en el siglo XXI. Una mirada que sea capaz de discernir lo esencial para asumirlo y profundizarlo, una mirada que advierta los cambios positivos, una mirada creativa para proponer instituciones y mecanismos, instancias de formación y de colaboración que hagan posible un compromiso de la sociedad en su conjunto para responder a la tarea grande y noble de educar.

Quizás se haya creado en la opinión pública una excesiva y, nos animaríamos a decir, falsa expectativa de que los problemas de la educación argentina encontrarán su solución con una nueva ley. Falsa expectativa que en gran parte responde a la mirada simplista de atribuir todos los fracasos a la ley anterior. Y este falso diagnóstico nos expone a su vez a un nuevo peligro, el de concebir una ley que por que pretenda dar respuesta a todos los problemas de la educación, no sólo termine por no dar respuesta a ninguno, sino que además, en su excesivo reglamentarismo, termine por sofocar los principios constitucionales, los fines y los valores, los derechos y las obligaciones esenciales de los educandos y de los agentes educativos.

La unidad de la ley 1.420 y la libertad de la Ley Federal de Educación no pueden concebirse en términos de antagonismo, en donde la afirmación de uno de ellos implique la negación necesaria de la otra. Al contrario, el desafío actual consiste en saber conjugar unidad y libertad para hacer posible inclusión y calidad. Subrayamos inclusión y calidad porque entendemos que no se trata de incorporar físicamente a los que han quedado fuera de la escuela en los tiempos recientes, también se excluye cuando dentro de la escuela no se brinda una educación que permita el desarrollo integral de la persona como sujeto físico-espiritual y en sus dimensiones biológica, afectiva, estética, ética, intelectual

y religiosa.

También se excluye cuando los educandos o los padres o tutores no tienen la real capacidad de elegir libremente la educación que esté de acuerdo con sus convicciones éticas y religiosas o cuando no se les permite participar del presupuesto educativo según lo exige la justicia distributiva, o cuando los docentes no tienen libertad para formarse de acuerdo con su cosmovisión.

Unidad, libertad, inclusión y calidad son valores que se potencian recíprocamente. Cada uno de ellos se convierte, por así decir, en condición necesaria para la existencia y el desarrollo de los otros. El desafío del legislador está en saberlos conjugar y traducir en normas jurídicas, en reglas de organización y de conducta que los asuman con fidelidad y puedan expresarlos en una ley de educación que sea la ley de la “madurez argentina”, que oriente la política educativa nacional y permita la inserción de las provinciales en ella.

Las consideraciones precedentes permean el espíritu y el articulado del dictamen en minoría que proponemos. En efecto, hemos trabajado en su redacción escapando a todo afán de reglamentarismo para reflejar lo esencial y constituir un verdadero marco jurídico de la educación argentina, intentando ser fieles a la naturaleza de una ley, conservando en ella lo que pertenece a su ámbito regulativo: los principios constitucionales, los derechos y obligaciones de los agentes educativos y de los educandos. La unidad del sistema educativo, sus fines y valores, su articulación, su gobierno, su financiamiento.

Un texto de ley que asuma nuestra forma de gobierno republicana, la cual se basa en que las políticas educativas en el marco de la legislación pertenecen al Poder Ejecutivo a través de su respectivo Ministerio, y que asuma nuestra forma de Estado federal, que no puede plantearse como un obstáculo a la unidad del sistema educativo sino como un principio de organización que asegura el delicado pero esencial equilibrio entre unidad nacional, particularidades provinciales y libertad de enseñanza.

En materia de principios, el presente dictamen asume, en su artículo 1º, que se da cumplimiento a la atribución del Congreso de la Nación otorgada por la Constitución Nacional a través del inciso 19 del artículo 75, el cual establece que corresponde al Congreso: “Sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales: que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de

las universidades nacionales.”; y a través del inciso 18 del mismo artículo, el cual dispone que corresponde al Congreso: “Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias, y al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria...”.

Dicha legislación, a cargo del Congreso de la Nación, debe hacerse, además, según lo establecido en el artículo 14 de nuestra Norma Fundamental, que reconoce la “libertad de enseñar y aprender”; conforme lo dejamos expreso en el artículo 2 del presente proyecto de ley.

En consecuencia de lo anterior se fija la responsabilidad principal e indelegable del Estado en todos sus niveles en lo relativo a la fijación y el control de la política educativa y a la garantía del acceso de todos los habitantes a una educación integral, de calidad, gratuita y obligatoria; conforme al artículo 3º del presente proyecto de ley.

Este dictamen, con los fines que reconoce al sistema educativo nacional y con los objetivos por nivel que persigue, asegura la real igualdad de oportunidades a todos los habitantes del país, cualquiera sea la región a la que pertenecen.

En el diseño y planificación de las políticas educativas y en el gobierno que a ese respecto le cabe al Estado, se reconoce la debida participación a la familia y a las organizaciones de la sociedad civil en razón de su competencia educativa, y a los directivos y docentes a los efectos de garantizar medidas y políticas integradas con el necesario consenso democrático de los agentes educativos.

Reconocemos el derecho y la responsabilidad principal de la familia como agente natural y primario de la educación y de aquellos sujetos en quienes ella delegare su acción.

Esta obligación y derecho de los padres están postulados por el artículo 14 de la Constitución Nacional y por tratados internacionales con rango constitucional.

El resto de los agentes educativos educa en la medida en que sea delegado para ello por los padres o por los educandos mismos cuando sean mayores de edad y en ejercicio de su libertad de aprender.

Este reconocimiento hace a la base democrática y popular de la educación argentina y asegura que los padres realmente puedan seguir la educación de sus hijos y los educandos mayores optar por lo que entienden su interés profesional, técnico y artístico, así como su visión del mundo.

En consecuencia de lo anterior, se asume el principio de la subsidiariedad del Estado en materia de acciones educativas en virtud de la exigencia constitucional de respetar la libertad de enseñar y aprender y de lo establecido en el inciso 19 del artículo 75 de la Constitución Nacional, ya mencionado pre-

cedentemente, que exige al Congreso de la Nación legislar respetando la participación de la familia.

Por otra parte, el principio de subsidiariedad se constituye en un principio constitucional de organización estatal desde el momento en que el artículo 1º de la nuestra Norma Fundamental asume para nuestro país una forma de Estado federal.

El principio de subsidiariedad exige que las sociedades mayores se abstengan de realizar aquello que puede ser obtenido por una sociedad de orden menor y ello en razón de que el protagonista primero de la sociedad es el hombre singular, y de que todo el orden social y sus formaciones están al servicio de su desarrollo como persona, desarrollo que encuentra una manifestación esencial en su relacionalidad, en su capacidad de establecer vínculos y relaciones interpersonales para el logro de fines personales y sociales, a través de un progresivo protagonismo social y cívico.

Nuestros padres constitucionales, que tuvieron la sabia intuición de esta exigencia humana y social y de las tradiciones y los valores de nuestras provincias y de sus autonomías, supieron consagrarlo en el principio constitucional del federalismo.

La subsidiariedad garantiza la libertad y el pluralismo de nuestra sociedad, necesarios para la democracia, que aplicada a la educación permite la formación de ciudadanos conscientes de su libertad y al mismo tiempo de su responsabilidad en la construcción de esa sociedad. Promueve la iniciativa creativa desde las mismas bases sociales, la subsidiariedad genera dinamismo social, participación y compromiso solidario con los demás.

Queremos una Argentina de pie, en la región y en el mundo.

La educación de nuestro país requiere un Estado fuerte, pero sería ilusorio pensar que la fortaleza del Estado de hoy debe ser la misma que la de la ley 1.420.

En aquel momento, sin duda la presencia del Estado aseguró un resultado satisfactorio en términos de unidad y de inclusión, pero la sociedad de fines del siglo XIX, era una sociedad monolíticamente estructurada, conformaba una pirámide cuyo vértice indiscutido era el Estado que tenía la autoridad y el prestigio para ocupar ese lugar.

En la actualidad, la sociedad y el Estado son muy distintos. Es indudable que la globalización ha recolocado al Estado contemporáneo y ha relativizado su autoridad en el orden internacional. Internamente, la gran novedad está en el emerger de la sociedad civil, distinta del Estado, con un dinamismo y una complejidad que potencian las tecnologías de la información y de la comunicación y que hacen que nuestras sociedades revistan una mayor complejidad y un mayor grado de diferenciación en sus funciones.

En este contexto, plantear la idea de una educa-

ción cuyo prestador principal sea el Estado, es prácticamente impensable.

¿Cómo concebir hoy la necesaria fortaleza del Estado para asegurar el acceso a una educación de calidad para todos? No es la multiplicación de tareas y de organismos estatales lo que garantizará la presencia del Estado que nuestra educación necesita, sino la insistencia de que el Estado se concentre en sus funciones esenciales de fijar leyes y políticas claras, de diseñar contenidos mínimos, de establecer claras reglas de acceso y de promoción dentro del sistema que sean aptas para dar una real orientación y conformación al sistema educativo, para contribuir a su unidad, para asegurar la inclusión y para garantizar la calidad. También, en su capacidad para establecer relaciones de subsidiariedad horizontal y vertical con la multiforme instancia de la sociedad civil. Así, recuperaremos realmente el protagonismo del Estado en la educación argentina.

En lo que hace al sistema educativo nacional, queremos manifestar que este dictamen pretende que se asuma como fin de la educación la formación integral de persona en todas sus dimensiones immanentes y también trascendentes, desde la transcendencia social y geopolítica hasta la religiosa que lleva a “Dios, fuente de toda razón y justicia”, como dice nuestra Constitución Nacional en su Preámbulo, con la misma intención de los Constituyentes de 1853 que entendieron asegurar en el ser absoluto las verdades y la rectitud del conocimiento y la equidad de la decisión libre que los constituyentes de 1949 entendieron asegurar y los constituyentes de 1994 también. Por eso, los valores éticos y religiosos no deben estar ausentes en ninguno de los niveles de enseñanza como objetivos por lograr, porque no pueden dejar de conseguirse, o al menos, poner al alcance de nuestros educandos junto a la verdad, el bien, la belleza, la solidaridad, las tradiciones, la Patria, los adelantos científicos, técnicos y culturales, la integración en la propia comunidad nacional, en la región y en el mundo entero.

La dignidad de la persona se basa en sus dimensiones éticas y religiosas, educar a la persona integralmente, exige que se reconozcan estas dimensiones como educables en el sistema educativo nacional.

Por otra parte, sería discriminatorio y excluyente un sistema que no reconociera la religiosidad de buena parte del pueblo argentino y lo hiciera renunciar a sus convicciones más profundas, a las que hacen a su identidad, en el momento de ingresar en el sistema educativo.

En esta misma motivación se basa la cláusula final del artículo 6º que reconoce la identidad cultural de los pueblos indígenas. Justamente, su cultura incluye sus valoraciones y creencias en materia religiosa, que estos pueblos tienen derecho a trans-

mitir a sus nuevas generaciones a través de la educación.

Por otro lado, no podemos ignorar que en el mundo actual se verifica una creciente sensibilidad social por el respeto y el cultivo de la religiosidad. Los adelantos de la ciencia, las posibilidades tecnológicas, las posibilidades de información y comunicación presentan un mundo sumamente complejo que permanentemente ensancha sus horizontes y cambia continuamente, esto genera una gran necesidad de certezas por una parte y de arraigo por otra, certezas y arraigo que encuentran respuesta en las comunidades de pertenencia culturales y sobre todo religiosas. De ahí la importancia de una educación que por su parte sepa responder a esas exigencias en el total respeto por la libertad y las convicciones de los padres y educandos.

Tampoco podemos ignorar la trascendencia cívica que tiene la religión en la vida y en el progreso cultural y humano de las sociedades. La historia de nuestras provincias a lo largo y a lo ancho del territorio nacional da cuenta de esa influencia positiva que ha sabido generar ciudadanos y cultura que ennoblecen a nuestro país.

Decíamos al principio que una mirada objetiva del pasado podía constituirse en una fuente de inspiración para discernir el futuro. Pues bien, la ley 1.420 no desconoció esta dimensión de la personal,; al contrario, proveyó para que fuera adecuadamente atendida.

Otro aspecto que nuestro dictamen en minoría en su artículo 7º entiende dejar claro y fuera de todo posible equívoco es la cuestión de la unidad del sistema educativo a un doble respecto:

a) En cuanto a su gestión, tanto estatal como privada, ambas integran el sistema educativo público argentino en razón de que ambas gestiones hacen por igual un aporte esencial al bien común de nuestro país.

b) En cuanto a su articulación, que será única en todo el país: un nivel preprimario obligatorio a partir de los 5 años, un nivel primario de 6 años y un nivel secundario de 6 años de duración.

Somos conscientes de las dificultades que pueden encontrar algunas jurisdicciones en adecuarse a esta normativa, pero entendemos que ninguna de esas dificultades puede ser más importante que la garantía de unidad en todo el territorio del país en la medida en que hace posible la igualdad de oportunidades a todos los habitantes sin distinción.

Para atender a esas dificultades, y dejando siempre a salvo tanto la movilidad vertical dentro del sistema como los derechos laborales de los docentes, hemos previsto un plazo de 6 años para que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puedan adecuarse a lo que establece la ley sin mayores perjuicios.

Una mención especial merece el artículo 10 del

presente dictamen, que reconoce la competencia de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para legislar a fin de garantizar la oferta de la educación inicial previa a los 5 años.

Se trata aquí de una aplicación del principio de subsidiariedad ya explicitado. En efecto, la naturaleza del servicio exige por un lado que se prevean todas las medidas tendientes a garantizarlo efectivamente para las familias que lo requieran y, al mismo tiempo, dejarlo en el ámbito jurisdiccional en el cual, por su cercanía con la familia, que tiene un rol especialísimo en esta materia, pueda realmente garantizar una educación inicial que contemple e integre el protagonismo que se espera de la familia.

El sistema educativo será además flexible para permitir la adecuación a nivel de las jurisdicciones y de las comunidades educativas, garantizando así el federalismo y la libertad de enseñanza; –articulado horizontalmente– para hacer posible la movilidad dentro del sistema evitando modalidades que excluyan al alumno y sus familias la posibilidad de modificar las decisiones adoptadas, teniendo en cuenta en particular las características de la educación secundaria; –articulado verticalmente– que asegure en cada nivel el cumplimiento de ciertos objetivos comunes, establecidos en el artículo 7º del presente dictamen, teniendo en cuenta la edad de los educandos de cada nivel y las dimensiones a educar de la persona y su inserción en la sociedad, permitiendo así el acceso idóneo nivel inmediatamente superior.

Se requerirán instrumentos legales para el régimen universitario que se ubica en el sistema educativo nacional a través del presente dictamen.

También se requerirán normativas ad hoc para los docentes a fin de tener en cuenta la distinta situación del que pertenece a la gestión estatal y a la privada, su perfeccionamiento y sus intereses profesionales. En efecto, el docente es el depositario vivo del acervo cultural de la Nación y de cada región o localidad y a la vez el promotor del adelanto cultural personal de cada comunidad.

Al docente de todos los niveles lo entendemos un profesional que debería tener sus propias asociaciones profesionales libres y su previsión social también específica. Esta situación se deja abierta en el presente dictamen porque tal vez tenga aún que madurar, pero no queremos dejar de lado el papel protagónico del docente en la dirigencia nacional, el descenso de su ubicación actual que es sólo aparente y accidental, motivado en buena parte por su situación económica, pero que continúa en la mente y el corazón del pueblo.

El maestro, el director, el profesor y el catedrático siguen sirviendo al bien común como el que más, porque forjan el futuro ciudadano y preparan las nuevas mentes y voluntades y los nuevos brazos para las ciencias, las técnicas, la creación artística

y el trabajo de nuestras industrias y nuestros campos. Por ello su labor deberá readquirir la elevada jerarquía que supone la proyección de la educación nacional.

Con respecto al financiamiento de la educación argentina queremos manifestar que, evidentemente, una de las pruebas más contundentes de la importancia real que una sociedad quiere dar a la educación está dada por los recursos que a ella destina.

Un paso importante en este sentido ha sido la reciente ley 26.075, de financiamiento educativo. Sus objetivos manifiestan una importante decisión política respecto del lugar y la jerarquía que entiende darse a la educación.

Sin embargo, consideramos que para que ese esfuerzo incida realmente en un mejor financiamiento de la educación, es necesario definir ante todo el principio que justifica, orienta y permite una vehiculización equitativa de dicho financiamiento. En efecto dicha ley nada dice respecto del fundamento por el cual el Estado tiene obligación de destinar parte de su presupuesto a solventar el gasto que demande la educación y el silencio de la ley a este respecto puede dejar esta cuestión al arbitrio de decisiones futuras que se tomen en materia presupuestaria, que, como todos sabemos, son un instrumento básico de la política económica de los gobiernos.

En otras palabras, se hace indispensable definir la naturaleza jurídica de esas asignaciones a fin de garantizar su efectivo destino a la educación, cuya responsabilidad principal reside, como dijimos, en los padres de familia. Aquí no se trata de asignar partidas a fines concordantes con las políticas que en distintos momentos puedan implementarse según las prioridades que los gobiernos se fijen; aquí se trata de la obligación jurídica, y como tal permanente del Estado en todos sus niveles, de distribuir los fondos que dedica a la prestación de servicios que se consideran vitales para los ciudadanos como son la salud y la educación.

Fondos que, por otra parte, los ciudadanos han contribuido a integrar y que esperan del Estado a ese respecto, nada más ni nada menos, que se constituya en agente de distribución, según criterios objetivos de justicia precisamente distributiva, que aseguren una asignación básica a todos los padres por igual y al mismo tiempo una asignación proporcional a determinados padres en función de ciertos criterios como la necesidad económica, la función social que las escuelas cumplen en su zona de influencia, la calidad del servicio que prestan, entre otros.

Se trata, como no es difícil advertir, de una exigencia de la libertad de enseñanza y sus destinatarios son todos los padres, tanto de la gestión estatal como privada en la escuela y los educandos en los restantes niveles de enseñanza. Se trata también

de una de las adquisiciones más sólidas del estado social que por esta vía distributiva genera igualdad de oportunidades y garantiza la inclusión en particular cuando se trata nada menos que de educación cuya potencialidad inclusiva es altamente significativa. Este principio ha sido asumido plenamente en el artículo 26 de este dictamen.

Esto no quita que otras fuentes acordes con el bien común nacional, aporten para la educación en todos los niveles, llámense fundaciones, empresas, asociaciones profesionales, fondos fiduciarios e incluso fondos provenientes del exterior mientras no vulneren nuestra identidad y las exigencias del bien común nacional, explicitados en los principios y valores que expresa este dictamen y en los que el Estado persiga como finalidad dentro de las exigencias objetivas de la dignidad humana y de su consecuente desarrollo cultural.

La adopción del criterio de justicia distributiva para el financiamiento de la educación de gestión estatal y privada, además de tratarse de una exigencia derivada del derecho-deber educativo de los padres de familia B como se ha dicho B responde también a la indelegable función del Estado de garantizar realmente el acceso a una educación de calidad para todos los habitantes y ello debido a que la educación es un bien público porque también lo es la necesidad de aprender y por lo tanto la de enseñar.

Se trata entonces de un servicio necesario, no contingente, en cuanto no se puede satisfacer o dejar de satisfacer sino que debe atenderse necesariamente; de allí el derecho del Estado a determinar el mínimo de condiciones que deben cumplir quienes asumen la responsabilidad de organizar los establecimientos donde se imparta y de allí también su consecuente obligación de garantizar y facilitar las condiciones –incluidos los recursos financieros– para que ello sea posible.

Dado el carácter público de la educación, sería contradictorio que la gestión educativa se privatizara en materia de financiamiento y luego fuera subsidiada por el Estado, porque se trata del servicio que más debe interesar a la Nación y no puede quedar librado a los avatares económicos de empresas, funciones, organizaciones, etcétera, sin dejar, obviamente que estos sujetos financien sus propias escuelas si así lo desean.

El financiamiento de la educación debe apoyarse en la porción de riqueza que un país decide poner al servicio de la educación de sus ciudadanos y ello requiere que dichos recursos estén a disposición de toda la comunidad mediante una justa distribución del presupuesto educativo.

Las partidas que se asignen a educación deben quedar aseguradas, dado el carácter necesario del servicio educativo, y no pueden quedar expuestas a criterios coyunturales o de políticas de los distin-

tos gobiernos. Deben encuadrarse en el marco de una política de Estado que asegure una educación de calidad para todos a la altura de los desafíos del siglo XXI.

En definitiva, el gasto público educativo resulta financiado por las familias, que son las unidades económicas que en última instancia pagan los impuestos; los directos porque recaen sobre el producido de su trabajo, su renta o patrimonio y los indirectos porque los pagan a través del consumo de bienes.

A *fortiori* entonces, la obligación del Estado de hacerlas partícipes del presupuesto educativo mediante criterios objetivos de justicia distributiva.

El criterio de la justicia distributiva asegura la inclusión y la igualdad de oportunidades. En los países en que fue adoptado, se lo concibió como un modo eficaz de promover el ejercicio de la responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos, como un medio para elevar la calidad del sistema educativo y como instrumento para permitir a las familias más pobres el acceso a la misma educación a la que acceden las más ricas.

El sistema ha sido adoptado tanto por países en vías de desarrollo como por países desarrollados –Bélgica, Chile, Suecia, Canadá, Colombia, Bangladesh, Guatemala, Belice, Lesotho, Polonia, Puerto Rico y los estados de Wisconsin, Milwaukee, Cleveland y Washington (USA), entre otros– y los estudios realizados sobre los resultados obtenidos revelan importantes logros.

Los países que lo asumieron como criterio universal –es decir, destinado a todos los sujetos en edad escolar obligatoria– tales los casos de Holanda, Bélgica, Suecia, Japón, Lesotho, Nueva Zelanda, entre otros, manifiestan haber obtenido los logros esperados además de una sensible mejora en la eficiencia del gasto educativo.

La justicia distributiva asegura la inclusión porque su criterio no es el de la igualdad en sentido aritmético –a todos los destinatarios el mismo monto–, sino el de la igualdad de oportunidades que supone una proporcionalidad en el aporte estatal.

La proporcionalidad incluye el que un mínimo establecido llegue a todos los destinatarios por igual y reclama además la asignación de un plus en razón de su situación económica, de sus particulares condiciones familiares, de su salud, entre otros, que requerirán una mayor participación proporcional en el presupuesto educativo. La justicia distributiva consiste en una asignación diferenciada de los bienes públicos.

Se trata de una decisión que un Estado social del siglo XXI no puede soslayar. El Estado de bienestar del siglo XX logró incluir a toda la ciudadanía mediante prestaciones universales que hicieron posible el acceso también universal a la salud y a la educación y generó amplias condiciones de igual-

dad de oportunidades.

La Argentina aun está en deuda con su pueblo respecto de los parámetros que exigió el *welfare state* del siglo XX, porque las intuiciones y los notables adelantos que logró el general Juan Domingo Perón en este sentido, lamentablemente, se truncaron posteriormente. Pero hoy, esa deuda debe ser saldada teniendo también en cuenta las exigencias del bienestar en la actualidad, que no requieren solamente que al ciudadano le lleguen efectivamente la salud y la educación, sino que exigen que en esa prestación se respete plenamente su dignidad, que se traduce en la posibilidad real de elegir por sí o por sus padres, en caso de ser menores, el tipo de educación, su modalidad, su prestador. Se trata de una exigencia de su libertad y de su madurez como ciudadano del siglo XXI. Se trata, también, de asumir la experiencia mundial de las décadas pasadas que indica que para promover igualdad no basta dar a todos lo mismo sino que exige además atender a las necesidades de cada sector de la población para asegurarle una real igualdad de oportunidades.

Relacionado con lo anterior, se requiere además complementar las disposiciones de la ley 26.075, de financiamiento educativo, en cuanto al control sobre el efectivo destino de los fondos a la educación. No es posible que su control quede exclusivamente en mandos de los poderes políticos. En las instancias de control deben tener una debida participación los destinatarios finales de los fondos, que son, como hemos dicho, los educandos, los padres y los directivos de los establecimientos educativos a todos los niveles y las organizaciones de la sociedad civil que por su experticia puedan colaborar con los anteriores en las actividades de contralor y seguimiento. A este efecto hemos previsto la norma del artículo 28 del presente dictamen.

En lo que respecta a los establecimientos educativos queremos expresamente manifestar que el presente dictamen ha buscado darles el mayor relieve posible, con la convicción de que es en ellos donde verdaderamente se gestarán los cambios necesarios para obtener una educación de calidad.

Las unidades educativas deben contar con la autonomía que requiere su papel protagónico en el proceso educativo. De ahí que a la escuela de gestión estatal se le reconozca una adecuada autonomía pedagógica y administrativa para que, dentro de los fines y objetivos de la ley, pueda adecuar contenidos y metodologías a las exigencias socioculturales de su entorno y permita a directivos, docentes, padres y alumnos asumir el compromiso y el protagonismo que la educación exige.

Se garantiza también la participación debida en el gobierno de la escuela a los directivos, docentes, padres, personal no docente y alumnos mayores. El objetivo de dicha participación será la de asegurar la calidad de la enseñanza que se imparta y la

posibilidad de recurrir, para ello, a todo tipo de asesoramiento, tanto internos como externos a la escuela misma.

En lo que al gobierno de la educación se refiere, en sintonía con lo anterior, el presente dictamen distingue las funciones del ministerio nacional con sus distintos organismos y la del Consejo Federal de Educación teniendo en cuenta la normativa que establece la finalidad de dicho consejo. Es de notar la participación de los padres y docentes en el planeamiento educativo tanto en el orden nacional como en las demás instancias.

El presente dictamen quiere mostrar al mundo que el país, en momentos de tantos cambios culturales y luego de las amargas experiencias del 2001, es capaz de enfrentar con seriedad en un cuerpo normativo suficientemente amplio y esencial, un aspecto central de su institucionalidad y de su solvencia cultural como es la educación.

En este punto de mi exposición debo detenerme para hacer un poco de historia y, así, referirme al financiamiento educativo:

1. Antecedentes de la coparticipación, 1862-1934:

Desde 1862, el gobierno nacional intervino activamente en la vida económica del interior del país enviando subsidios a las provincias con mayores necesidades financieras.

Estos “subsidios nacionales” –así eran llamados– hacían que las provincias más pobres fueran más dependientes del poder central.

Mediante la fundación del Banco Nacional en 1872, se intentó la creación de un sistema de créditos, y un sistema de moneda unificado, que se lograría finalmente en 1881.

La unificación territorial también estuvo apoyada por la creación de una importante infraestructura de transportes y comunicaciones: mensajerías y correo, primero y, más tarde, ferrocarriles, telégrafo y navegación a vapor; estas medidas incrementaron el gasto público.

Como consecuencia de la crisis de 1890 y de la disminución del comercio exterior, fuente privilegiada de recursos nacionales, se incorporaron otros recursos al erario nacional al establecerse los impuestos internos.

Entre 1890 y 1930 tanto la Nación como las provincias percibieron los impuestos al consumo sin que se hubiese establecido algún sistema. Las provincias, además, obtenían recursos de las contribuciones directas y las patentes.

Para entender la aparición del sistema de coparticipación federal es preciso tener en cuenta la situación que vivía el país desde fines de los años veinte.

En forma sintética puede decirse que el impacto

de la crisis internacional y la respuesta, con la conformación del Estado interventor, constituyen los puntos fundamentales que explican la formación del sistema.

Al ampliarse en los años 30 las funciones estatales y las instituciones para su cumplimiento, el Estado nacional requirió de mayores recursos fiscales. Esa necesidad se produjo en un momento en que las fuentes principales de ingreso estaban sufriendo los efectos de la crisis.

Entre los principales efectos que produjo la crisis se encuentra la disminución del comercio internacional, es decir, de las exportaciones y las importaciones, y el cambio en la corriente internacional de capitales.

Se detuvo el crecimiento que había dado lugar al desarrollo argentino y que se basaba en la producción y exportación de las manufacturas de las sociedades industrializadas.

Sin embargo, esta disminución de los ingresos vinculados con el comercio externo se compensó con el incremento de los recursos provenientes de las actividades económicas del mercado nacional y que, con el correr de los años, serían cada vez más importantes.

De esta forma, es posible pensar que los efectos de la crisis y las estrategias que se implementaron desde el Estado para hacerle frente condujeron a una reformulación del sistema de los ingresos fiscales con una importante modificación de las relaciones financieras entre la Nación y las provincias.

La coparticipación nació, entonces, dentro de una orientación de la política económica que tendió a concentrar los recursos en el Estado nacional, redistribuyendo a favor de las provincias donde se asentaban las principales actividades económicas.

Hasta 1934, el régimen de coparticipación federal no existió formalmente. Recién a fines de 1934, y con vigencia desde el primer día del año siguiente, se estableció el primer Régimen de Unificación y Coparticipación de Impuestos Internos con la sanción de la ley 12.139.

Así, se configuró un sistema por medio del cual el Estado nacional se hizo cargo de la recaudación de un conjunto de impuestos, que de otra forma serían recaudados por las provincias y los distribuyó (coparticipó) con las provincias adheridas.

2. Las primeras leyes, 1935-1972:

En 1934 el Congreso Nacional aprobó tres leyes. A saber:

a) La ley 12.139, de unificación de la recaudación de los impuestos internos.

b) La ley 12.143, que transforma el impuesto a las transacciones en impuesto a las ventas.

c) La ley 12.147, de prórroga del impuesto a los réditos.

La ley 12.139 distinguió dos situaciones provinciales que generó dos regímenes: uno que puede denominarse común y otro para las provincias productoras de vino, alcohol y azúcar.

Esta ley trató de resolver la transitoriedad de los impuestos internos que llevaban ya unos cuarenta años, pese a haber sido establecidos por períodos de un año (desde el impacto de la crisis de 1890).

Por otra parte, la ley intentó solucionar casos de duplicación de imposiciones fiscales (nacional y provincial).

De esta forma, la Nación se encontró con una nueva fuente de recursos, lo que provocó las posteriores modificaciones realizadas debido a la incorporación de nuevos tributos y a los cambios en los coeficientes de distribución primaria y secundaria.

En esta etapa, el sistema fue netamente devolutivo, ya que otorgaba prioridad en la distribución de la masa coparticipable a las provincias que aportarían el mayor volumen de recursos, es decir, aquellas con mayor población y desarrollo relativo.

Por otra parte, al tratarse de una ley convenio, se requería la adhesión de las provincias por intermedio de leyes de sus respectivas legislaturas: no todas se adhirieron.

Se fijó una coparticipación primaria del 82,5 % para la Nación y el 17,5 % para las catorce provincias existentes y la actual Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

A partir de la implementación de esta ley, los debates sobre la distribución de la renta tributaria encontraron su foro principal en las periódicas reuniones de ministros de Hacienda, que comenzaron a realizarse en 1946.

La política económica durante 1946-50 se caracterizó, entre otras cosas, por el intento de ampliar el mercado interno mediante un proceso de redistribución de los ingresos, fundamentalmente por el incremento de la ocupación y del nivel salarial.

Las condiciones financieras facilitaban las relaciones entre la nación y las provincias. La redistribución de los ingresos personales se dio, sin embargo, dentro de una tendencia a su concentración territorial en zonas que, por otra parte, concentraban crecientemente el empleo industrial. Particularmente la zona metropolitana de la ciudad de Buenos Aires. Esta zona, compuesta por la Capital Federal y los partidos aledaños del Gran Buenos Aires, constituyó el asentamiento industrial más importante del país.

Es conveniente observar el comportamiento del gasto público durante estos años. Por un lado, la aglomeración urbana de medios de producción y el mantenimiento de los flujos económicos también implicaba un incremento de los gastos públicos en las llamadas condiciones generales de la producción.

Por el otro, el Estado se hizo cargo de un con-

junto importante de empresas que se destinaron a producir servicios públicos y bienes industriales.

Así, en 1947 se nacionalizaron unas 30 compañías de capital alemán con las que se organizó la Dirección Nacional de Industrias Estatales y, un año después, se compraron los ferrocarriles británicos.

Desde 1955, y particularmente con el régimen legal establecido en 1958, se promovió desde la política económica un ingreso para el desarrollo de industrias básicas. El capital extranjero, mayoritariamente norteamericano, se dirigió a los sectores en cuyo fortalecimiento se esperaba sustentar la superación de la sustitución de importaciones.

Frente a la disminución del crecimiento industrial se propuso a partir de 1958 una política desarrollista que se propuso recuperar el capital externo. La restricción financiera de este momento endureció las relaciones entre Nación y provincias promoviendo la emergencia de la diversidad de intereses regionales y de sus contradicciones.

Para enfrentar la crisis y el consecuente estancamiento industrial, se adoptaron planes de estabilización monetaria, restricciones salariales y reducción del gasto público. Se trataba de estimular la productividad agropecuaria como fuente de producción de divisas.

A mediados de 1966 se interrumpió el ciclo constitucional con el derrocamiento de un gobierno que había intentado revertir en cierta forma algunos efectos de la aplicación de las políticas liberales y de estabilización.

En un intento de promover el desarrollo de la industria estabilizando la economía nacional, se trató de incrementar la eficiencia, trasladando los recursos hacia los sectores más productivos.

En la industria ello significó disminuir la protección aduanera y los subsidios, como el caso de los ingenios azucareros de menor productividad; incorporar capital externo que aportase tecnología; y, particularmente, en términos macroeconómicos, estabilidad monetaria reduciendo el gasto público e incrementando los ingresos a través de aumentos de impuestos y tarifas.

El régimen de coparticipación que surgió de los cambios de 1967 se caracterizó por dos aspectos principales: el criterio poco democrático con que se gastó y el ajuste fiscal del Estado nacional sobre las provincias.

De esta forma se interrumpió la tendencia al crecimiento de la parte provincial que desde 1947 caracterizaba a la evolución del sistema de coparticipación.

3. El nuevo régimen de coparticipación, 1973-1987:

En marzo de 1973 se dictó la ley 20.221, que unificó en un mismo régimen las disposiciones sobre coparticipación federal existentes. Se estableció con vigencia desde el 1° de enero de ese año hasta fines de diciembre de 1980.

Los objetivos centrales de la ley fueron aumentar la capacidad financiera al conjunto de las provincias y atender a la realidad de las provincias que tuviesen menor desarrollo.

El nuevo régimen de coparticipación (con sustitución de impuestos e incorporación de otros, como por ejemplo el IVA) fue resultado de la iniciativa del Poder Ejecutivo nacional, dentro de la implementación de su política económica.

La legislación de 1973 hizo culminar, en cierta forma, el largo proceso de formación de la coparticipación federal, al unificar dentro de un único régimen a tres aspectos: *a)* impuestos internos, *b)* réditos y similares y *c)* sustitutivo a la transmisión gratuita.

El incremento de la participación provincial fue mayor aún con el cambio de la legislación de fines de 1973. En este caso, y para el año que estaría vigente (1975), las provincias recibieron el 60,8 %.

Las siguientes dos modificaciones disminuyeron la participación provincial, si bien fueron producidos en situaciones políticas diferentes. El incremento en el gasto público entre 1973 y 1975 hizo que el Tesoro nacional acudiera en auxilio de las finanzas provinciales por medio de transferencias adicionales (ATN) a las correspondientes al régimen de coparticipación.

Durante el período 1977-1980 se efectivizó la transferencia a las provincias de los servicios de educación primaria, salud, obras sanitarias y de la Empresa Nacional de Agua y Energía Eléctrica, sin ninguna contrapartida en fondos.

Esto, sumado a la importante caída de la recaudación provincial, alteró el equilibrio en las relaciones financieras entre los diferentes niveles de gobierno. Al mismo tiempo, el gobierno decidió mejorar la situación de las empresas al disminuir la carga de los costos salariales eliminando los aportes para la previsión social y el FONAVI.

Simultáneamente, se decidió financiar esos gastos con fondos obtenidos de la recaudación tributaria y, así, destinar parte del monto recaudado en coparticipación. Pero, al proceder con una suerte de liquidación previa, la Nación hizo compartir a las provincias la carga de financiar los gastos del FONAVI y la previsión social.

El período iniciado a fines de 1983 presenta dos momentos diferenciados, caracterizados por el predominio de dos políticas económicas distintas. El primero de ellos, que se prolonga hasta junio de 1985, se caracteriza por una política que intenta enfrentar la crisis económica a partir de la promoción del crecimiento. El segundo, desde mediados de aquel mes, se manifiesta en el cambio de la orientación de la política económica y se centra en la contención de la inflación y en el ajuste económico.

Un punto importante fue que a fines de 1984 finalizó la vigencia de la ley 20.221, que había sido renovada el año anterior. Esto significó la ausencia

de regulación de la distribución fiscal entre la Nación y las provincias para 1985.

En términos estrictos, el convenio que había permitido funcionar al sistema federal de unificación y coparticipación impositiva durante 49 años dejaba de existir.

El año 1985 se inició sin régimen de coparticipación; de ahí que fuera preciso establecer algún principio para transferir a las provincias los fondos que, de haber habido coparticipación, les hubieran correspondido.

Para ello se tomaron en cuenta los fondos distribuidos en 1984 por coparticipación más los aportes del Tesoro nacional efectuados a las provincias. Esto llevó a las provincias a no contar de antemano con su presupuesto de administración hasta que se firmara el Convenio Financiero Transitorio de Distribución de Recursos Federales a las Provincias, el 13 de marzo de 1986.

4. La ley 23.548, 1988-991:

La nueva Ley de Coparticipación Federal fue sancionada el 7 de enero de 1988 como “Régimen transitorio de coparticipación federal”, aún vigente en la actualidad.

Define que formarán parte de la masa coparticipable, la recaudación de todos los impuestos existentes o a crearse, a excepción de los derechos de importación y exportación (Constitución Nacional), los impuestos cuya distribución prevean otros sistemas especiales de coparticipación, y aquellos impuestos nacionales con afectación específica vigentes al momento de la promulgación.

Dispuso la recaudación centralizada de determinados impuestos (ganancias, IVA, internos, combustibles, etcétera), y su distribución entre los distintos niveles de gobierno.

La distribución primaria que señala la ley es de 56,66 % para las provincias, 42,34 % para la Nación y 1 % en forma de aportes del Tesoro nacional.

A su vez, la distribución secundaria entre las provincias se realiza en porcentajes fijos para cada una: el 65 % se distribuye de acuerdo al número de habitantes, el 10 % de acuerdo con la densidad poblacional, el 25 % restante de acuerdo con la inversa del número de casas y automóviles por habitante.

Uno de los objetivos de la administración que asumió en julio de 1989 fue adecuar el Régimen de Coparticipación Federal a su política económica: racionalizar los gastos del gobierno nacional para lograr el superávit fiscal.

Así, la Nación disminuyó sus gastos privatizando empresas públicas y transfiriendo a las provincias la responsabilidad sobre servicios esenciales. Estos servicios tuvieron que ser solventados mediante los impuestos coparticipables. Entonces, ya durante los 90, la Nación les transfirió actividades a las provincias, sin contraprestación; éstas acumu-

laron un gran déficit y comenzaron a acordar distintos pactos fiscales.

5. Los pactos fiscales, 1992 hasta la actualidad:

La transferencia de servicios se inició en 1992, y fue incluida en el presupuesto de la administración pública nacional. Allí se fundamentó la capacidad de las provincias para absorber los servicios transferidos en que el aumento de la recaudación prevista, les permitiría solventar sin inconveniente el aumento de sus erogaciones.

El Pacto Fiscal I denominado “Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales”, comenzó a regir en septiembre del 92. Modificó la distribución primaria de los recursos, afectando parte de la masa coparticipable provincial para ser distribuida entre las provincias con desequilibrios fiscales y para atender el pago de las obligaciones previsionales nacionales y otros gastos operativos.

El Pacto Fiscal II, conocido como el “Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento”, fue firmado el 12 de agosto de 1993. Su objetivo fue equiparar la política tributaria de las provincias y mejorar la competitividad de los sectores productivos. Sin embargo, la recesión de 1995 demostró que el descenso de la presión tributaria provincial ocasionó la baja de los costos de producción, pero no benefició la capacidad productiva de las provincias.

Un hecho importante de esta etapa es la inclusión de la coparticipación de recursos en la reforma constitucional de 1994. Se transcribe a continuación parte del inciso 2 del artículo 75:

“...Una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, instituirá regímenes de coparticipación de estas contribuciones, garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos. [...] La ley convenio tendrá como cámara de origen el Senado y deberá ser sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara, no podrá ser modificada unilateralmente ni reglamentada y será aprobada por las provincias.

”No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por la ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso.”

Hoy la normativa vigente sigue siendo la ley 23.548 (sancionada en 1988) y sus modificaciones. Establecen el destino específico de lo recaudado por distintos impuestos y diferentes compromisos asumidos por la Nación y las provincias.

Aún queda pendiente el acuerdo entre la Nación y las provincias para sancionar una nueva ley que regule la coparticipación federal, en función de lo establecido por la reforma constitucional.

Es por ellos que en el artículo 30 transitorio del presente dictamen nosotros establecemos que “el Estado nacional se hará cargo de la totalidad del financiamiento de la educación secundaria prevista en la presente Ley de Educación Nacional hasta que se sancione la ley convenio sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias instituyendo regímenes de coparticipación federal, prevista en el inciso 2 del artículo 75 de la Constitución Nacional; transfiriendo en forma automática los fondos a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo con los parámetros objetivos que fije la reglamentación”.

En este sentido queremos expresar que para lograr el éxito esperado de esta ley de educación nacional es fundamental abordar seriamente el tema del financiamiento educativo.

Se impone necesariamente corregir la distorsión financiera que hoy existe en la relación Nación-provincias. Esto se puede apreciar si tenemos en claro cuál es la foto inicial que va a tener la aplicación de esta norma.

Esa foto implica que la inversión en educación del conjunto de las provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires insume el 73 por ciento del gasto consolidado de educación nacional, ciencia y técnica, mientras que la inversión en educación que realiza el Estado nacional insume el 27 por ciento de la inversión total consolidada en educación, ciencia y técnica en el país.

Es decir que sobre un total de 100 correspondiente al gasto en educación, 73 se lo afronta con la atención de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires y el 27 restante se lo afronta con lo que atiende el Estado nacional.

Dichos porcentajes constituyen un claro indicador de las competencias, servicios y funciones de cada nivel de gobierno en la Argentina de hoy, aun con ambas inversiones devaluadas.

Pero si, por otra parte, lo contrastamos con el presupuesto nacional para el año 2007 que estamos por tratar, vemos que los recursos que manejará la administración nacional en 2007 superan los 126.000 millones de pesos, y que las transferencias en concepto de coparticipación al conjunto de las provincias no superan el 30 %.

De este modo vemos que del total de los recursos, el 77 por ciento lo administrará el Estado nacional y el 23 por ciento, las provincias; exactamente lo inverso a la relación gasto en educación-recursos.

Es decir, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tienen a su cargo el 73 por ciento del gasto consolidado en educación, reciben el 23 por ciento de los recursos nacionales y federales, y la Nación, que tiene a su cargo sólo el 27 por ciento del gasto en educación, retiene el 77 por ciento de los recursos nacionales y federales.

Quiere decir que si en paralelo no revertimos o rectificamos esa situación, que hasta que no se dicte la nueva ley de coparticipación no es otra cosa que rectificar todas las asignaciones específicas que tuvieron como única dirección financiar los déficits nacionales, la caja de jubilación nacional y la deuda pública, a lo que aportaron todas las provincias argentinas, la foto o el punto de partida del financiamiento de la educación estará totalmente distorsionado.

Entonces, nos parece que la discusión pasa por que las provincias deben poder afrontar el 73 por ciento, que es lo que tienen a su cargo, y la Nación debe disponer de los recursos para afrontar el 27 por ciento que tiene bajo su competencia.

De manera que de esos 30.000 millones de pesos que habrá de inversión adicional hasta el año 2010 —ya que el gasto consolidado va a pasar de 23.000 a 53.000 millones de pesos—, el 73 por ciento lo tienen que afrontar las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 27 por ciento el Estado nacional.

Esto supone que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben disponer, de arranque, de los recursos necesarios para atender la competencia que implica el 73 por ciento de la responsabilidad educativa.

Además, deben disponer de estos recursos con carácter de automaticidad, no dentro del presupuesto nacional, cuyos recursos no tienen la característica de automaticidad.

Por su parte, la Nación, de arranque, deberá retener o disponer de los recursos necesarios para financiar el 27 por ciento restante, que incluye universidades, ciencia y tecnología y otros programas vinculados con la educación. Esto se logra necesariamente rectificando la relación financiera Nación-provincias de arranque; si no, empezamos mal. La ley puede ser muy buena, pero los números no van a dar para que cada nivel de gobierno cumpla su competencia.

Por ello insistimos en la necesidad de la sanción de la ley convenio que establece el inciso 2 del artículo 75 de la Constitución Nacional, previo a todo tratamiento del tema del financiamiento educativo, si es que queremos seriamente encarar el saneamiento de la educación.

6

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
FELLNER

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL (P.E.-424/06).

Señor presidente:

Ante todo quisiera resaltar dos cuestiones, por un lado destacar el esfuerzo realizado por este gobierno a lo largo de estos seis meses de intenso debate en el que se propuso como meta sumar aportes en la elaboración de la nueva ley de educación, a través de consultas con diversos actores sociales y, por otro lado, destacar también la importancia de la metodología empleada para incorporar las distintas posiciones y acordar consensos fundamentales que quedaron plasmados en el articulado del proyecto que hoy sometemos a consideración del cuerpo.

Legitimado por la opinión y participación de la ciudadanía, el proyecto que hoy estamos tratando incorpora los deseos y aspiraciones de quienes intervinieron en la fase de análisis y debate previo a la presentación oficial de la iniciativa: padres, docentes, dirigentes, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, intelectuales, empresarios, miembros de la academia, de la ciencia y de la cultura, entre otros.

A poco de haberse iniciado el período de sesiones ordinarias del corriente año, cuando recibimos al señor ministro de Educación en el seno de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, coincidimos todos en trabajar en la elaboración de una nueva ley de educación nacional que contara con el más alto nivel de aceptación no solo entre los actores educativos sino también de la sociedad en su conjunto.

Desde nuestra perspectiva, compartimos la convicción de que la educación no debe ser abordada sectorialmente sino con una visión de conjunto, para que cumpla la función que todos esperamos de ella: ser una pieza clave para la estrategia de desarrollo nacional.

Son muchos los aspectos destacables de la nueva ley de educación: el reconocimiento y garantía del derecho a la educación como bien público y social, la unificación de la estructura, la extensión de la obligatoriedad hasta el final de la enseñanza media, universalización de la oferta de la educación inicial, la implementación de estrategias efectivas para atender la situación de los jóvenes y adultos que no completaron su escolaridad obligatoria, el fortalecimiento de los instrumentos de alcance nacional para garantizar el derecho a una educación de bue-

na calidad, entre los cuales cabría destacar: 1) definición de contenidos y núcleos prioritarios de aprendizaje; 2) evaluación de resultados; 3) formación inicial y continua de los docentes; 4) fortalecimiento de los programas destinados a los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

A mi juicio uno de los puntos más trascendentes de la presente iniciativa es el reconocimiento y respeto a la diversidad cultural de nuestro país y de la identidad latinoamericana.

La presencia viva de la diversidad cultural y el plurilingüismo son partes sustanciales del patrimonio cultural de la humanidad. La riqueza que expresa esta presencia lamentablemente fue negada a largo de nuestra historia. En este sentido agregó que aquellas sociedades que no asumen su multiculturalidad y plurilingüismo pierden gradualmente su memoria histórica, y con ello sus saberes, conocimientos y prácticas.

Como corolario de este reconocimiento, celebro que quede plasmado en el texto de la nueva ley de educación la implementación de la educación intercultural bilingüe, como una modalidad del sistema educativo nacional y la incorporación del conocimiento de los pueblos indígenas y sus derechos como parte de los contenidos curriculares comunes a todas las jurisdicciones.

Los pueblos indígenas tuvieron una destacada participación durante el proceso constructivo de análisis y debate de las propuestas.

Se realizaron dos instancias de consulta, con la participación de más de 107 representantes de pueblos indígenas. La primera de ellas se llevó a cabo los días 12, 13 y 14 de junio del corriente año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La segunda instancia se concretó en la misma ciudad los días 19 y 20 de septiembre y contó con la presencia de más de 35 representantes indígenas.

El derecho de los pueblos indígenas a una educación intercultural bilingüe, así como el reconocimiento de su preexistencia étnica y cultural, fueron incorporados a la Constitución Nacional con la reforma de 1994, y con ello el Estado nacional asumió la pluriculturalidad y pluriétnicidad de nuestro pueblo, su respeto y valorización.

No está de más recordar que el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional establece:

“17. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos.

“Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus re-

ursos naturales y a los demás intereses que los afectan. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.”

La mención expresa de este inciso en el artículo 1º del presente proyecto representa un hito histórico para toda nuestra sociedad, ya que lo incluye como uno de los principios transversales a toda la ley de educación nacional.

En nuestro país, habitan numerosos pueblos indígenas, cuya preexistencia étnica y cultural reconoce la Constitución Nacional, entre ellos cabe mencionar a los siguientes pueblos: Kolla, Omaguaca, Diaguita Calchaquí, Tilián, Chané, Chulupí, Ava Guaraní, Mbya Guaraní, Mapuche, Tonocoté, Atacama, Ocloya, Tapiete, Lule, Wichí, Toba, Mocoví, Ranquel, Huarpe, Tehuelche, Tupí Guaraní, Pilagá, Surita, Vilela, Selk' Nam, Chorote, Toara; cada uno con sus particularidades culturales, estilos de vida y lenguas.

El derecho a la educación es un instrumento fundamental para lograr un desarrollo equitativo y el respeto por la diversidad cultural como uno de los valores primordiales de nuestro país.

Es por ello que uno de los fines y objetivos de la política educativa nacional es fortalecer la identidad nacional, basada en el respeto a la diversidad cultural, lo que implica el respeto y valorización de la multiculturalidad de todos los educandos, su cultura, lenguas y estilos de vida.

En este sentido, puede afirmarse que se recogen los lineamientos de la Convención sobre Diversidad Cultural de la UNESCO (2005), que reconoce que la diversidad cultural debe valorarse y preservarse en provecho de todos, que debe fomentarse el diálogo entre culturas a fin de garantizar intercambios culturales más amplios y equilibrados en pro del respeto intercultural y una cultura de paz.

Sin duda alguna, la educación es también un medio efectivo para reducir la pobreza y contrarrestar la discriminación, cualidades que se encuentran reflejadas en diversos tratados internacionales, de los cuales nuestro país es parte. Entre ellos cabe destacar la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Carta Internacional de Juegos y Deportes Tradicionales y la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Marco de Acción de Dakar, titulado “Educación para todos: cumplimiento de nuestros compromisos colectivos, especialmente con respecto a los niños indígenas, y en par-

ticular a las niñas”.

La presente iniciativa incorpora la educación intercultural bilingüe como una de las modalidades del sistema para los niveles de educación inicial, primaria y secundaria. A través de esta modalidad, se pretende que los educandos indígenas reciban una educación que contribuya a preservar y fortalecer las pautas culturales, la lengua, la cosmovisión e identidad étnica de los pueblos a los que pertenecen; a desempeñarse activamente en un mundo multicultural y a acceder a los niveles más elevados de educación.

Para lograr este desafío se requiere de un espacio de participación y trabajo conjunto entre las autoridades educativas, los docentes y los pueblos indígenas. Es por ello que se ha previsto la creación de mecanismos de participación permanente en las instancias de definición de políticas educativas, como de planificación y gestión de los procesos de enseñanza y aprendizaje correspondientes a esta modalidad del sistema.

En cuanto a los docentes, se prevé su formación específica, inicial y continua, para cubrir las necesidades en los distintos niveles del sistema.

Finalmente, cabe destacar que se impulsará la investigación sobre la realidad sociocultural y lingüística de los pueblos indígenas, que permita el diseño de propuestas curriculares, materiales educativos pertinentes e instrumentos de gestión pedagógica.

El otro aspecto que reviste una significación especial desde la perspectiva del reconocimiento y respeto a la diversidad cultural es la inclusión del conocimiento de los pueblos indígenas y sus derechos en los contenidos curriculares comunes a todas las jurisdicciones, ya que será sin duda una forma efectiva de lograr un mayor respeto y valoración hacia los mismos.

La educación que se proyecta en nuestra sociedad, implica el desarrollo de una metodología que implemente la reflexión a partir del aprendizaje, de la aceptación del otro y del respeto por sus valores, cultura y lengua.

Para ello, se adecuarán los planes y programas de estudio, incorporándoles la temática de la diversidad cultural y el conocimiento de los pueblos indígenas y sus derechos, posibilitando de este modo que la educación sea un vehículo para la comprensión de las culturas de los pueblos indígenas en todas las escuelas del país.

En este sentido el proyecto de declaración sobre Derecho de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, adoptado por el Consejo de Derechos Humanos el 29 de junio del presente año, establece expresamente en su artículo 16 que “1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones, que deberán quedar debidamente reflejadas

en la educación y la información pública. 2. Los Estados adoptarán medidas eficaces, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas interesados, para combatir los prejuicios y eliminar la discriminación y promover la tolerancia, la comprensión y las buenas relaciones entre los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la sociedad”.

En un tiempo no muy lejano, los contenidos curriculares hicieron que muchos educandos en nuestro país desconozcan sus raíces culturales e históricas.

Finalmente, considero que la afirmación de la propia cultura, permite establecer relaciones socioculturales simétricas y armónicas, básicas para desarrollar una ciudadanía moderna y democrática, que construye y promueve derechos a partir del reconocimiento de la heterogeneidad. Esta ciudadanía, basada en la diversidad cultural, acrecienta la participación de todos los actores sociales y enriquece a la sociedad en su conjunto.

7

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA MASTANDREA

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL (P.E.-424/06).

Señor presidente:

Expreso mi coincidencia con los objetivos generales del proyecto sometido a dictamen y con aquellas modificaciones que se introdujeron a raíz del estudio en comisión, que permitió incorporar algunas sugerencias recibidas de sectores involucrados en el quehacer educativo.

Adhiero a aspectos relevantes de este proyecto que se presenta al tratamiento de esta Cámara, porque:

- Introduce la obligatoriedad de la educación secundaria, así como propone la universalización de la sala de 4 años y la jornada extendida.

- Permite la jerarquización de modalidades educativas tales como la especial, la permanente de jóvenes y adultos, la rural, la intercultural bilingüe, la realizada en contextos de privación de la libertad y la domiciliaria y hospitalaria.

- Permite tender a la unificación de la estructura educativa en todo el país, con seis o siete años de educación primaria y seis o cinco, respectivamente de educación secundaria, lo que implica entre otras cosas volver a otorgar nivel secundario a dos o tres años de la actual EGB3.

- Permite accionar a favor de la equidad educativa con la promoción de la igualdad educativa y la prioridad a otorgar a las escuelas y alumnos más necesitados y a favor de la calidad, favoreciendo la profesionalización docente.

Sin embargo, considero que el dictamen que he firmado en general aún carece de las inclusiones ne-

cesarias para lograr una política educativa que ataque las bases mismas de la inequidad educativa en la Argentina y sus problemas de calidad. Refleja el mismo paradigma dominante en el sistema educativo actual, que nos ha llevado a la brecha que observamos en los resultados educativos entre regiones y entre segmentos socioeconómicos. Reitero enfáticamente esta posición ante la certeza que estamos perdiendo la oportunidad de atender realmente las necesidades de las regiones y de los grupos más pobres de nuestro país. Argentina no tiene un sistema educativo inclusivo y que otorgue oportunidades de salir de la pobreza a los pobres, sino que el sistema actual reproduce y profundiza las condiciones desfavorables iniciales de la población. Algunas provincias han ingresado en lo que se denomina “los círculos viciosos de pobreza”, y no hay forma de que puedan hacer la inversión que se necesita para salir de esto sin ayuda especial. La forma más efectiva que tiene una persona que nace en un hogar pobre de salir de la pobreza, es logrando una educación de calidad desde edades tempranas. La probabilidad, en el sistema actual de lograr esto, es mínima. Tenemos escuelas pobres para los pobres. Los resultados educativos, en la mayoría de los indicadores que se midan, dependen de las condiciones socioeconómicas de las familias. La escuela dejó de ser un factor de movilidad social, convirtiéndose en el principal factor de perpetuación de la pobreza. En las provincias más pobres del país, ni siquiera la capacidad económica de la familia asegura buenos resultados educativos. En esas provincias, la minoría que termina la escuela secundaria tiene altas chances de fracasar en las buenas universidades del país central. Se requiere de un esfuerzo especial para dotar a las provincias, los municipios, las escuelas y las familias en situación desfavorable del apoyo necesario para revertir esta situación y brindar una educación de calidad para todos. Esto implica políticas e inversiones en fortalecimiento institucional, pedagógico, económico y social que permitan compensar las falencias locales y familiares para proveer una enseñanza de calidad, pero principalmente, para lograr las condiciones necesarias para lograr los aprendizajes por parte de una población infanto-juvenil en desventaja. No sólo debemos hablar de educación, sino de condiciones de educabilidad.

Cito a Néstor López, quien en el libro *Equidad educativa y desigualdad social*, una publicación de la UNESCO, dice que “el concepto de educabilidad... apunta a identificar cuál es el conjunto de recursos, aptitudes o predisposiciones que hacen posible que un niño o adolescente pueda asistir exitosamente a la escuela, al mismo tiempo que invita a analizar cuáles son las condiciones sociales que hacen posible que todos los niños y adolescentes accedan a esos recursos para poder así recibir una educación de calidad.

Y relata, en la misma publicación:

“Cuando uno habla con los docentes, es habitual escucharlos decir que, en las condiciones en que vienen sus alumnos, resulta muy difícil garantizar una clase ordenada y buenos resultados en el aprendizaje. La mala alimentación, la falta de materiales, el cansancio, la imposibilidad de concentrarse son indicios de una cotidianidad de los niños que dificulta el buen aprovechamiento de las prácticas educativas. Hay zonas en nuestra región en que la exclusión es tal que un número importante de niños no pueden ir a la escuela pública de su barrio, pues no cuentan con el mínimo de recursos materiales o con una cotidianidad que haga posible el acceso a esas instituciones. También los maestros se quejan por el nivel de descontrol, violencia o indisciplina de sus alumnos.

Es recurrente que uno termine dialogando con docentes que se sienten desbordados, detenidos frente a realidades en las cuales les es sumamente difícil desplegar sus aprendizajes y su experiencia. Ante escenarios que les resultan ajenos, sus herramientas pierden eficacia. Los alumnos que entran a sus escuelas poco tienen que ver con aquel alumno para el cual fueron entrenados, para aquel ante el cual sí sabrían qué hacer. Pareciera que hay algo que estos docentes esperan y que no existe”.

Y no estoy de acuerdo con la postura que sostiene que estos problemas no deben abordarse desde una ley de educación; en todo caso no deben abordarse solamente desde una ley de educación.

No es lo mismo fortalecer la capacidad de enseñar de la escuela que la capacidad de aprender de los alumnos. Pero para ello es necesario otorgarles a las escuelas que atienden los grupos vulnerables la capacidad para compensar las desventajas con las que llegan a la escuela esos alumnos, que debiera incluir ofrecer programas de nutrición, salud, apoyo psicopedagógico, seguimiento familiar, inclusión social y cultural. Muchas escuelas y docentes cumplen estas funciones, pero lo hacen como una carga, considerando que éstas no son funciones de la escuela. Es entendible que esto no sea función del docente, pero es inadmisibles decir que esto no es función de la escuela. Sostener que la escuela debe estar focalizada en enseñar, independientemente de las condiciones de aprendizaje de los alumnos, es perpetuar la situación de inequidad sin posibilidades de revertirlas. El comedor escolar, el apoyo psicopedagógico, el seguimiento familiar, y toda aquella herramienta que permita atender las limitaciones al aprendizaje, no deben ser consideradas una “carga” sino funciones de la escuela, que en el caso de las escuelas que atienden esta población en riesgo, deben ser reconocidas, fortalecidas y remuneradas en forma especial. Sin dudas, el perfil de los docentes y profesionales que deben actuar en este tipo de escuela es diferente. Se debe reconocer en la ley que debemos lograr una escuela

la con capacidad especial para atender a los grupos en riesgo y disponer de las normas que permitan actuar en este sentido. Es la escuela, como institución, la que está en condiciones de dar oportunidades a nuestra población y a ayudar a revertir la situación de inequidad de las regiones y de la sociedad argentina. La escuela es la única institución que está geográficamente extendida en todo el país, y la única por la cual prácticamente todos los ciudadanos del país pasan en un momento de su vida. Es la herramienta más poderosa que tiene el Estado para focalizar una política social sustentable: dar la oportunidad a sus ciudadanos de formarse para una participación social, cultural y económica inclusiva.

Sé que esta visión de la escuela y de “educabilidad” como eje de política se contradice con la visión y percepción que tienen algunos gremios docentes y aun el ministro de Educación, quienes ponen énfasis en rescatar el carácter educativo de la escuela y el rol docente del maestro, y así lo refleja este proyecto de ley. Pero con ese paradigma, esta ley está hecha para el niño promedio que sólo existe en el ideario docente y se encuentra sólo pálidamente reflejado en los barrios de clase media de las provincias ricas. Lamentablemente, esta ley le será útil a menos del 30 % de nuestras familias. Pero no es suficientemente útil para el Chaco, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, Salta, ni para los barrios y escuelas pobres de nuestro país.

Los ejes de mi propuesta de modificación a parte del articulado de la ley son:

1. Inclusión del concepto de “educabilidad” como derecho y garantía del Estado.
2. Inclusión de objetivos de convergencia territorial y entre segmentos socioeconómicos, identificando las regiones y escuelas de atención prioritaria y creando indicadores objetivos y medibles de seguimiento.
3. Otorgamiento de mayor transparencia al resultado educativo con la accesibilidad de los resultados educativos a los padres y realización de evaluaciones educativas de carácter internacional.

1. Para incluir el concepto de educabilidad, propongo la modificación de los siguientes artículos:

a) Como derecho y garantía:

Artículo 4º: El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente, de calidad y condiciones de educabilidad para todos los/as habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones sociales y las familias.

b) Como fin y objetivo:

Artículo 11: *a) Asegurar una educación de calidad y condiciones de educabilidad con igualdad de oportunidades y posibilidades, sin desequilibrios regionales ni inequidades sociales.*

c) Como política de promoción de la igualdad educativa:

Artículo 80: Las políticas de promoción de la igualdad educativa deberán asegurar las condiciones necesarias para la inclusión, el reconocimiento, la integración y el logro educativo de todos/as los/as niños/as, jóvenes y adultos en todos los niveles y modalidades, principalmente los obligatorios. El Estado asignará los recursos presupuestarios con objeto de garantizar la igualdad de oportunidades y resultados educativos para los sectores más desfavorecidos de la sociedad. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, proveerá textos escolares y otros recursos pedagógicos, culturales, materiales, tecnológicos y económicos a los/as alumnos/as, familias y escuelas que se encuentren en situación socioeconómica desfavorable, y a tal efecto, impulsará y promoverá programas que faciliten las condiciones de educabilidad de los/las niños/as y jóvenes en el ciclo obligatorio apoyando –con acuerdo de las jurisdicciones– que las escuelas de atención prioritaria, por sí o por concertación con las áreas de atención local –tal como salud y desarrollo social– garanticen la cobertura de las condiciones mínimas de educabilidad, en particular, el acceso a nutrición adecuada, atención primaria de la salud, apoyo psicopedagógico y prevención y atención de las adicciones y violencia.

Agrego la modificación del artículo 18, para poder diferenciar y focalizar apropiadamente las intervenciones materno-infantiles e infantiles.

Artículo 18: Para garantizar el desarrollo infantil, la educación inicial constituye una unidad pedagógica y comprende a los/as niños/as desde los cuarenta y cinco (45) días hasta los cinco (5) años de edad inclusive. Está organizada en dos (2) ciclos. El primero desde los 45 días hasta los dos (2) años de edad inclusive y el segundo desde los tres (3) años hasta los cinco (5) años de edad, siendo obligatorio el último año.

2. Objetivos de convergencia territorial y de reducción de la brecha educativa entre grupos socioeconómicos:

La brecha en calidad y resultados educativos entre regiones de la Argentina y entre grupos socioeconómicos es la característica más dominante en el análisis de nuestro sistema educativo. Revertir la inequidad educativa requiere focalizar y priorizar las políticas compensatorias en esas regiones y grupos. Esto implica primero, identificar las zonas y las escuelas de atención prioritarias sobre la base de indicadores objetivos, para actuar sobre estas zo-

nas y focalizar la ayuda en ellas de una manera transparente. Necesariamente, la acción sobre regiones y grupos vulnerables requiere una mayor inversión per cápita en ellas. Esta mayor inversión es necesaria para llevar adelante una política de intervención integral, no sólo para asegurar la capacidad de enseñar –que eso está en el espíritu del proyecto de ley– sino, principalmente, de establecer condiciones mínimas de educabilidad, que se menciona en la primera parte. Las transferencias para políticas compensatorias por parte de la Nación a las provincias se han duplicado en el año 2005 con respecto al promedio del último quinquenio de los 90 con una distribución que están más enfocadas hacia las Provincias pobres que las ricas. Pero aun así, Chaco ya recibió \$ 40 pesos por alumno/año en carácter de programas compensatorios. Mientras Chaco utiliza entre el 25 y el 30 % de su presupuesto en educación, equivaliendo a alrededor de 1.000 pesos por chico por año.

Los 40 pesos de la Nación, aunque bienvenidos, no alcanzan para generar un impacto notable en las diferencias de inversión que se hacen en distintas jurisdicciones del país, ni tienen relación con las necesidades. Las provincias con mayores niveles de pobreza, que mayor esfuerzo deben hacer para dar oportunidades a los niños y jóvenes, son las que menos capacidad de invertir tienen. Y se refleja a que todas –a pesar de asignar una parte importante de su presupuesto provincial– invierten menos por alumno que el promedio del país. Este proyecto de ley debería tener como objetivo explícito la convergencia en indicadores educativos entre las regiones y los grupos socioeconómicos del país y su seguimiento y acompañar esos objetivos con una mayor asignación presupuestaria –objetiva, transparente– como acción positiva hacia estas regiones y grupos con necesidades mayores.

Como políticas de promoción de la igualdad educativa:

Artículo 79: El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, fijará y desarrollará políticas de promoción de la igualdad educativa, destinadas a enfrentar situaciones de injusticia, marginación, estigmatización y otras formas de discriminación, derivadas de factores socioeconómicos, culturales, geográficos, étnicos, de género o de cualquier otra índole, que afecten el ejercicio pleno del derecho a la educación. A tal efecto, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología establecerá las zonas de atención prioritaria en el país, mientras las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establecerán escuelas de atención prioritaria sobre la base de criterios objetivos de tal modo que alcancen a la mayoría de los niños y jóvenes en situación de pobreza, sea que asistan a escuelas de gestión estatal o privada.

Artículo 83: El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y las autoridades jurisdiccionales diseñarán estrategias y establecerán las disposiciones y arbitrarán los mecanismos necesarios para que se dé prioridad efectiva a las zonas de atención prioritaria y a las escuelas de atención prioritarias en todas las asignaciones de recursos que se dispongan en el marco de esta ley, así como también de la ley de educación técnica y de la ley de financiamiento educativo, se incrementen los centros de estimulación y atención temprana, se otorguen condiciones de educabilidad, se establezca el régimen de jornada extendida para que los/as docentes con mayor experiencia y calificación se desempeñen en las escuelas que se encuentran en situación más desfavorable, para impulsar una mejora en los niveles de aprendizaje y promoción de los/as alumnos/as sin perjuicio de lo que establezcan las negociaciones colectivas y la legislación laboral.

Artículo 83: a) Se determina que, como mínimo, dos tercios de los recursos que aporte la Nación en virtud de la ley de financiamiento deben invertirse en las zonas de atención prioritaria, garantizando que la inversión total en educación por niño/a y joven en edad de educación obligatoria sea equivalente en todo el país. En cumplimiento de estas normas, las provincias deben informar anualmente la inversión de recursos por escuela y por alumno, tanto en concepto de remuneraciones docentes como de inversiones en infraestructura, equipamiento y mantenimientos corrientes.

3. Otorgamiento de mayor transparencia y accountability al sistema educativo con la accesibilidad de los resultados educativos a los padres y realización de evaluaciones educativas de carácter internacional:

Los principios de educabilidad y priorización del gasto en las zonas y escuelas más pobres tienen el objetivo de lograr mayor equidad y calidad educativa. Pero de la única manera que se pueden identificar las intervenciones exitosas y hacer los ajustes de las políticas para el logro efectivo de los objetivos, es si consideramos indicadores y metas específicas que permita hacer un seguimiento de los resultados. Lamentablemente, el proyecto de ley bajo análisis vuelve al sistema educativo más opaco y con menos posibilidades de participación de los padres a través de información, de actuar y tomar decisiones concernientes a la calidad de educación que recibe su hijo. Sin metas claras, tampoco permite hacer los ajustes de programas e intervenciones que permitan ir tomando las buenas experiencias y desechando aquellas que no aportan a los objetivos priorizados.

Así como es importante obtener información adecuada sobre los resultados educativos en el país, también debieran ser obligatorias las evaluaciones

internacionales que permitan observar el resultado educativo de Argentina comparado con el resto del mundo. Los resultados de la evaluación PISA del año 2000 nos demostró que los resultados educativos de nuestro país no son estadísticamente diferentes que los de Brasil, Chile y México, la calidad de educación que creíamos caracterizaba a la Argentina en Latinoamérica pasó a ser parte del mito colectivo. Debemos redoblar los esfuerzos para acercar los resultados del sistema educativo a estándares de países desarrollados. Pero sólo evaluando y ajustando las políticas en este sentido, se podrá recorrer ese camino. Se me ha respondido que la evaluación se considera en una ley posterior; yo creo que no; no se puede incluir a medias, se incluye o no se incluye.

Por ello, solicito la incorporación de las siguientes modificaciones:

CAPÍTULO III

Información y evaluación del sistema educativo

Art. 94. – a) La evaluación del sistema educativo tendrá como finalidad:

- a) Contribuir a mejorar la calidad y la equidad de la educación;
- b) Orientar las políticas educativas;
- c) Aumentar la transparencia y la eficacia del sistema educativo;
- d) Ofrecer información sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de equidad y calidad educativos que demuestren una convergencia entre las zonas menos desfavorecidas y las más desfavorecidas de Argentina; entre grupos socioeconómicos, y entre Argentina y el mundo, a efecto de orientar las acciones correctoras que sean necesarias.

Art. 94. – b) El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología arbitrará los medios y dispondrá los recursos para que el país participe sistemáticamente en las siguientes pruebas internacionales de evaluación de la calidad:

- a) PISA: evalúa centralmente lengua nacional y matemática a los 15 años de edad;
- b) PIRLS: evalúa comprensión lectora a los 10 años de edad;
- c) TIMSS: evalúa matemática y ciencias.

A los efectos de asegurar una transparencia de la información, los resultados de las instituciones educativas deben estar disponible para consultas de la sociedad y los padres:

Artículo 97: El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y las jurisdicciones educativas harán públicos los datos e indicadores que contribuyan a facilitar la transparencia, la buena gestión de la educación y la investigación educativa. La política de

difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones resguardará la identidad de los/as alumnos/as y docentes /Quitar: e instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización/, en el marco de la legislación vigente en la materia.

Artículo 97: a): Los datos e indicadores correspondientes al sistema educativo a que hace referencia el artículo 97 son, como mínimo, los siguientes:

- a) Evaluación del desempeño académico de cada escuela y su evolución;
- b) Contabilidad de la inversión por alumno y por escuela;
- c) Evaluación del cumplimiento de los objetivos y normas definidos en la presente ley y en la Ley de Financiamiento Educativo, descriptos en el artículo 99 de esta ley;
- d) Evaluación del proceso de asignación creciente de recursos del presupuesto a las zonas prioritarias y escuelas prioritarias determinadas de acuerdo a los artículos 83 y 83^a) de la presente ley;
- e) Indicadores objetivos de convergencia territorial y entre grupos socioeconómicos.

Artículo 99: El Poder Ejecutivo nacional, a propuesta del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, elevará anualmente un informe al Honorable Congreso de la Nación dando cuenta de la información relevada y de los resultados de las evaluaciones realizadas conforme a las variables estipuladas en el artículo 95, de la presente ley, y de las acciones desarrolladas y políticas a ejecutar para alcanzar los objetivos postulados en esta ley en la Ley de Financiamiento Educativo. A tal efecto, a los indicadores señalados en la información solicitada por ley 25.030 y el seguimiento de los indicadores de la ley 26.075, se adicionarán indicadores objetivos que permitan observar la convergencia de resultados educativos entre las regiones del país y entre grupos socioeconómicos.

Señor presidente, esta no es una ley para un período gubernamental, debieran establecerse las bases del largo plazo.

Es cierto que no podremos tener una ley perfecta, pero sí podemos y debemos hacer la mejor ley de educación posible que asegure la calidad y equidad educativa. Por ello es que considero que la iniciativa en consideración resulta adecuada y conveniente al momento de sancionar una nueva ley de educación nacional.

Por lo expuesto, solicito la consideración de las propuestas efectuadas en el presente, a fin de incluirlas en la sanción que este cuerpo otorgue al proyecto.

8

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
CAPARRÓS

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL (P.E.-424/06).

Señor presidente:

El gobierno nacional impulsa una nueva ley de educación nacional colocándola como una prioridad de gestión. Para ello abrió un amplio y plural debate en el transcurso de este año que culmina.

En nuestro país sucesivamente la educación sufrió vaivenes, avances, retrocesos y llegamos al presente con la necesidad de hacer los ajustes correctos para poder alcanzar el objetivo de una óptima educación para nuestros niños, que son los garantes del futuro. Nosotros somos los responsables de llegar a concretar este objetivo y ésta es justamente la razón por la que se discute hoy este proyecto de ley.

Con el desarrollo del sistema educacional y, particularmente, la importancia otorgada a la educación profesional a nivel universitario, muchos hombres y mujeres extendieron su período educacional hasta sus primeros años de adultos. Hasta no hace mucho tiempo se vivía en la creencia de que las etapas educacionales de la vida básicamente terminaban y debíamos hacer la transición desde la educación al trabajo.

Durante las últimas décadas hemos entrado en un período de la historia de la humanidad que se caracteriza por transformaciones sin precedentes. La transformación más importante, sin embargo, tiene que ver con el hecho paradójico de que el cambio se ha convertido en un rasgo permanente de nuestras vidas. El cambio se ha convertido en la norma y la estabilidad más bien en una excepción. Hoy resulta difícil imponer valores a las nuevas generaciones debido al cúmulo de información globalizada y a la revolución de los sistemas de comunicación.

Estamos viviendo una etapa de transición signada por la batalla entre la cultura moderna y la posmoderna. Los esfuerzos destinados a que la gente elija un sistema de valores y creencias en particular genera el efecto secundario de informarle que son libres de elegir diferentes sistemas de valores, cuando antes los sistemas de valores no se elegían.

En primer lugar, hemos alcanzado un nivel en el desarrollo de la ciencia y la tecnología que facilita un ritmo extraordinariamente acelerado de invención e innovación. Esto está produciendo una renovación permanente de nuestras interpretaciones, de nuestro equipamiento y de los bienes que consumimos. Nos enfrentamos a la obsolescencia permanente de marcos de referencias, herramientas y productos. Disciplinas completas –tomemos el ejemplo de la biología– se han modificado totalmente en

unas pocas décadas. Un biólogo con el conocimiento disponible en los años cincuenta no sería capaz, hoy, de aprobar exámenes de primer año en la universidad.

En segundo término, entre todos los cambios tecnológicos que han tenido lugar durante la segunda mitad de este siglo, el más importante es la revolución en el procesamiento de la información.

Asimismo, en todo el mundo estamos presenciando el proceso de expansión de libertad personal más espectacular que jamás se haya visto en la historia. Nunca antes la gente de diversos países y culturas había defendido tanto el valor de la libertad individual.

Vivimos en una sociedad que evoluciona velozmente. Para no permanecer afuera es preciso colocarse a la altura de las circunstancias, y eso es justamente la principal tarea que tiene hoy en día el legislador, estar cerca de la gente, palpando los problemas sociales para transformarlos en una solución que se ajuste a tal necesidad. La revolución más importante se dio en el conocimiento, en la velocidad de la información, y la nueva legislación en materia educativa no sólo debe zanjear los inconvenientes que generaron la poco exitosa ley federal de educación, sino adaptarse a este mundo posmoderno. Necesitamos una educación que consolide la identidad nacional que forme a los ciudadanos para la democracia preparándolos también para la competitividad futura y el crecimiento económico.

Cabe entonces realizarse una pregunta fundamental: ¿para qué se cambia el actual sistema educativo?

La crisis educacional que enfrentamos hoy (que afecta al sistema escolar y universitario) tiene mucha relación con lo que hemos expresado. Todos sabemos cuán seria ha llegado a ser esta crisis educacional.

Nuestro sistema educacional sigue educando para un tipo de sociedad que ya no existe. En la sociedad actual el aprendizaje se ha convertido en un imperativo de toda la vida. No hay etapa alguna de nuestra vida en la que no se requiera aprender. Esto debe comprenderse en la escuela, en la formación de cada uno de los argentinos.

No es raro escuchar que nuestras escuelas no están preparando a los alumnos para lo que la sociedad les exige. La forma en que esto se ha entendido, sin embargo, es que la calidad de la educación ha disminuido y, por lo tanto, ya no es la misma de antes. Ciertamente hay algo de eso. El problema principal, sin embargo, no es sólo que la calidad de la educación se haya deteriorado, sino que la sociedad de hoy no es la misma de antes. Lo que se necesitó entonces en educación y funcionó, simplemente ya no funciona. Lo que hoy se necesita no se está enseñando. No sólo hay que garantizar el

acceso a la educación sino también la igualdad de los resultados educativos.

Hoy, además, la urgencia la pobreza y la exclusión en la que ha caído casi el 50 % de los habitantes de nuestro país exigen volver a definir el papel de la educación en la sociedad de manera impostergable. La educación es la clave de la estrategia del desarrollo nacional.

Con la reciente sanción de la ley 26.075 se asegura una financiación creciente de la educación, la ciencia y la tecnología hasta alcanzar un equivalente al 6 % del producto bruto interno. Sin embargo, en el sano convencimiento de que ello no es suficiente, el gobierno nacional convocó a un debate amplio sobre la nueva Ley de Educación Nacional en un proceso rara vez visto en gobiernos democráticos en nuestro país. Encabezado por el ministro de la cartera educativa se dio amplia participación a los sectores involucrados en la elaboración de la propuesta definitiva del Poder Ejecutivo, que se plasmó en el proyecto de ley que estamos tratando.

Los objetivos de la ley son ambiciosos, y así debe ser para recuperar la tradición educativa y el ímpetu de la ley 1.420, pero para los nuevos tiempos.

Educar para la democracia: en especial promover la participación en la toma de decisiones y el diálogo como forma de resolver los conflictos, y garantizar un lugar donde los docentes también puedan expresarse democráticamente.

Promover una estructura unificada para todo el país, con objetivos y criterios pedagógicos que tengan en cuenta los nuevos desafíos sociales, mediante la formación continua de los docentes, facilitada por un mecanismo permanente de actualización curricular periódica. En este sensible aspecto, la adecuada articulación con las instituciones académicas de educación superior es vital para garantizar la necesaria calidad, como así también el preponderante rol del Instituto Nacional de Formación Docente.

Educar para la productividad y el crecimiento: vivimos en un mundo de mercados globales y de competencia global. Compramos y vendemos desde y a todo el mundo. Los nuevos productos e innovaciones en los procesos de producción y circulación –sin que importe dónde se originan– tienen un efecto casi inmediato en nuestro trabajo y en nuestras vidas. Nos hemos transformado en un mundo estrechamente entrelazado, interdependiente. Competimos con gente que muchas veces ni sabemos que existe, cuyos idiomas muchas veces no sabemos hablar. En la sociedad de hoy la gente se cambia de empleo en un promedio de menos de cuatro años, cambia su carrera tres o cuatro veces durante su vida, debe reconciliarse constantemente con el hecho de que las competencias aprendidas durante los primeros años de educación pierden su vigencia y

que se requieren nuevas habilidades para mantener la competitividad. La educación para la productividad y el crecimiento debe tener presente estas nuevas condiciones.

Educar para la integración y la justicia social implica no consentir que algún argentino quede marginado de la educación, ya que inevitablemente todo aquel que no se capacite será un excluido de la sociedad del mañana. Hoy, por todo lo antedicho, esta afirmación es irrefutable. Carecer de educación es quedar excluido. El conocimiento y la educación son en sí valores que generan dignidad.

Una educación que permita la integración plena de las personas con necesidades especiales es otro aspecto que el proyecto no dejó de lado, así como también la expresa obligatoriedad de la formación secundaria, la garantía al acceso a una segunda lengua, comprender a las familias como agente educador fundamental, reconocer la importancia estratégica de la televisión, el dominio de las tecnologías de la información como contenido curricular ineludible, la articulación del área educativa con las de Desarrollo Social y de Salud, la doble escolaridad del nivel primario, la división de la educación secundaria en ciclo común y orientado, el rol preponderante del Consejo Federal de Educación, la atención psicológica, psicopedagógica y médica a los jóvenes del nivel secundario, la promoción de la educación artística, la educación permanente de jóvenes y adultos, la educación rural como modalidad especial, la educación de los privados de libertad, de los impedidos de asistir a los establecimientos educacionales por problemas de salud, la promoción del cooperativismo y mutualismo escolar, la vinculación de las escuelas secundarias con el mundo de la producción y el trabajo, ya esbozado en la reciente ley de educación técnica. Todos estos son, entre otros, los aspectos más valiosos de la propuesta.

El éxito de nuestro país depende de que el Estado asuma el rol que le compete fijando la política educativa, sin perjuicio de las particularidades de cada provincia, fortaleciendo la educación pública y supervisando adecuadamente a los establecimientos privados.

En un futuro no muy lejano, con la revolución que generaron las comunicaciones, el utópico sistema de educación tutorial, un alumno, un profesor puede transformarse en una realidad. Estemos preparados para ello, y así conocer las máximas potencialidades y talentos de los individuos.

Como manifestó el ministro de Educación en los fundamentos de su documento base para el debate plural de la nueva ley: “La educación es una de las áreas más sensibles a través de las cuales una sociedad se orienta hacia el futuro. Porque educar es un modo de invitar a protagonizar la historia y a imaginar mundos cada vez mejores. Es ofrecer las condiciones que nos permitan pensar colectivamente

acerca de nuestra realidad y contribuir a transformarla”.

9

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR BASUALDO

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL (P.E.-424/06).

Señor presidente:

En julio de 2003, con el número de expediente D.-3.529/03 presenté un proyecto solicitando la reforma de la Ley Federal de Educación, como fruto de la preocupación de padres, docentes y la comunidad educativa toda, ante los resultados contraproducentes de la misma.

Hoy veo con beneplácito que en nuestro país se ha instalado el debate, dando amplia participación al conjunto de la ciudadanía, a los fines de elaborar el presente proyecto de educación nacional.

Al debatir el proyecto de educación argentina, realmente hemos puesto en discusión el modelo de país que queremos para las generaciones futuras, esta ley debe ser una herramienta fundamental para la transformación del país.

La educación es la variable clave de la estrategia de desarrollo nacional, es decir que es uno de los desafíos fundamentales para el futuro de la sociedad.

En el campo de la educación es donde se perfila el futuro de los países y el bienestar de las futuras generaciones. Sólo con una educación de excelente calidad se pueden lograr los objetivos de justicia social, crecimiento económico y ciudadanía democrática.

Debemos recuperar y reafirmar los valores que fueron erosionados en las últimas décadas, reconociendo al trabajo como eje principal de la dignidad de las personas, el reconocimiento y el respeto de la diversidad, la importancia de la solidaridad y el esfuerzo de todos, la integración y la participación social y económica, recuperando la convicción de que el Estado debe constituirse en garantía de estos valores.

Debo destacar que esta ley rescata los principios constitucionales que aseguran la responsabilidad indelegable del Estado en materia educativa, la participación de la familia y la sociedad; la igualdad de oportunidades y posibilidades educativas sin discriminación alguna, los principios de gratuidad y equidad de la educación pública; del reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos; la promoción de la investigación y el desarrollo científico y tecnológico.

Esta nueva ley de educación reivindica al pueblo argentino que hasta la fecha ha sido un campo experimental imponiendo la estructura de 9 años de EGB y 5 años de Polimodal, con resultados adver-

sos.

Hoy volvemos a la tradicional escuela primaria y secundaria, pero con 13 años de escolaridad obligatoria, bilingüismo y reformas en los contenidos curriculares. Además se garantizan la autonomía y autarquía de las universidades.

Es digno destacar el rol preponderante de la familia en el proceso educativo, convencido de que la familia educa y el Estado enseña.

Señor presidente, adelanto mi voto positivo, no obstante considero que en el artículo 134 debería establecerse en forma taxativa los años que comprende la educación primaria y los años que comprende la educación secundaria, y que su implementación debería ser a partir de la vigencia de la presente ley a los fines de otorgar tranquilidad y certeza tanto a padres como a alumnos en lo referido a la ubicación del octavo año de escolaridad obligatoria, decisión que considero, debe ser tomada por este Congreso y no delegada por un plazo de 6 años al Ministerio de Educación y al Consejo Federal de Educación.

Para concluir, creo que en esta etapa que vive nuestro país, en la cual estamos saliendo de un contexto económico y social crítico, es necesario y fundamental proponer este nuevo proyecto educativo nacional que surja de las orientaciones del nuevo proyecto de país.

10

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA FELLNER

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL (P.E.-424/06).

Señor presidente:

El proyecto de ley nacional de educación impulsada por el Poder Ejecutivo, que modifica la estructura del sistema educativo, su financiamiento, la carrera docente y los contenidos curriculares es un esfuerzo de iniciar un proceso de transformaciones del sistema educativo que conduzcan a la mayor calidad en la formación de los habitantes y ciudadanos de nuestro país.

En los últimos años, diagnósticos y evaluaciones han señalado la insuficiencia de los aprendizajes escolares, lo inadecuado de las prácticas docentes y de la organización de las instituciones escolares. El reconocimiento de estas falencias tuvo como efecto que se creara, en la base del sistema y en el conjunto de la sociedad, una necesidad de cambio que se tradujo en la aceptación de un proceso de transformación educativa.

Por ello, resulta importante señalar lo oportuno de este proyecto de ley, consensuado con todos los actores sociales involucrados, del cual adelanto mi voto afirmativo.

A. Puntos principales

a) La educación entendida como derecho

1. El proyecto en su artículo 1° establece que la norma propuesta resulta reglamentaria del artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Otorga a la educación el carácter de bien público y establece en su artículo 2° que será política de Estado y prioridad nacional. No se admitirá ninguna forma de mercantilización.

2. En este sentido, confiere a la educación un estatus de derecho personal y social garantizado por el Estado nacional comprometiéndose a no adherir a ningún tipo de acuerdo internacional que le imprima a la educación otro carácter ajeno a este fin.

3. En este orden de ideas, prescribe en su artículo 10 que el Estado nacional no suscribirá tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo o que aliente cualquier forma de mercantilismo de la educación pública.

b) Garantiza la vigencia del Sistema Federal

4. Si bien el Estado nacional garantizará el derecho a la educación y tendrá la responsabilidad principal e indelegable de proveerla asumiendo mayores responsabilidades, las escuelas provinciales mantendrán su estatus y no volverán al ámbito nacional.

5. En el proyecto se descarta que se produzca una “transferencia de escuelas” de las provincias a la Nación, la nueva ley educativa tiene por fin unificar los contenidos. Se trata así de un intento por lograr “homogeneidad” en los contenidos y terminar con la “fragmentación” entre diferentes distritos.

6. El objetivo es fijar “núcleos de aprendizaje comunes para todo el país; todos deben saber matemática, lengua, ciencias naturales y sociales, una base de conocimientos sobre los que se asienten los saberes locales.

7. Sin embargo, es cierto que propone una nueva forma de relación entre las jurisdicciones locales y la Nación, en especial a través del Consejo Federal de Educación, que asegura la cohesión del sistema educativo y concertación de la política educativa.

8. En este sentido, el Consejo Federal de Educación acordará y definirá los criterios organizativos, los modelos pedagógicos y otras disposiciones a fin de implementar la jornada extendida o completa.

9. Las decisiones del Consejo Federal de Educación tendrán carácter obligatorio y se deberá asistir a las provincias que atraviesen situaciones de emergencia educativa.

10. Se crearán seis consejos consultivos, para facilitar la participación social en el gobierno del sis-

tema educativo, con representantes de las organizaciones gremiales, de las universidades, de las organizaciones del mundo del trabajo y la producción, del ámbito académico y del sector privado:

–Consejo de Políticas Educativas.

–Consejo Económico y Social.

–Consejo de Actualización Curricular.

–Consejo de Educación y Medios de Comunicación.

–Consejo de Evaluación de la Calidad.

–Consejo Asesor del Instituto Nacional de Formación Docente.

c) Estructura del sistema educativo nacional

11. La estructura del sistema educativo nacional tendrá ocho modalidades y cuatro niveles: inicial, primario, secundario y superior. Se adjudicará el carácter de modalidades de la educación común a la educación en contextos particulares y de gran importancia social: la educación rural, la intercultural bilingüe, la educación hospitalaria y domiciliaria, y la educación en contextos de privación de la libertad, que se agregan a las ya existentes: educación técnica, educación de jóvenes y adultos, educación especial y educación artística.

12. Se establecerá una estructura unificada, en la cual coexistirán sólo dos modelos: 6 años de primaria y 6 de secundaria, o 7 de primaria y 5 de secundaria.

13. La educación inicial será universal y estará organizada en dos ciclos. El primero para chicos de 45 días a 2 años y el segundo, desde los 3 a los 5 años. La sala de 5 es obligatoria. En los próximos años se pretende sumar también la sala de 4. Asimismo, se extiende la obligatoriedad escolar hasta la finalización de la educación secundaria.

14. Gradualmente se establecerá en la escuela primaria la jornada completa obligatoria.

d) Capacitación docente

15. Se creará el Instituto de Formación Docente, para garantizar una formación inicial y continua de maestros y profesores común y plural.

16. El último año de la formación docente para el nivel inicial y primario será un año de residencia en escuelas en compañía de maestros experimentados.

17. La carrera docente permitirá ascender sin dejar la sala de clase y los docentes de todo el país tendrán derecho a un salario digno y a la negociación colectiva nacional y jurisdiccional.

e) Nuevos contenidos obligatorios de la enseñanza

18. Formarán parte de los contenidos curriculares comunes a todas las provincias el reclamo de la soberanía de las islas Malvinas, la construcción de la memoria colectiva acerca de la dictadura iniciada el 24 de marzo de 1976 y el fortalecimiento de la perspectiva regional latinoamericana.

19. La educación sexual y la educación ambiental formarán parte de los objetivos y los contenidos de toda la educación. Se establecerá la obligatoriedad de una segunda lengua.

20. Será promovido en forma universal el acceso y el dominio de las nuevas tecnologías.

21. Habrá renovación curricular periódica.

f) Promoción de la igualdad y la inclusión social

22. Se fijarán políticas de promoción de la igualdad educativa para enfrentar situaciones de injusticia o marginalidad.

23. Se creará la señal de televisión educativa con contenidos educativos para fortalecer las políticas de equidad y calidad.

g) Financiamiento

24. El proyecto de ley solo hace referencia a este tema en su artículo 9° en el que establece que el Estado garantiza el financiamiento del Sistema Educativo Nacional en base a la Ley 26.075 (de Financiamiento Educativo) que establece que para el año 2010 el presupuesto consolidado del Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destinado exclusivamente a educación no será inferior al 6 % del PBI.

Respecto de las partidas destinadas a educación, ciencia y tecnología para el presupuesto nacional del año 2007, éstas totalizan 10.808 millones de pesos, representando el 9 % del gasto total presupuestado. En relación al año 2006 la participación del gasto en educación, ciencia y tecnología se incrementó un 8,6 % como porcentaje del gasto total y el monto destinado a este rubro un 23,6 % en términos reales.

Respecto de las obras necesarias en infraestructura y el incremento salarial docente, para poder dar cumplimiento a algunos puntos de este proyecto de ley, como por ejemplo la jornada de doble escolaridad obligatoria en el nivel primario y la dedicación docente full time, el financiamiento provendría de lo dispuesto en el artículo 2° de la ley 26.075 (de Financiamiento Educativo), especialmente en sus incisos h) e i):

Art. 2° – El incremento de la inversión en educación, ciencia y tecnología se destinará, prioritariamente, al logro de los siguientes objetivos:

h) Fortalecer la educación técnica y la formación profesional impulsando su modernización y vinculación con la producción y el trabajo. Incrementar la inversión en infraestructura y equipamiento de las escuelas y centros de formación profesional.

i) Mejorar las condiciones laborales y salariales de los docentes de todos los niveles del sistema educativo, la jerarquización de la carrera docente y el mejoramiento de la calidad en la formación docente inicial y continua.

11

SOLICITADA POR LA SEÑORA GIUSTI

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL (P.E.-424/06).

Señor presidente:

Somos protagonistas de una jornada histórica para la educación argentina. Aprobaremos en esta sesión, gracias a la voluntad política de los bloques de los partidos que representan a la enorme mayoría de nuestro pueblo, un conjunto de decisiones educativas fundamentales para el presente y para el mañana de nuestra patria.

En primer término, estamos ampliando la escolaridad obligatoria desde los cinco años de edad hasta la finalización de la educación secundaria y la duración de la jornada escolar para los alumnos de la educación primaria. Quienes pensamos que es bueno que nuestros niños y adolescentes asistan a la escuela debemos estar satisfechos: estamos legislando que haya más tiempo escolar durante más años de la infancia y de la adolescencia. Estamos avanzando en el mismo sentido que hace un par de años este Parlamento debió asegurar los ciento ochenta días de clase para todos los alumnos de la Argentina.

En segundo lugar, estamos afianzando el rol protagónico del Estado como garante del derecho individual y social a la educación lo que significa la formal y definitiva sepultura del concepto de la educación como bien de mercado, sujeto a la “oferta” y a la “demanda”. Tal protagonismo, puesto en evidencia por los esfuerzos de la mayor parte de los gobiernos provinciales y del Poder Ejecutivo nacional a partir del año 2002, ha sido y será mucho más a partir de esta ley, una poderosa herramienta para la reconstrucción social y económica de nuestro país; una herramienta para empezar a vislumbrar, como en reiteradas oportunidades ha señalado el presidente Kirchner, “la salida del infierno” en el que nos sumergieron los tiempos de desgobierno y corrupción.

El protagonismo y las responsabilidades en materia educativa son y serán compartidas por el Estado nacional y los estados provinciales. Estamos legislando en el marco del artículo 75, incisos 18 y 19 de la Constitución: ejerciendo legítimas atribuciones del Congreso Nacional. Estamos dictando un auténtico “plan de instrucción general” para la formación de todos los argentinos, de todos los rincones de nuestro país, sin diferenciaciones arbitrarias y sin exclusiones de ningún tipo; estamos sancionando una auténtica “ley de organización y de base de la educación” nacional que fija metas que abarcan, comprenden y resignifican los objetivos de las recientes leyes de financiamiento educativo y de educación técnico-profesional, que define políticas públicas y líneas de acción de largo plazo, más allá de las urgencias antes identificadas

y prioritariamente atendidas por la mayor parte de los gobiernos jurisdiccionales y por el gobierno nacional.

Señor presidente: ¡Que no sea la autonomía provincial una excusa para desatender a la educación de nuestro pueblo! ¡Que no se invoque a la Constitución Nacional y al federalismo para quedar al margen del movimiento nacional a favor de la formación de nuestra gente! ¡Que ningún gobernante esquive el compromiso del Estado que resulta de la consulta popular liderada por el Poder Ejecutivo nacional puesta en marcha hace algo más de seis meses en todo el país!

El esfuerzo financiero conjunto del Estado nacional y de las jurisdicciones educativas para el cumplimiento de las metas de la ley de educación nacional se establecerá en los convenios bilaterales dispuestos en el artículo 12 de la ley de financiamiento educativo.

No hay que temer, señor presidente, al mediano plazo: el compromiso de inversión de recursos del Estado nacional en el sistema educativo no caduca en el año 2010 pues en 2011 y en los años subsiguientes, este parlamento deberá seguir asignando los fondos presupuestarios nacionales necesarios para que las metas de la ley de educación sean realidades en cada rincón de la patria; su artículo 131 lo prescribe claramente y sin fecha de término.¹

No hay que confundir, señor presidente, la concertación de convenios bilaterales entre el Poder Ejecutivo nacional y las jurisdicciones educativas como los previstos en el mencionado artículo 131 o en el artículo 12 de la ley 26.075, con la sanción de una ley convenio por el Congreso Nacional y las legislaturas de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires en el marco del inciso 2 del artículo 75 de la Constitución Nacional, estrictamente reservada a los “regímenes de coparticipación de contribuciones directas e indirectas” allí previstas y a nuevas transferencias de “competencias, servicios o funciones” a cargo del Estado nacional a las jurisdicciones.

No hay que volver al pasado que tanto dolor nos ha causado, señor presidente; no hay que añorar estrategias de financiamiento y fórmulas jurídico-políticas que han fracasado en la década del noventa, que constituyen una parte significativa del fracaso de las políticas educativas de la Argentina de entonces, que condenaron a su suerte a nuestras provincias y que, precisamente por ello, estamos tratando de dejar definitivamente atrás. Me refiero al Pacto Federal Educativo cuya concertación y formalización fueron “prescriptas” en el artículo 63 la Ley Federal de Educación y que tanto el Estado nacional como las provincias y la Ciudad de Buenos Aires “formalizaron como leyes” y, en muy poco tiempo, se transformaron en letra muerta, en deuda del Estado y de los gobiernos con el pueblo.

En cambio, señor presidente, celebremos este hito histórico para quienes confiamos en las escuelas y los docentes como herramientas a favor de la justicia social, de la igualdad, de la calidad de vida. Celebremos con genuino optimismo social y pedagógico los trece años de escolaridad, la jornada extendida o completa de la educación primaria, las veinticinco horas de clase semanales de la educación secundaria, los cuatro años de estudios para acceder a titulaciones docentes para la educación inicial y la educación primaria, la disponibilidad de vacantes para todos los niños de cuatro años de edad cuyas familias las requieran.

Asumamos, señor presidente, como representantes de nuestras provincias, como miembros del Poder Legislativo nacional, como ciudadanos responsables y comprometidos con el bien común y el bienestar de nuestro pueblo, que la educación es un asunto de Estado, que la política educativa debe trascender coyunturas e intereses sectoriales y constituirse como política de Estado. Y que para ello, es imprescindible diseñar y jerarquizar un escenario de concertación, de construcción de consensos imprescindibles para que las líneas de acción prescriptas en la ley de educación nacional se concreten en todas las escuelas del país y para que los logros sean homogéneos sin excluidos ni desfavorecidos. Sea, entonces, el Consejo Federal de Educación ese escenario; sean sus acuerdos interjurisdiccionales y sus resoluciones vinculantes previstas en el artículo 118 el origen imprescindible de todas las reglamentaciones nacionales que cualquier ley nacional necesita. No se trata de avasallar a las jurisdicciones sino de asegurar su voz, su voto, su participación, su decisión.

Así, señor presidente, el federalismo y la autonomía de las provincias no sólo se declaman. Por el contrario, la Nación y las provincias asumen responsabilidades, acuerdan y coordinan políticas, y articulan inversiones y líneas de acción. Así, entre todos los responsables del Estado se garantiza el derecho a la educación de todos los argentinos y se aporta a la construcción de la justicia social y del futuro de nuestro pueblo.

15

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR JAQUE

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL (P.E.-424/06).

Señor presidente:

En los tiempos que vivimos la educación es la principal riqueza de un país, porque es este factor el que incide en el capital más importante de una Nación, que es el capital humano. Sin educación no hay posibilidades de hacer un país en serio, una Argentina competitiva internacionalmente, en definitiva, una Argentina libre.

La educación es, en el siglo XXI, el nombre de la justicia social porque es la mejor herramienta para fomentar el ascenso social en la era de la sociedad de conocimiento. Como dice el ministro Daniel Filmus “Hablar de democracia o de igualdad tiene que ver con que sea la capacidad de los chicos lo que defina su futuro y no las condiciones de la cuna”. En un país y en un continente profundamente desiguales, apostar a la educación es la mejor manera de asegurar la equidad. No podemos seguir con sociedades fragmentadas, con sistemas educativos desiguales, con barreras invisibles entre nosotros. Durante el debate se ha mencionado la diferencia entre igualdad y equidad. Apoyo esta diferencia conceptual y sostengo que es el deber del Estado asegurar la igualdad de oportunidades para lograr la equidad.

En el año 2001, la Argentina enfrentó el derrumbe en cuatro aspectos. Por un lado, el quiebre de nuestra economía. Por otro lado, el naufragio social en que más de la mitad de nuestra población se vio sumergida. Esto desencadenó una crisis de representación política y detrás de estos tres fenómenos una profunda crisis de valores. Después de tres años de crecimiento económico nuestro país ha logrado superar la crisis económica. La mejora de los indicadores sociales, especialmente la mejora en el empleo, nos demuestra que estamos saliendo de la crisis social. De a poco la política se va acercando nuevamente a la ciudadanía. Sin embargo todavía estamos en deuda con la crisis de valores, ya que con la grave situación socioeconómica produjo un desborde en la capacidad de contención de las tres instituciones que transfieren valores, la familia, las iglesias y la escuela.

Es por eso que creo que estamos cerrando hoy una etapa importante de la historia nacional apos-

tando por una educación de calidad y en valores. Una educación será de calidad cuando posibilite a los alumnos desarrollar la mayor cantidad de procedimientos y hábitos intelectuales (memorizar, observar, separar variables, clasificar, ordenar, analizar, sintetizar, relacionar, extrapolar, deducir, plantearse hipótesis, resumir, hacer un juicio crítico, etcétera), y cuando ayude a generar personas éticas (honestas, veraces, patriotas, solidarias, respetuosas, con conocimiento de sí mismos, etcétera). Para generar una cultura del esfuerzo, del estudio, para fortalecer un espíritu democrático, porque la escuela no solo debe transmitir conocimientos sino también valores. Decía Sarmiento que “Es la educación primaria la que civiliza y desenvuelve la moral de los pueblos. Son las escuelas la base de la civilización”.

Este proyecto de ley de educación nacional, que surgió de un proceso de debates y de consensos que involucró a 750 mil docentes, más de dos millones de alumnos y padres de las 40 mil escuelas del país, además de contar con el aporte de organizaciones sociales y de decenas de miles de intervenciones recibidas por Internet.

Después de lograr un gran avance con la sanción de las leyes de financiamiento educativo y de educación técnica, es el momento de poner el foco en el tema de la calidad educativa. De esta manera se deroga la Ley Federal de Educación que dio como resultado la fragmentación de más de 50 estructuras educativas y una gran desigualdad de la calidad educativa de las distintas provincias del país.

Esta crisis educativa se puede advertir en los datos relevados en el informe del “Barómetro de la deuda social Argentina” (BDSA) de la Universidad Católica Argentina. La misma señala que más de la mitad de las personas pertenecientes a estratos vulnerables revelaron dificultades para resolver problemas sencillos de comprensión verbal. Esto muestra las falencias de lecto-escritura de nuestros niños y adolescentes, que no comprenden el sentido de lo que leen, no pueden extraer las ideas principales, ni pueden resumir el mensaje propuesto. Afortunadamente, según este informe, la evolución de la baja comprensión verbal marcó una mejoría del 59 % al 46 % de junio de 2004 al mismo mes de 2005 en el promedio de los sectores bajos.

Todos los ciudadanos tienen derecho a una educación de calidad, es por ello que esta situación de desigualdad de oportunidades es totalmente injusta. Por este motivo, el proyecto tiene como puntos destacados que la Educación se define como interés público y política de Estado, que el Estado Nacional garantizará el derecho constitucional a la educación y que para el 2010 se destinará el 6 % del PBI como piso de financiación de la educación. Además, se establece que se deberá asistir a las provincias que atraviesen situaciones de emergencia educativa.

Por esta nueva ley se establece cuatro niveles educativos: Educación inicial, primaria, secundaria y superior; y ocho modalidades: técnico profesional, artística, especial, permanente de jóvenes y adultos, la educación rural, la intercultural bilingüe, la educación en contextos de privación de la libertad y la educación domiciliar y hospitalaria. De esta forma se elimina la figura del polimodal. Además, se establece el secundario obligatorio, se universalizará el nivel inicial y se priorizará la sala de 4.

En las disposiciones transitorias se define una estructura con dos modalidades con 6 años de primaria y 6 de secundaria o 7 años de primaria y 5 de secundaria. Debemos destacar la importancia social de la obligatoriedad del secundario, debido a que la carencia de estudios secundarios implica una importante desventaja laboral. Mientras que sólo un 9 % de la población económicamente activa con residencia en espacios típicos de clases medias no finalizan los estudios secundarios, un 69 % del mismo segmento etario localizado en los espacios residenciales más vulnerables no completaron ese nivel de instrucción. La tasa de asistencia escolar de adolescentes de 13 a 17 años varía de 56 % en los sectores más bajos de la población a 93,1 en los sectores más altos.

Durante la crisis, la grave situación socioeconómica produjo un desborde en la capacidad de contención social de la escuela, exigiendo un cambio en los roles de los docentes. Además de enseñar tenían que atender los problemas de violencia familiar, dar de comer y prevenir los problemas de salud. Deteriorando de esta forma la calidad educativa. Esta es una de las razones por las que se deterioró la calidad y por la que tenemos que acompañar especialmente al docente en el trabajo en el aula. Es muy inteligente la idea de incorporar un sistema de residencia para la formación de los futuros maestros y para ayudar al docente con el grupo de alumnos.

Es importante la creación del Instituto de Formación Docente para garantizar la formación inicial y continua de los maestros y profesores, con parámetros de calidad. Por otro lado, se apuesta a mejorar la carrera docente sin obligar que se abandone el aula para ascender en la escuela.

Para mejorar la participación de la ciudadanía en el gobierno del sistema educativo se crearán nuevos consejos entre los que se destacan el Consejo de Evaluación de la Calidad y el Consejo Asesor del Instituto Nacional de Formación Docente. Se establecerá que las decisiones del Consejo Federal de Educación tendrán carácter obligatorio.

En cuanto a los contenidos comunes se pone el énfasis en el compromiso democrático y en la identidad cultural argentina y latinoamericana. Se establece la obligatoriedad de una segunda lengua y del acceso y dominio de las nuevas tecnologías. Hoy

en día, según datos del BDSA, el 51 % de los sectores más bajos no tiene computación en la escuela contra el 8,7 del grupo de mayores ingresos.

Según Emilio Tenti Fanfani, en un análisis comparado de la educación latinoamericana, titulado "La Condición docente", el 80,9 % de los docentes argentinos eligió al acompañamiento y apoyo de la familia como el principal factor que incide en el aprendizaje, siendo el segundo la calidad del docente con un 53,3 %. Para fomentar el acompañamiento familiar es necesario establecer una campaña de marketing educativo en los medios de comunicación. La educación formal a veces compite con los medios de comunicación, que en algunos casos estigmatizan como disvalor el esfuerzo en el estudio. Es importante entonces que el debate sobre la calidad educativa también se instale en la agenda pública a partir de una campaña publicitaria. Por este motivo el proyecto de ley prevé la creación de un canal de televisión educativa y propone fortalecer el portal de Internet Educ.ar.

Señor presidente, por todos estos motivos, adelanto mi voto afirmativo. Muchas gracias.

18

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
CAPOS

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL (P.E.-424/06).

Señor presidente:

Viene a consideración de Esta Cámara el Proyecto de Ley de Educación Nacional, que fuera remitido por el Poder Ejecutivo nacional, y que tuvo un rápido trámite en comisiones, lo que no permitió quizás un análisis más sereno y profundo de los mecanismos legales de que se vale, y de las trascendentes cuestiones que abarca y cuyos efectos marcarán los próximos veinte años de los argentinos, de tal forma que de su éxito o fracaso dependerá nuestro destino como país.

Se puede decir que el fracaso de la Ley Federal de Educación, 24.195, que a 13 años de su vigencia dejó como saldo la existencia de 24 sistemas educativos distintos en nuestro país, que muestran diferentes etapas de avance, a grado tal que tres jurisdicciones, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén, no han desarrollado y profundizado el proceso de aplicación de dicha ley. Y, que frente a esta desoladora realidad urge realizar un cambio conceptual, estructural de las políticas educativas en nuestra Argentina, que permita frenar rápidamente la declinación que ha tenido la calidad de la educación en todos sus niveles.

Ante esta penosa situación, el Poder Ejecutivo nacional vislumbró que la solución al serio problema que se plantea es tomar las riendas de la educación a nivel nacional y provincial, proyectando objetivos y metas comunes para todo el país, previendo un mismo nivel de financiamiento presupuestario para el gobierno nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (artículo 91), instalando al Consejo Federal de Educación como el organismo de concertación de la política educativa nacional, que regulará la responsabilidad concurrente y concertada del Poder Ejecutivo nacional

a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y de los Poderes Ejecutivos de las provincias y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el gobierno y administración del Sistema Educativo Nacional (artículo 113). Todo esto, según reza el artículo 114, se hará conforme a los criterios constitucionales de unidad nacional y federalismo.

La trascendencia del tema hace que esta cuestión deba centrarse en los grandes objetivos, sin que esto signifique perder de vista que se debe torcer rápidamente el brazo a la decadencia de un sistema educativo que afecta y marca a toda una generación de jóvenes. Quizás esto explique que se haya priorizado el valor Educación Nacional, por el gran beneficio que ello implica para la Nación, que ahondar en cuestiones intestinas que sólo generan intensos debates y dificultan el consenso y los fecundos acuerdos, pero tal vez éste sea el camino jurídicamente más adecuado, como sería el de entrar a considerar que no correspondería legislar sobre las facultades que son propias de las provincias, tales como la de elaborar su presupuesto que se nutre en gran parte de la coparticipación Federal, estableciendo el monto o porcentaje del mismo que se asignará a cada área, entre ellas la educación. O acaparar el ejercicio de las facultades Concurrentes correspondientes al gobierno nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al concebir un organismo como el Consejo Federal de Educación que podrá dictar resoluciones obligatorias para las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tal vez desconocieran la voluntad soberana de sus legislaturas.

Quizás, lo dicho, recomiende inclinarse por instalar ya el sistema educativo que propone el Poder Ejecutivo que, con sus mayores o menores virtudes técnico legales, tendría un efecto inmediato, al poder ser aplicable al próximo período lectivo con todos los beneficios que ello acarreará, en vez de optar por el camino más arduo pero acaso técnicamente más acertado que es el de la Ley Convenio.

Permítaseme recordar que la Ley Convenio es un mecanismo jurídico relativamente nuevo para la concertación de políticas federales, es decir acuerdos legales entre las provincias y la Nación que aseguran la deliberación y adhesión autónoma de las distintas jurisdicciones y determinan igual representación para la fiscalización de su implementación. La doctrina las entiende como acuerdos de coordinación para el ejercicio de facultades concurrentes entre Nación y provincias, originadas en el Congreso Nacional al que deben adherirse las provincias por medio de sus legislaturas.

Por otra parte, se debe reconocer y ponderar las propuestas que el referido dictamen propone en

cuanto a la intención de dar una estructura unificada en todo el país, la introducción de la obligatoriedad de la educación secundaria y que las escuelas primarias tendrán una jornada extendida.

Asimismo, se destaca la jerarquización de las modalidades educativas como la especial, la permanente de jóvenes y adultos, la rural, la intercultural bilingüe, la realizada en contextos de privación de libertad y domiciliaria hospitalaria.

Es por ello, y por considerar que es valioso arrancar ahora avanzando en la reestructuración del sistema, sin más dilaciones que podrían perfeccionar el sistema elegido pero retrasar irremediabilmente la formación de nuestros jóvenes, que adelanto desde ya mi posición de votar favorablemente en general el referido proyecto.

19

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR PÉRSICO

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL (P.E.-424/06)

Señor presidente:

Hoy es un día muy importante para la educación y el futuro de los jóvenes de la Argentina. La sanción de una ley de educación, que reemplazará a la actual ley, constituirá un verdadero paso adelante en el diseño de un nuevo proyecto educativo nacional, que sea verdaderamente inclusivo, alineado con el modelo de desarrollo económico con justicia social, que impulsa el gobierno nacional. La ley de educación no es una ley más, sino que tiene para todos nosotros, y para nuestros hijos, una relevancia estratégica fundamental. El proceso de consultas y opiniones que se ha llevado adelante en el desarrollo de esta ley es una muestra positiva de crecimiento democrático. Es decir, señor presidente, que reinstalar a la educación como política de Estado, implica inexorablemente, definir el modelo de país que queremos para nosotros y las generaciones futuras.

En el proyecto bajo análisis, la sociedad, define a la educación como un bien público, por lo que el Estado recupera la responsabilidad indelegable en la materia. Esto no colisiona con la circunstancia que la familia es el agente natural y primario de la educación, sino que el Estado está obligado a proporcionar a sus habitantes la realización plena del derecho a la educación, en cumplimiento de la garantía constitucional.

Esta ley que hoy debatimos tiene la virtud de concebir la educación como un derecho social, lo que queda expresamente reconocido por el texto legal, brindando oportunidades para todos los habitantes de nuestro país, y poniendo foco en aquellos menos favorecidos. Las modalidades incorporadas a la ley como la educación especial, la educación permanente de jóvenes y adultos y la educación ru-

ral entre otras, conforman un nuevo paradigma de igualdad y justicia social en la Argentina. Es de esperar que las distintas provincias ayuden a llevar a todos los niños y niñas de nuestro país los beneficios de esta ley.

La finalidad de la educación es la promoción humana, la formación integral de la persona lo que le permite definir su proyecto de vida con fundamento en valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto por el otro, justicia, responsabilidad y bien común. Es decir, el hombre sólo se realiza en una comunidad que se realiza.

El proyecto que hoy tratamos en este Honorable Senado ha contemplado, como objetivo de la educación inicial, atender las desigualdades educativas de origen social y familiar para favorecer una integración plena de todos los niños y niñas en el sistema educativo. Esto no puede pasar desapercibido, sino que debe ser destacado en este debate. Estamos dando un paso adelante en una deuda que tenemos con lo sectores menos favorecidos desde hace muchos años; estamos generando oportunidades y preparando las bases de un nuevo modelo de desarrollo. Estamos, en definitiva, poniendo en práctica los ideales de igualdad y justicia tantas veces invocados en este recinto.

Hemos discutido también sobre la calidad educativa, y este proyecto la contempla como aspecto principal. Se ha señalado, durante el debate nacional que a pesar del incremento de “cantidad” de educación, no ha mejorado la “calidad” de la misma. Creo que este proyecto tiene la virtud de establecer las bases para esta mejora. Ello se logrará poniendo en marcha la política nacional de formación docente contemplada en la ley, y utilizando las herramientas de evaluación periódica que la misma contempla. Jerarquizar y revalorizar la función docente es, sin duda, una tarea impostergable que debe ser el centro de nuestros esfuerzos en materia de calidad educativa. La comunidad docente ha realizado esfuerzos incommensurables durante los últimos años y es una pieza clave para asegurar la calidad educativa. Por ello es necesario asegurar que esta revalorización se lleve adelante, y así lo hace la ley.

Quisiera también, señor presidente, compartir una reflexión con los señores senadores: el debate propuesto desde el gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación, ha mostrado por primera vez en muchos años, un nivel de consenso en los lineamientos básicos que podemos considerar excelente. No sólo en la comunidad educativa, sino también en la comunidad política, que ha mostrado un esfuerzo en mejorar la realidad educativa de nuestro país. Lógicamente se ha producido un debate muy rico y heterogéneo, pero, aún así, hemos logrado coincidir en los grandes lineamientos. Esto es una muestra importante de nuestro avance en la defensa de los valores democráticos, y al mismo tiempo una reafirmación de la identidad nacional.

Debemos tender a un país que aproveche cada día más sus riquezas con desarrollo económico, con un cambio cultural producido desde la educación que nos permita vivir mejor, en el cumplimiento de las normas de convivencia, con más calidad de vida y felicidad para todos los argentinos, y creo que sólo cumpliendo con iniciativas como las propuestas por esta ley y las que propician una mejor educación podremos lograrlo.

Creo que es posible imaginar un país, una patria para todos, inclusiva, plural, con justicia social y crecimiento, con igualdad de oportunidades para todos sus hijos, en la que los únicos privilegiados vuelvan a ser, únicamente, los niños y los jóvenes.

Creo, en definitiva, que estamos más cerca de alcanzar la utopía, por eso, señor presidente, es que adelanto mi voto afirmativo a este proyecto de ley.

20

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA VIGO

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL (P.E.-424/06)

Señor presidente:

Sin duda estamos en tiempos fundantes, está cambiando la época, lo que implica el mundo de la globalización como proceso histórico de orden o desorden planetario; y al mismo tiempo, el espacio que nos toca vivir como argentinos y latinoamericanos, con nuestros dolores históricos y profundas esperanzas y fe en el futuro, a partir del presente que somos capaces de construir.

Una normativa no significa mecánicamente la modificación o transformación de un sistema educativo; sería ingenuo y omnipotente creer de nuestra parte que eso podría ocurrir.

Sin embargo, uno de los aspectos de la crisis de calidad democrática institucional en la década de los 90 en América Latina ha sido la débil y en muchos casos ausente relación entre el Estado y la sociedad, a tal punto que esta situación condujo a una crisis de gobernabilidad en muchos países de la región. Ese déficit fue justificado con la ideología del fundamentalismo de mercado derivado del Consenso de Washington.

A partir de la crisis del año 2001 en la Argentina, que consistió en el agotamiento definitivo de la “teoría del derrame económico” en nuestro continente, que el prestigioso sociólogo francés Ignacio Ramonet definió como “hecho histórico”, ya que para el neoliberalismo tuvo el mismo significado que la caída del Muro de Berlín para el marxismo —esa crisis decíamos—, obligó a nuestros países y a todos sus actores sociales a iniciar un proceso de desarrollo endógeno, “vivir con lo nuestro”, al decir de Aldo Ferrer; el camino de reconciliar al sistema político con nuestro ser histórico.

Este desafío gigantesco, solo será posible si nuestros países son capaces de proyectar a la política educativa como pilar central de una política de Estado, como lo está, demostrando con este proyecto la decisión política del presidente Néstor Kirchner, ya que en la sociedad del conocimiento, la educación es el nuevo nombre de la justicia social y la única generadora de ciudadanía de la inclusión.

Por consiguiente, la importancia del tratamiento del proyecto de ley que estamos debatiendo, refleja la voluntad política del gobierno nacional, que acompañado por los gobiernos provinciales y el conjunto de los actores sociales de la comunidad, no ha eludido las necesidades y exigencias del actual tiempo político de redefinir una ley de educación para la Argentina del siglo XXI.

Al conceptualizar a la educación y el conocimiento en el artículo 2º como “un bien público y un derecho personal y social, garantizado por el Estado”, estamos reconociendo que la educación y el conocimiento son inseparables de un proyecto nacional, que la educación es un potencial humano inalienable del desarrollo integral, y que no podrá existir crecimiento si no implica desarrollo intrínseco de una comunidad capaz de generar densidad nacional, masa crítica cualificada, inclusiva y generalizada.

Desde este sentido, el Estado nacional fija la política educativa y asegura la unidad del sistema a través de la materialización de un verdadero federalismo con sus respectivas particularidades.

Este enfoque se transformaría en abstracto y en una mera intención de deseo sin la especificación del artículo 9º, en la que el Estado garantiza el financiamiento del sistema educativo nacional, según las metas establecidas en la ley 26.075 donde se prevé un 6 % del PBI del presupuesto nacional.

Esta concepción filosófica de la educación que concibe al Estado como organización institucional estratégica proveedora de los servicios sociales que consoliden la ciudadanía del siglo XXI, está muy lejos aquella idea de “Estado máximo” o del “Estado mínimo”, rechazando toda posibilidad que se la considere un bien mercantizable en acuerdos bilaterales de libre comercio con otros Estados, tal como se destaca en el artículo 10.

La legislación anterior había creado un sistema fragmentado, donde lo federal fue deformando en especies de aduanas interiores y cada título o certificado de estudio requería de procesos espinosos para su reconocimiento y validez dentro del propio territorio nacional, de una provincia a otra: al día de hoy existen de 50 a 55 subsistemas.

La nueva estructura con su obligatoriedad a partir de cuatro niveles, con sus ocho modalidades:

1. Educación técnica profesional.
2. Educación artística.
3. Educación especial.
4. Educación permanente de jóvenes y adultos.

5. Educación rural.
6. Educación intercultural bilingüe.
7. Educación en contexto de privación de libertad.
8. Educación domiciliaria y hospitalaria.

Constituyen una mirada de carácter estratégico del país cuya finalidad es aplicar una política que conduzca a la equidad pero a partir del reconocimiento de los niveles de heterogeneidad.

Lo expuesto rompe una visión de muchos años basada en paradigmas dominantes en la sociología de la educación que tenía como premisa la homogeneidad para alcanzar la equidad. Esto transformaba a muchísimos proyectos en un conjunto de buenas intenciones pero que chocaban con la realidad, que es mucho más fuerte; pecaban de gran desconocimiento de la rica diversidad de nuestra comunidad e ignoraban lo esencial: que la educación es un proceso altamente dinámico y complejo.

Aquí quisiera focalizar en algunos puntos que me parecen de naturaleza excepcional y que por primera vez se abordan desde la normativa, asociando la ley con las múltiples realidades, creándose a partir de ella, instancias superadoras en un esquema de retroalimentación.

La educación técnica profesional emerge como una de las modalidades con identidad propia en un país que inicia un proceso de reindustrialización, en la cual, la educación como conocimiento a partir del saber hacer, se transforma en herramienta ineludible del desarrollo local y regional, desarrollo que implica reinstalar el concepto del trabajo con recursos propios y con ideas que tienden a recuperar el reconocimiento de nuestras potencialidades.

La educación intercultural bilingüe constituye un viejo anhelo de provincias como las nuestras, reconociendo las particularidades de las escuelas de frontera: hemos superado el concepto de la “frontera-separación”, reemplazándolo por el de “frontera-cooperación” del Mercosur, como asimismo incorporar y promover el multiculturalismo concertado con los pueblos originarios y con otras etnias, constituyentes del ser mestizo latinoamericano como un todo integral de la diversidad.

La educación en contextos de privación de la libertad es una señal clara de toda la comunidad. A través de este proyecto que hoy sometemos a debate, se desprende que una política de seguridad no se agota en la prevención y eventual represión de las agencias estatales de seguridad (policiales y penitenciarias) y del sistema penal, sino que debe cimentarse en una orientación especial, focalizada e impregnada de cambios culturales, destinada a una verdadera reinserción social de las personas afectadas.

La educación permanente de jóvenes y adultos se dirige a la raíz de una franja social considerable de la Argentina de las grandes brechas sociales que durante mucho tiempo, como consecuencia de las

diversas crisis, fueron cayendo en la cadena de la exclusión como un efecto dominó o mariposa.

Este nivel se constituye en el ariete necesario de una política social de inclusión que tiene como eje a la educación.

Por primera vez, observamos, junto a los otros niveles, que la educación deja de ser una política sectorial para transformarse en vector de un modelo de país.

Esto se ve claramente desde el inicio de la persona al priorizar a los sectores más desfavorecidos la universalización de los servicios educativos desde el nivel inicial. No existe sociedad que tenga como meta la equidad si no comienza por el derecho de los niños/as, de los más humildes.

La escuela adquiere el rol de unidad estratégica pedagógica de desarrollo comunitario.

Ello será viable sólo si los actores de las comunidades, familia, sindicatos, organizaciones sociales, económicas, de la producción y la cultura retoman la alianza fundante en toda la comunidad, donde, reiteramos, el desarrollo personal no es posible sin el desarrollo social. De ahí la importancia de la obligatoriedad del nivel primario y secundario.

Las modalidades de educación especial, la rural, la domiciliaria y hospitalaria terminan con los nichos estáticos con bordes, es decir, donde un nivel significaba una valla infranqueable a otro nivel.

Es necesario que la educación sea un camino articulante en niveles de complejidad creciente entre el nivel primario, secundario y superior.

Nos parece una parte especial del proyecto de ley, la jerarquización que se realiza del otro principal actor y sujeto del proceso educativo: la revalorización social y profesional de la formación docente.

Por primera vez se deja en claro con la implementación del Instituto Nacional Docente, un organismo, una carrera de formación de cuatro años de duración con estándares universitarios de calidad a nivel nacional, asegurados con criterios federales, con representantes de todos los sectores y del Consejo Federal de Educación.

Se atacan las causas de fondo del denominado profesor taxi; como también la creación de la carrera docente en el ámbito estatal, teniendo como base la formación continua. Por fin se brinda una respuesta a este reclamo.

Asimismo, el Estado no se desliga a partir de estas nuevas exigencias de su función social, en lo que hace al reconocimiento a un salario digno y a los beneficios de la seguridad social, jubilación, seguros y obra social.

También quisiera destacar entre los pilares de este proyecto, la culminación de la falsa dicotomía y antagonismo entre la gestión pública y privada. De lo que aquí se trata es de recuperar el sentido nacional y social de la educación regulada por el Estado, en el sentido de establecer con claridad que

los principales destinatarios constituyen los sectores que necesitan inclusión social desde el conocimiento.

Juega un papel central y medular la educación a distancia porque permite incorporar a franjas de poblaciones que no pueden realizar la modalidad “clásica” presencial con las nuevas tecnologías en carácter de herramientas del proceso de adquisición del conocimiento.

Cada vez aparece con más nitidez en la globalización, que la educación es la única actividad niveladora de igualdad de oportunidades, creando comunidades democráticas de transmisión y creación de conocimiento. De lo contrario y en un sentido opuesto, la educación en alianza con las nuevas tecnologías, podría generar una reducida elite de conocimientos ilustrados, una especie de nueva edad feudal tecnocrática, con aristocracias del conocimiento.

Aquí en este punto y ahondando el espíritu democrático que impulsa el gobierno nacional en este proyecto de ley, quisiera destacar las propuestas de canalización de la educación no formal, porque promueven los procesos de participación comunitaria, animación sociocultural y reconversión productiva sin descuidar estrategias de apoyo al desarrollo infantil asociado al desarrollo local.

Por último, no puedo dejar de mencionar lo que en este análisis constituye en mi opinión, el aspecto medular de la ley. La educación cuando se impregna de un hegemonismo didáctico descuida su valor esencial que en su esencia lo constituyen sus contenidos curriculares.

La educación significa la transmisión de la cultura del pueblo; de sus valores y de su ética social, más aun en el siglo de los bloques supranacionales. La educación para la identidad no significa rememorar una educación para la argentinidad refugiada en nuestros actuales límites estatales, como lo fuera a principios del siglo XX. Consiste en recuperar para la educación la identidad de la región de América Latina, mestiza, criolla e indígena donde el todo fue adquiriendo sus pequeñas particularidades, en la relación con la intensidad que adquirió el mestizaje.

El artículo 92 es más que claro cuando especifica en su inciso a) el fortalecer, a partir de la educación, la perspectiva regional latinoamericana, en el marco de una institucionalidad abierta y respetuosa de la diversidad.

Como senadora acompañada de otros colegas presentamos en su momento un proyecto de ley para la incorporación en la currícula en todos los niveles del sistema, la implementación de una cátedra de historia de integración latinoamericana y la necesidad de brindar una mayor agilidad a los reconocimientos de títulos académicos en el Mercosur para el ejercicio de la actividad docente. En el fon-

do, tratar de comprender que los procesos de integración implican libre circulación de bienes y servicios, sobre todo, de personas que es la esencia distintiva entre un mercado común y una zona de libre comercio, para concretar el estado continental que soportaron nuestros libertadores.

El Mercosur nos reexige una comprensión histórica más allá de nuestros actuales límites, porque nuestro gran desfasaje actual surge de la tensión que somos un todo pero que nos cuesta auto comprendernos como ese todo y solamente la historia nos va a generar el mañana a partir de cambiar los parámetros del ayer y hacernos cargo de los desafíos de la hora actual.

La causa de Malvinas, Georgia del Sur y Sándwich no sólo constituye un recuerdo de reivindicación territorial, sino que constituye un punto de inflexión en el reencuentro de América del Sur a partir de la gesta de Malvinas.

La igualdad en el tratamiento de la inclusión para la equidad; para la libertad; la solidaridad y el respeto de los sexos; la diversidad cultural de los pueblos indígenas y sus derechos; el ejercicio de la memoria colectiva y la plena vigencia de los derechos humanos y de los niños, constituyen la única garantía para que la democracia se transforme definitivamente en una opción ética para el desarrollo integral de nuestros pueblos.